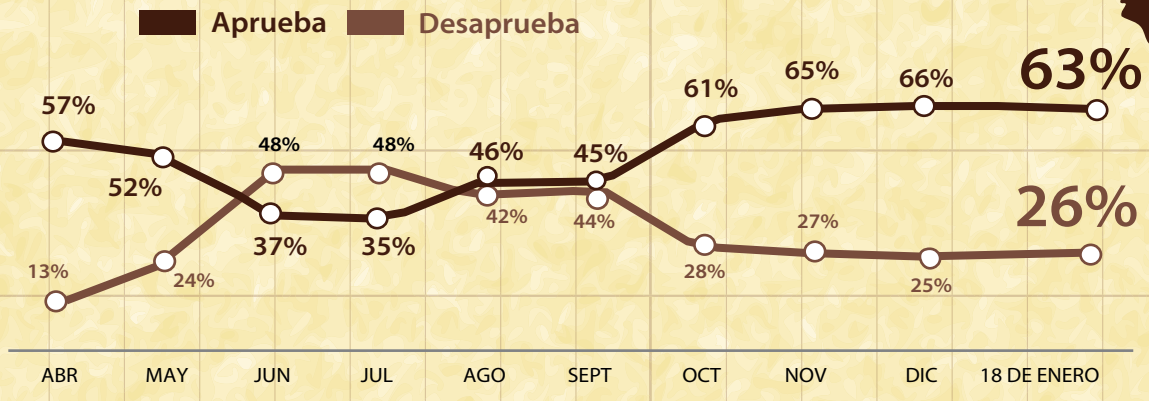
Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina

Orestes Enrique Díaz Rodríguez



Universidad de Guadalajara

Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina

Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina

Orestes Enrique Díaz Rodríguez

Universidad de Guadalajara
2021

Primera edición, 2021

D.R. © 2021, Universidad de Guadalajara
Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad de Apoyo Editorial
Guanajuato 1045
C.P. 44260
Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco, México

ISBN E-book: 978-607-571-212-3
Editado y hecho en México
Edited and made in Mexico

A mi esposa
A mis hijos

Índice

Prólogo 8

Prefacio y agradecimientos 14

Presentación 17

1. La popularidad presidencial, un producto de la opinión pública 27

   El concepto de popularidad presidencial 29

   Las determinantes de la popularidad presidencial, un debate que se niega a morir 37

2. El enigma del nivel de asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido en el gobierno en América Latina 48

   Las decisiones investigativas para la comprobación de la primera hipótesis 48

   Comprobación por países 62

   Resultados obtenidos 71

3. El enigma de la derrota del partido en el gobierno cuando es alta la popularidad del mandatario de turno 73

   El caso Chile 2009-2010. División interna manifiesta. Contexto de la elección presidencial 74

   Aprobación presidencial de Michelle Bachelet 81

   La primera y segunda vueltas electorales 82

   Conclusiones 87

   El caso de México 2012. División interna oculta. Contexto de la elección presidencial 88

Aprobación presidencial de Felipe Calderón 94

La elección presidencial de 2012 95

Conclusiones 106

4. El enigma del éxito del partido en el gobierno cuando es baja la popularidad del mandatario de turno 109

El caso de Chile en 1999-2000. Contexto de la elección presidencial. 111

Aprobación presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 115

La elección presidencial de 1999-2000. 118

Conclusiones 126

El caso de Uruguay en 1999. Contexto de la elección presidencial 130

Aprobación presidencial de Julio María Sanguinetti 134

La elección presidencial de 1999 137

Conclusiones 142

5. El enigma de la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial 144

La escuela de Columbia 144

La escuela de Michigan 146

La escuela comunicacional 148

El modelo de clivajes 155

La escuela racional 157

La función voto de la popularidad 164

Conclusiones. Hallazgos, significado y perspectivas de investigación 170

Bibliografía 177

Prólogo

Ignacio Medina Núñez[1]

No sólo en el ámbito de la ciencia política sino también en la opinión de todos los sectores de la sociedad, destaca el tema de la democracia y de manera particular la forma como son electos los candidatos a los puestos de representación popular y especialmente a la jefatura de una nación, y también la manera como triunfan o pierden quienes se postulan a dirigir el gobierno de un país.

En la región latinoamericana se ve con claridad un proceso de transición desde las prolongadas y férreas dictaduras que asolaron a la región en el siglo XX (Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Duvalier en Haití, Trujillo en la República Dominicana, Pinochet en Chile,…) que llegó a provocar un gran consenso sobre la necesidad de realizar procesos electorales para elegir a los gobernantes. En las dos últimas décadas del siglo XX, el panorama político electoral de gobernantes en América Latina se había transformado, ofreciendo dirigentes civiles en todos los países como resultado de elecciones, lo cual sin duda ofrecía un mejor panorama comparado con toda la época de autoritarismos y dictaduras militares.

---

[1] Doctor en Ciencias Sociales y especialista en Estudios Latinoamericanos. Ha sido académico en el ITESO (Universidad jesuita en Guadalajara) y en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador en El Colegio de Jalisco y coordina el Doctorado en Ciencias Sociales. Correo electrónico: nacho@coljal.edu.mx

Pero otra idea se puede decir de la percepción de la población en general cuando se ven los resultados sociales que han dejado estos gobiernos civiles, en algunos casos tan desastrosos que más de un 30% de los ciudadanos en general preferirían dictadores con tal que lograran estabilizar la economía y mejorar el nivel de vida de los pobladores.

De acuerdo a los estudios de Latinobarómetro, existe un desencanto muy grande en relación a los modelos democráticos; se podría decir que las mayorías ya están decepcionadas de la democracia como para señalar "el declive de la democracia en toda la región" o una situación de "diabetes democrática" que está corrompiendo lentamente todo el mundo de la política. El caso de México ha sido ilustrativo cuando en 2017 solamente el 37% de la población apoyaba el modelo de la democracia[2].

La decepción en general en América Latina ha provenido precisamente de los resultados de la mayoría de los gobiernos civiles, los cuales han realizado las políticas públicas como producto de un modelo neoliberal que llevó a las privatizaciones bajo la idea del libre comercio, y que se han manifestado en una baja tasa de crecimiento económico con el promedio de un 2%, una alta concentración de riqueza en pocas élites, una persistencia y aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, un mayor índice de violencia e inseguridad acompañado de un creciente narcotráfico y una elevación del nivel de corrupción en las esferas gubernamentales.

Con todo esto, sin embargo, habría que mantener la idea de que ha sido positivo dejar atrás los modelos de dictaduras y gobiernos militares, pero habría que desechar el convencimiento que muchos han tenido de que, con el hecho de tener procesos electorales, ya se ha llegado a la vida democrática.

Sin negar la validez de la vía de los procesos electorales, hay que reconocer que la vida con gobiernos civiles electos en

[2] Los datos precisos provienen del estudio de Latinobarómetro sobre el año 2017 y se puede encontrar aquí: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

América latina se ha vuelto más compleja, porque tenemos que reconocer que en esa democracia electoral pueden surgir buenos y malos gobiernos. La manera como se realizan los comicios y sus resultados se ha convertido entonces en una dura y complicada tarea para la ciencia política.

En este interesante libro sobre los *Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina* vamos a encontrar un profundo análisis centrado, mediante un método comparado, en los procesos electorales y sus resultados, resaltando de manera específica la pregunta sobre cómo puede el actuar de un presidente en funciones influenciar para hacer perder o ganar a los candidatos de los partidos gobernantes. La pregunta del autor es muy clara: "¿Cuál es el peso específico que tiene la popularidad presidencial en el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno en los comicios presidenciales en América Latina?" Y en realidad, partiendo del análisis empírico de diversos casos en países latinoamericanos, el autor puede afirmar que la popularidad o impopularidad presidencial pueden anticipar de manera significativa el triunfo o la derrota del candidato del partido en el gobierno. También está claro que las causas del triunfo o derrota político electoral pueden ser múltiples, y el autor analiza diversos casos en los que, con baja popularidad presidencial, el partido en el gobierno logró sacar triunfos, u otros en los que, contando con un presidente altamente popular, su partido sufrió un revés político en el resultado final. Porque siempre hay que contar con otros factores como puede ser la división interna del partido en el gobierno y la fortaleza o debilidad de la oposición que se encuentra en la contienda.

Contando con numerosas variantes y algunas excepciones, de cualquier manera, el autor puede llegar a afirmar que existe un vínculo muy importante entre la imagen del desempeño presidencial y el resultado de los comicios, retomando las tesis de Anthony Downs en su libro *An Economic Theory of Democracy* de 1957 en su versión española de 1973. Esto lo lleva a afirmar en sus conclusiones, de una manera concreta, que "una apro-

bación presidencial igual o superior al 45%, registrada incluso antes del inicio de las campañas electorales, anticipa el éxito de la candidatura oficialista. Mientras una evaluación del mandatario de turno inferior al 40%, anuncia la derrota del partido de gobierno en, prácticamente, el 86% de los casos". O de otra forma, el autor puede afirmar esta importante conclusión: "la percepción sobre el desempeño del partido en el gobierno constituye una determinante clave del resultado electoral en general". Como estas afirmaciones tampoco pueden ser absolutas, también el autor quiere explicar dos enigmas muy interesantes: primero una situación en donde es alta la popularidad del presidente pero el resultado es la derrota del candidato del partido gobernante; segundo, cuando es baja la popularidad del mandatario pero su partido llega a obtener la victoria. El autor afirma que este vínculo entre popularidad del presidente y resultado electoral puede ser influenciado o contrarrestado por factores ya mencionados como la división interna fuerte del partido en el gobierno y por una situación en que la oposición no llega a ser ante la población una opción creíble de gobierno, y ello lo muestra también a partir de los casos analizados.

Una de las grandes fortalezas del estudio son los casos empíricos que se toman en cuenta: 42 procesos electorales en siete países latinoamericanos (Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y México), en una perspectiva temporal que va desde la década de 1990 hasta 2020, lo cual nos da un laboratorio amplio y fenomenal para el análisis realizado, que cuenta también con una perspectiva teórica y una metodología sólida. De esta manera, los lectores de este interesante libro, aunque puedan discutir las conclusiones, llegarán a conocer con detalle los procesos electorales de los países analizados.

Aunque se insiste mucho en el instrumento de las encuestas y la percepción de la población sobre la popularidad del presidente, tal vez un punto que debió analizarse con más detenimiento es el control que todavía ejerce el poder guberna-

mental en diversos países sobre los medios de comunicación y sobre los mismos procesos electorales. Ciertamente el autor señala con fundamento lo siguiente: "No es posible pasar por alto que, el clima de desconfianza, falta de transparencia y de garantías que acompaña a esos regímenes, no deje una impronta destacada en los sondeos políticos que tienen lugar bajo su égida". Esto nos lleva a una pregunta más controvertida: ¿En qué medida los resultados electorales son expresión de la población en general en un proceso transparente de emisión de votos o en qué medida tenemos no solamente una manipulación expresa de los sondeos de opinión sino sobre todo –más grave– de los mismos resultados electorales? Es decir, tenemos que reconocer que todavía existe el fraude electoral en varios países.

Tal vez nos hemos entusiasmado mucho con el paso de las dictaduras a la democracia electoral, pero ¿no queda todavía mucho de autoritarismo en la forma de actuar de los gobiernos civiles en el modelo de la democracia? Empiezo con el caso de la elección del presidente Felipe Calderón en México en 2006, quien hizo triunfar al partido en el gobierno con sospechas fundamentadas de fraude electoral; continúo con el golpe de Estado en Honduras en 2009 y a la reelección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández en 2018, dos momentos en que hubo proceso electoral pero con numerosas acciones comprobadas de fraude electoral; añado la destitución tramposa del presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012 mediante un golpe de Estado legislativo y de la presidenta Dilma Roussef en Brasil en circunstancias parecidas en 2016.

Todas estas situaciones nos llevan no a refutar las tesis del autor Orestes Enrique Díaz Rodríguez sino a señalar cómo en algunos países la popularidad del presidente puede seguir siendo manipulada o, lo más grave, pueden ser falseados los resultados electorales mediante un control dictatorial de gobernantes u opositores que se apoderan del aparato legislativo o judicial, haciendo, por ejemplo, como en el caso de Brasil

en 2018, que Lula da Silva no pudiera presentarse oficialmente como candidato porque gozaba de una amplia popularidad como expresidente para volver a gobernar el país por vía de las elecciones. La llamada transición a la democracia no es un hecho consumado sino que tiene estancamientos profundos e incluso retrocesos claros que también deben seguirse analizando. Es decir, no tenemos todavía en muchos casos un funcionamiento electoral aceptable y creíble donde los resultados expresen realmente los votos de la población. Y además, hay que seguir discutiendo el modelo democrático sabiendo que el concepto no puede reducirse solamente a las elecciones sino que abarca otras numerosas esferas de la vida donde unos pocos siguen definiendo el futuro de los demás.

De cualquier manera, en el análisis de nuestras democracias electorales son bienvenidos estos estudios como el que aquí presentamos porque nos muestran una gran discusión teórica, una abundante referencia a estudios de caso con mucho detenimiento, y diversas propuestas para entender mejor los problemas de la política contemporánea en América latina.

Prefacio y agradecimientos

A lo largo de cuatro años, de 2011 a 2014, el diario jalisciense *El Informador*, me solicitó analizar para sus lectores los comicios presidenciales que tuvieron lugar en este intervalo en varios países latinoamericanos. Los análisis cubrían la etapa previa a que los votantes acudieran a las urnas así como la propia valoración del desenlace. No tuve entonces otra opción que dar seguimiento minucioso al desarrollo de varias campañas presidenciales, registrando de forma detallada los sucesos sobresalientes que involucraban a los candidatos favoritos, evaluando las interpretaciones de analistas locales y foráneos, las tendencias que indicaban las encuestas de intención de voto y el eventual impacto en la votación del comportamiento de variables macroeconómicas, políticas y comunicacionales.

Como resultado de la experiencia registré una observación: los pronósticos electorales que analistas y politólogos locales y foráneos se atrevían a publicar en la prensa en medio de las campañas dependían, absolutamente, de los resultados que iban arrojando las encuestas de intención de voto. Jamás hicieron uso de otra herramienta. Por supuesto, cuando el resultado electoral contradijo abiertamente las tendencias de intención de voto anunciadas por las encuestadoras, como ocurrió con frecuencia, el análisis político también fue engullido por el agujero negro del descrédito.

La pregunta que me formulé entonces fue si acaso politólogos y analistas no podrían auxiliarse de un instrumento diferente a la encuesta de intención de voto en su propósito de predecir, con un margen satisfactorio de certeza, el eventual resultado electoral.

Intuí que si esa herramienta existía no podía ser otra que el método comparado y para complementarlo, identifiqué un número de variables claves que, a mi juicio, condicionaban el resultado de los comicios presidenciales: el estado de la economía, la popularidad del presidente, las debilidades y fortalezas de los candidatos, la dinámica de la política de los escándalos, la estructura partidista que respalda a cada aspirante, el financiamiento de campaña y la irrupción de eventos no previstos que impactan la contienda. El análisis del comportamiento de cada variable en el transcurso de la campaña finalmente indicaba, aunque a veces de manera tenue, cuál candidato contaba con mayores probabilidades de imponerse.

Sin embargo, el procedimiento tenía, entre otras, dos carencias fundamentales. En primer lugar, era incapaz de definir el peso específico que cada variable tenía en el desenlace electoral. En segundo, no parecía viable su conversión en un procedimiento que cumpliera mínimamente las exigencias de un instrumento de carácter científico. Adicionalmente, el propio propósito de predecir elecciones es acogido con un fuerte escepticismo por la mayoría de los politólogos.

El proyecto hacía aguas. Era visible e innegable. Fue entonces que una revisión mucho más exhaustiva de la literatura me llevó a comprobar que, desde inicios de los años 80, politólogos norteamericanos habían desarrollado modelos econométricos de predicción del resultado de los comicios presidenciales en Estados Unidos con resultados aceptablemente satisfactorios. El común denominador de los modelos es que tienen como eje la medición de la popularidad del gobernante de turno y que comprobaron empíricamente el nivel de certeza de sus pronósticos.

Con base a la observación, decidí investigar cuál es el peso específico que tiene la popularidad presidencial en el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno en los comicios presidenciales en América Latina. No tenía entonces la menor idea de en qué magnitud la popularidad del presidente en turno podía anticipar el resultado electoral del oficialismo en el continente, pero intuía que durante el proceso de comprobación empírica otros enigmas de mucho mayor calado no harían nada más que emerger. Y en efecto, no pasó mucho tiempo para verlos erigirse de forma desafiante frente a mí no dejándome otra alternativa que, cuando menos, tomar nota de los mismos: atendiendo a qué criterio, por ejemplo, se clasifica como alta o baja la popularidad de los presidentes; por qué razón el partido en el gobierno consigue retener el poder cuando el desempeño del mandatario en turno es bajo o viceversa, por qué no logra retenerlo pese a que el gobernante en turno cuenta con una alta aprobación; por qué la popularidad presidencial tiene capacidad anticipativa del desenlace electoral y cómo impacta ese hallazgo nuestra interpretación del potencial explicativo de las teorías sobre las determinantes del voto.

El libro que usted tiene en estos momentos ante sí, expone las sorprendentes respuestas a las que arribé una vez que me lancé a esclarecer esos enigmas.

Quiero agradecer la enorme contribución que dos distinguidos investigadores, Azul América Aguiar Aguilar y Jaime Preciado Coronado, han tenido tanto a lo largo del proceso de concreción de los resultados investigativos que aquí se exponen así como con la propia publicación del libro. El asesoramiento y compromiso de ambos, sin dudas, tienen mucho que ver en que este manuscrito haya podido llegar finalmente a sus manos. Pero, especialmente, agradezco al pueblo mexicano y sus instituciones.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez,
19 de febrero de 2019

Presentación

Aunque la medición del nivel de aprobación de los mandatarios (popularidad) se remonta a los años 30 del pasado siglo, no fue sino hasta inicios de la década de los años 70 que se convirtió en objeto sistemático de investigación por parte de los politólogos. Mueller, fundador de esa línea de investigación, dejó constancia del hecho: "Con una tenaz regularidad en las últimas dos décadas y media, el grupo de Gallup ha planteado a sus muestras transversales del público estadounidense la siguiente consulta: ¿Aprueba o desaprueba la forma en que (el titular) está manejando su trabajo como presidente? Las respuestas a esta pregunta curiosa forman un índice conocido como popularidad presidencial" (Mueller, 1970).

De acuerdo con Mueller (1973) lo que distingue a la aprobación presidencial es que contiene, la opinión individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario en general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral (Mueller, 1973).

Gracias a Neustadt, quien en un tiempo fungió como asesor presidencial, Mueller conoció la relevante atención que los mandatarios estadounidenses brindaban al comportamiento de sus niveles de aprobación. El enigma que a partir de entonces lo obsesionó, al igual que a centenares de investigadores que hasta el día de hoy siguieron sus pasos, fue esclarecer cuáles factores explicaban la dinámica de altas y bajas de la popularidad del titular del ejecutivo.

A inicios del presente siglo los estudios sobre las determinantes de la popularidad presidencial fueron agrupados bajo la denominación de función popularidad. Sin embargo, a fines de la propia década de los años 70 y comienzos de los años 80, surgió una nueva línea de investigación que también tiene por objeto la popularidad del mandatario de turno. Su centro de atención es la capacidad de la aprobación presidencial para anticipar el éxito o la derrota del candidato del partido en el gobierno. En ese sentido, la nueva línea fue acuñada con el término de función voto de la popularidad.

En efecto, a partir de 1979, gracias a Lee Sigelman, la popularidad del mandatario de turno comenzó a formar parte del selecto grupo de variables a las que la ciencia política reconoce potencial explicativo y anticipativo del desenlace electoral. Pero no fue un proceso exento de escepticismo. En aquel entonces la comunidad académica estaba fuertemente influenciada por los hallazgos primigenios reportados por Mueller quien, sin embargo, de forma categórica negaba que la aprobación de los mandatarios pudiera guardar relación con las posibilidades de reelección de los presidentes.

Sigelman (1979) defendió, en primer lugar, que el nivel de aprobación del gobernante de turno anticipaba la posibilidad de su reelección. Cuatro años más tarde (1983), en colaboración con Brody documentó que la popularidad del mandatario también permitía anticipar la victoria o derrota del candidato presidencial del partido en el gobierno aunque éste no fuera el propio titular del ejecutivo.

Los hallazgos de Sigelman y Brody fueron rápidamente respaldados por Lewis Beck y Rice (1982) y dieron lugar a la elaboración de diferentes modelos de pronóstico electoral. Inicialmente, los modelos de pronóstico se basaron sólo en la variable popularidad presidencial, pero en la medida que sus autores buscaron hacerlos más precisos fueron sustituidos por modelos multivariables como los de “Economía Política”

(Lewis Beck y Rice, 1984)[1] que combina las variables popularidad presidencial y crecimiento del producto interno bruto y "Tiempo para el Cambio" (Abraimowitz, 1988), que adiciona como tercera variable de la ecuación el número de mandatos del gobernante de turno. En general, los modelos demostraron una efectividad considerable para anticipar el resultado electoral del candidato del partido del gobierno en el contexto de los comicios presidenciales en Estados Unidos. Por primera vez, se constató que los politólogos no estaban obligados a depender de los resultados de las encuestas de intención de voto para construir pronósticos electorales con niveles satisfactorios de certeza.

Sin embargo, a mediano plazo las contribuciones de Sigelman promovieron dos nuevos enigmas: ¿la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial, también era posible comprobarla más allá de los comicios presidenciales de Estados Unidos? Y, en caso de que aplicara también para América Latina, ¿por qué razón el partido en el gobierno logra imponerse pese a que el mandatario de turno tiene una baja aprobación o no logra retener el poder pese a que el gobernante de turno cuenta con una alta aprobación?

---

[1] El modelo desarrollado por Lewis Beck y Rice (1984) asocia la variable "popularidad del mandatario" con la variable "tasa de crecimiento del PIB", dando lugar a la ecuación de v= c+ pp (x) + tc (y), donde "v" = voto presidencial, " c" es un valor constante, "pp" es popularidad presidencial en junio del año electoral, "(x)" es el equivalente de incremento del caudal de votos por cada unidad que crezca la popularidad del mandatario, "tc" es la tasa de crecimiento del segundo trimestre del año electoral y "(y)" es el equivalente de incremento del caudal de voto por cada unidad que refleje la tasa de crecimiento del PIB. Una evaluación más actualizada de la serie temporal original empleada por Lewis- Beck y Rice en 1984, fue realizada por el propio Lewis- Beck en esa oportunidad de conjunto con Tien (2016), evidencia que la ecuación predijo correctamente en quince casos al candidato ganador de la votación popular y en tres casos el pronóstico resultó fallido. En tanto, con respecto al pronóstico del porciento de votos a alcanzar por el oficialismo, la desviación promedio de la serie fue cercana a 3 puntos porcentuales (Lewis-Beck y Tien, 2016).

Echegaray (1996) encaró el primero de los enigmas comprobando que en América Latina también aplicaba la pauta de que la popularidad del presidente de turno anunciaba el éxito o la derrota electoral del candidato del partido en el gobierno. Sin embargo, ciertas características de la muestra que eligió impidieron tomar su hallazgo como definitivo. Echegaray se vio limitado a seleccionar las primeras dos elecciones después de la transición a la democracia por lo que el autor tuvo que reconocer que no podía asegurar que su hallazgo no lo condicionara la existencia entre los votantes de una especie de luna de miel con la democracia. El autor también incluyó en la muestra comicios no competitivos, como los celebrados en Colombia en la época en que regían los acuerdos del Frente Nacional que limitó la competencia política a dos partidos y también los celebrados en México en los años 90, cuando el sistema de partidos tenía un claro carácter hegemónico. Por último, sus resultados comprobaron la asociación entre popularidad presidencial y voto por el partido en el gobierno solo en la primera vuelta electoral. En cambio, la verdadera contribución de Echegaray consistió en alertar que el votante latinoamericano se mostraba dispuesto a respaldar los aspectos políticos del desempeño presidencial por encima de los resultados económicos.

En 2007 Gramacho intentó dar continuidad al tema, pero el número de casos (15) no sólo era mucho menor a la muestra empleada por Echegaray (30) sino que además la selección se hizo atendiendo a la variable dependiente e incluía comicios generales celebrados en Norteamérica. Por consiguiente, mientras la solución del primer enigma no se pudo considerar como definitiva, el esclarecimiento del segundo, sencillamente, permaneció sin abordarse hasta la actualidad.

La investigación que presento se propuso solucionar ambos enigmas. Con ese propósito en el primer capítulo investigo, en primer lugar, el vínculo entre Opinión Pública y popularidad presidencial. Si la popularidad presidencial tiene la capacidad de anticipar el éxito o derrota del partido en el gobierno,

como indicador de la opinión pública qué características le son atribuibles. ¿Qué es lo que refleja la aprobación presidencial, saber o doxa? ¿Se trata de una elaboración especializada sobre el real estado de la cosa pública o de una mezcla entre los ingredientes de cualquier estado mental con datos sobre cómo se gestiona la cosa pública? Tratándose de una opinión difusa, ¿se invalida su nexo con la democracia?

En segundo lugar, en el capítulo me adentro en la comprensión del concepto de popularidad presidencial e investigo a su vez las teorías sobre las determinantes de la popularidad presidencial. El propósito perseguido fue responder las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los elementos componentes de la aprobación presidencial? ¿Cuáles son las diferencias entre popularidad presidencial, popularidad gubernamental, evaluación y confianza presidencial? ¿Las determinantes decisivas de la popularidad presidencial son de naturaleza política o económica? ¿Las investigaciones reportaron estabilidad o inestabilidad en la asociación de la popularidad con sus determinantes?

El capítulo dos lo dedico a exponer, en primer lugar, las decisiones investigativas que tomamos previamente a lanzarnos a comprobar empíricamente si en los comicios presidenciales en América Latina tiene lugar una asociación robusta entre popularidad presidencial y el éxito o derrota electoral del partido en el gobierno. Considero como robusta una asociación entre dos variables cuando en la mayoría predominante de los casos en que se encuentra presente una de ellas, también resulta posible comprobar a su vez la manifestación de la otra. Expresado en valores numéricos, un vínculo es de naturaleza robusta cuando manifiesta una coincidencia entre las variables superior a las dos terceras partes de los casos (67%+1). Se trata de un nexo consistente al punto que a su vez puede ser identificado como eventual pauta del comportamiento.

Las decisiones investigativas tomadas tienen que ver con:

a) Los criterios seguidos en la selección de los países y comicios presidenciales considerados.

b) El fundamento que rigió la clasificación de la popularidad de los mandatarios en alta, intermedia o baja.
c) El argumento que guio la definición de que el procedimiento de toma de lectura de la popularidad tiene que tomar en cuenta que cuando investigamos comicios presidenciales hay que diferenciar entre las elecciones de reelección sucesiva y los comicios en que el candidato presidencial del partido en el gobierno no es el titular del ejecutivo.
d) El fundamento que presidió la selección de las casas encuestadoras.

En segundo lugar, el capítulo a su vez contiene los resultados arrojados por la comprobación empírica de la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido en el gobierno. En función de ello presento los cuadros de recolección de datos por cada país que contienen el contraste de la popularidad del presidente de turno con el resultado electoral obtenido por el partido o coalición de gobierno, las tasas de asociación obtenidas en general y, también, en los escenarios específicos cuando el presidente contiende por su reelección sucesiva y cuando el candidato presidencial del partido de gobierno no es el titular del poder ejecutivo, así como la relación de casos donde se registró que la asociación entre popularidad y el éxito o la derrota del oficialismo no fue consistente.

El hallazgo fundamental que reporto es que en los comicios presidenciales en América Latina en el 85.71% de los casos la popularidad del presidente de turno tendió a anticipar el éxito o la derrota del candidato del partido en el gobierno. El carácter de la asociación fue sólido o robusto tanto cuando el presidente de turno constituye el candidato presidencial (83.33%) como cuando no lo es (86.11%). La asociación entre popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido en el gobierno no se limita a las primeras elecciones pos transición ni tampoco al resultado de la primera vuelta.

En el tercer capítulo, analizo dos de los casos en los que el partido o coalición de gobierno perdió la elección presidencial pese a que el mandatario de turno se encontraba bien evaluado, (Chile, 2009-2010; México, 2012). Para el análisis de ambos casos inicialmente formulo la hipótesis pertinente, defino sus conceptos clave así como los indicadores que me ayudaron a comprobar o refutar su veracidad en base a la revisión de literatura y documentación empírica relacionada con esas experiencias. En el capítulo, por tanto, consulto de manera amplia textos de académicos locales y regionales que conocen a profundidad el trasfondo de la dinámica de los comicios presidenciales de los países donde no se reportó consistencia entre las variables popularidad presidencial y el resultado electoral del partido en el gobierno. La característica que asocia a esos casos es que la alta popularidad del gobernante de turno no se transfirió en votos para el candidato presidencial de su partido o lo hizo de un modo incapaz de garantizar la victoria del oficialismo en los comicios presidenciales. El análisis confirmó la viabilidad de nuestra hipótesis acerca de que la falta de unidad del partido gubernamental, en el momento de participar en la campaña electoral, es la razón que impide que el oficialismo pueda favorecerse de la alta aprobación que exhibe el mandatario de turno y no alcance a retener el poder. Por división interna del oficialismo entiendo, la participación fracturada del partido o coalición gubernamental en el proceso electoral, como consecuencia generalmente del rechazo de referentes o líderes oficialistas al proceso de selección del candidato presidencial o al programa de gobierno que éste enarbola o representa. Se trata de una expresión de la falta de solución de determinados conflictos internos de la organización que, además de haberse podido manifestar durante el mandato, aflora a su vez en la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder (Panebianco, 1986). La división del partido o coalición de gobierno sitúa a su candidato presidencial en una situación de desventaja crucial antes de iniciarse la campaña.

En el cuarto capítulo, en cambio, analizo dos de los casos en que la baja popularidad de los mandatarios de turno no resultó un inconveniente para que el partido o coalición de gobierno emergiera vencedor de la elección presidencial (Chile-1999-2000; Uruguay, 1999). Al igual que en el capítulo precedente formulo la hipótesis pertinente, defino sus conceptos clave, así como los indicadores que me ayudaron a comprobar o refutar su veracidad en base a la revisión de literatura y documentación empírica relacionada con esas experiencias. Por tanto, reporto también la consulta amplia de textos de académicos locales y regionales que conocen a profundidad el trasfondo de la dinámica de los comicios presidenciales de los países donde no se reportó consistencia en la asociación entre la popularidad presidencial y el resultado electoral del partido en el gobierno. Compruebo que el hecho de que el principal partido de la oposición no constituya una alternativa gubernamental creíble para la mayoría de los votantes, permite al partido en el gobierno conservar el poder pese a que el mandatario de turno cuente con una baja aprobación. Por oposición no creíble entiendo que las declaraciones políticas de la oposición, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, no sirven para prever con exactitud su comportamiento posterior. Si un partido de la oposición no es fiable es incapaz de ganarse la confianza y por tanto los votos de los ciudadanos racionales (Downs, 1973). Allí donde la oposición no es creíble el candidato del partido o coalición de gobierno se sitúa en una situación de ventaja crucial desde antes de iniciarse la campaña.

En el capítulo cinco, a la luz de las comprobaciones empíricas de los capítulos precedentes hago una revisión de las teorías sobre las determinantes del desenlace electoral. El propósito de analizar las teorías en el capítulo final tiene los siguientes beneficios, por una parte, posibilita identificar si alguna de esas explicaciones ayuda a comprender por qué razón la popularidad presidencial tiene la capacidad de anticipar el éxito o la victoria del partido en el gobierno y, en segundo lugar,

permite inferir los efectos que tiene ese hallazgo para una eventual reformulación del potencial explicativo de esas teorías.

En las conclusiones relaciono los hallazgos de la investigación, expongo el significado que atribuyo a cada uno y destaco las perspectivas de investigación que considero se abren a partir de los mismos.

En específico, reporto como hallazgos de la investigación los siguientes:

1. En los comicios presidenciales en América Latina la popularidad presidencial anticipa de manera potente el éxito o la derrota del partido en el gobierno.
2. El vínculo entre popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno es factible de ser contrarrestado por la influencia de las condiciones siguientes: a) La afectación del partido o coalición de gobierno por un proceso de división interna, manifiesta u oculta, en el momento que enfrenta la campaña electoral. b) El hecho de que la oposición no constituya una opción de gobierno creíble. La característica más relevante de ambos factores es que tienen la capacidad de situar al candidato presidencial del partido en el gobierno en una posición de desventaja o de ventaja crucial antes de que se inicie la campaña.

El significado que atribuyo al primer hallazgo es que corrobora la teoría downsiana acerca de que la elección versa sobre el desempeño del partido en el gobierno. Si la popularidad presidencial tiene la capacidad de anticipar el éxito o la derrota del partido en el gobierno se debe a que la aprobación del mandatario de turno constituye un reflejo más o menos preciso de la percepción general que los ciudadanos tienen de ese desempeño.

Por su parte, el significado que atribuyo al segundo hallazgo es que comprueba el potencial explicativo de las teorías sobre la oposición no creíble (Downs, 1973) y sobre los efectos

negativos de la falta de unidad en los compromisos electorales de los partidos (Panebianco, 1986).

Por último, considero que los hallazgos abren perspectivas de carácter aplicativo en la dirección de posibilitar la elaboración y comprobación de pronósticos electorales sobre el éxito o la derrota del partido o coalición gubernamental en los comicios presidenciales de América Latina. Al fundamentarse en las premisas de la investigación, los investigadores no tendrían necesidad de depender de la interpretación de los resultados que arrojan las encuestas de intención de voto.

Los hallazgos también abren perspectivas de carácter investigativo en las siguientes direcciones:

1. La comprobación en comicios presidenciales de países no seleccionados en nuestra muestra, de la existencia o no de nuevos factores con capacidad de contrarrestar la asociación entre la aprobación del mandatario de turno y el éxito o la derrota del partido o coalición en el gobierno.
2. La identificación de la variable con capacidad de anticipar el resultado electoral en el escenario en que, debido a la eliminación del oficialismo, la contienda electoral se dirime entre dos fuerzas políticas no gubernamentales. De acuerdo con nuestra base de datos, el escenario descrito se manifiesta en aproximadamente el 11% de los comicios presidenciales en América Latina.

1. La popularidad presidencial, un producto de la opinión pública

La popularidad presidencial, como juicio individual o colectivo no asociado a un tema en específico o asunto electoral, que resume lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno, constituye una medición y un indicador del estado de la opinión pública. Entonces, la comprensión conceptual del fenómeno de la opinión pública, es sumamente valiosa para interpretar de forma adecuada la propia singularidad y las potencialidades de la propia medición.

Entre las diversas concepciones existentes con respecto a la opinión pública, nuestra investigación tiene por sustento la definida por Sartori (1992) como "un público o multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa pública" (p. 171).

De modo que no invalida su existencia ni tampoco demerita su importancia concebirla como vehículo de expresión de una multiplicidad de públicos y resultado de la interacción entre opiniones e informaciones sobre el estado de la cosa pública[1].

[1] La opinión pública no se interpreta en este trabajo a partir de una de sus facetas o expectativas más sofisticadas, es decir, como un proceso deliberativo que involucra ciudadanos atentos a los asuntos públicos y participantes activos de la vida democrática en sus sociedades (Habermas, 1998). Por otra parte, tampoco nuestra investigación abraza el paradigma de que la opinión pública no existe (Bourdieu, 1972). Más bien, ambas concepciones nos previenen de evitar eventuales simplificaciones del fenómeno e invitan a un abordaje de la opinión

Pero la concepción de la opinión pública estaría incompleta si no incorporamos otras precisiones del propio Sartori (1992). De acuerdo con el autor:

1) La opinión es doxa, no es episteme, no es saber o ciencia.
2) Es de constitución variopinta debido a resultar un producto de la mezcla entre los ingredientes de cualquier estado mental (necesidades, valores, disposiciones) con datos sobre cómo se gestiona la cosa pública.
3) Se le suele considerar autónoma, pero en determinados regímenes políticos constituye un asunto crucial distinguir entre opinión *en* y *del* público.
4) De ninguna manera se forma sola por sí misma, sino que en el origen de las opiniones difusas están siempre pequeños grupos difusores.
5 Existe un nexo constituyente entre la opinión pública y la democracia, pues la primera es el fundamento esencial operativo de la segunda.

Los rasgos generales de la opinión pública destacados por Sartori, resultarán cruciales en la propia comprensión del fenómeno de la popularidad presidencial, una vez que la investigación esclarezca cuál es la naturaleza de la asociación que esta última tiene con el éxito o la derrota del partido en el gobierno.

La pregunta que sigue es si podemos confiar en que las encuestas revelen de manera más o menos diáfana la dinámica de un fenómeno tan complejo como es la opinión pública. “Las encuestas, son un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho” (Cabrera, 2010).

Diversos autores han expresado reservas apuntando a la proclividad de que las encuestas produzcan mensajes ambiguos, debido a la falta de información o conocimientos de los

pública que tiene por premisa el reconocimiento de su enorme potencial de sofisticación.

encuestados (Converse, 2006) o las deficiencias de los instrumentos empleados (Bourdieu, 1972; Zaller, 2014); sin embargo, sus resultados a nivel agregado tienden a corresponder de forma aceptablemente precisa con el contexto real demostrando estabilidad a lo largo del tiempo (Page y Shapiro, 2010).

Trasladar la conclusión de Page y Shapiro al fenómeno concreto de la popularidad presidencial, significa que a nivel agregado la medición tiende a reflejar de forma aceptablemente precisa lo que los ciudadanos piensan con respecto a la gestión que los mandatarios hacen de la cosa pública.

La afirmación facilita a su vez el abordaje de la eventual influencia de la medición sobre el comportamiento de gobernados y gobernantes. Constituyendo una imagen más o menos precisa de cómo los ciudadanos perciben en un momento dado y, de forma general, la gestión del mandatario de turno, obviamente tiende a ser tenida en cuenta por los gobernantes. Ello atañe, en primer lugar, al campo de las decisiones y de las políticas públicas. Dado su carácter variable la aprobación presidencial tiende a formar parte de los dos tipos principales de *inputs* (demandas y apoyos) que son procesados en instancias clave del sistema político, dando lugar a ciertos *outputs* y a un proceso más o menos continuo de retroalimentación. En tanto, también puede constituir en segmentos específicos de los gobernados un atajo empleado para respaldar decisiones relativas al apoyo, rechazo o asunción de una posición neutra con relación al quehacer y la eventual continuidad del partido o coalición gubernamental de turno.

El concepto de popularidad presidencial

Un rasgo sorpresivo en la abundante literatura que tiene por objeto de estudio la popularidad presidencial[2], es que el con-

[2] Paldam (2008), estimó que el tema ha sido abordado directamente en 300 artículos y más de 100 libros en los últimos 30 años, de los cuales comprobamos

cepto no es resultado de un prolongado y sofisticado debate académico. Su origen responde al interés en conceptualizar un tipo específico de encuesta, cuya utilidad para la comprensión de dinámicas que tienen por centro el jefe del poder ejecutivo, no sólo tardó en ser reconocida sino que, prácticamente, se produce de forma accidental.

John E. Mueller (1970), en su estudio primario sobre la popularidad presidencial, describe del siguiente modo el origen del término:

> Con una tenaz regularidad en las últimas dos décadas y media, el grupo de Gallup ha planteado a sus muestras transversales del público estadounidense la siguiente consulta: ¿Aprueba o desaprueba la forma en que (el titular) está manejando su trabajo como presidente? Las respuestas a esta pregunta curiosa forman un índice conocido como popularidad presidencial (Mueller, 1970).

Mueller, reconoció en su trabajo que lo que conduce a que los politólogos comiencen a apreciar las potencialidades de ese indicador después de estar operando desde 1937, es decir, por un lapsus de más de 30 años, es la referencia que casualmente realiza otro académico, Nestaudt, que gracias a su colaboración directa como asesor de la presidencia observó que el índice de Gallup era muy tomado en cuenta por los inquilinos de la Casa Blanca al momento de tomar diferentes decisiones. La conversión del índice en objeto de estudio de la ciencia política se produce, por consiguiente, una vez que se confirma su amplio uso por los políticos de carrera y no como un resultado directo de la intuición o la curiosidad científica pura.

El propio Mueller amplía la comprensión de la definición cuando señala que “el término aprobación presidencial con-

---

que en México se contabilizan más de una decena de trabajos correspondientes a ambas categorías, Buendía, 1996; Domínguez, 1999; Romero, 2000, 2009, 2013; Beltrán, 2002, 2003, 2015; Malagoni y Poiré, 2004; Gómez Vilchis, 2013; Moreno y Mendizábal, 2016.

tiene, la opinión individual o agregada, sobre la gestión de un mandatario de manera general, sin énfasis primario en algún tema o cuestión electoral" (Mueller, 1973).

El señalamiento destaca las características del indicador que pueden contribuir a explicar el amplio uso que ha tenido como "brújula", por parte, principalmente de los políticos y luego, como objeto persistente de investigación por los académicos. Se trata de una opinión personal o colectiva sobre el desempeño del presidente, no asociada específicamente a un tema, sufragio o comicios, que como acertadamente resume Ulises Beltrán:

> … aun cuando puede estar influido por la identidad de las personas con los distintos partidos políticos o contener juicios sobre la personalidad o carisma del gobernante, resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno y, de manera indirecta, sobre su percepción del estado general del país (Beltrán, 2015: sp).

Ochenta años después que Gallup lo patentizara como tipo específico de encuesta y casi cinco décadas desde que se convirtió en objeto de estudio privilegiado de los politólogos, Moreno y Mendizábal (2016), confirman que goza en la actualidad de una métrica "no sólo muy estandarizada (¿En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?), sino también muy sistematizada (se mide continuamente en ciclos trimestrales, mensuales y, en algunos casos, con mayor frecuencia) y muy generalizada (casi todas las casas encuestadoras que realizan estudios de opinión pública suelen medirla)" (Moreno y Mendizábal, 2016: sp).

Wladimir G. Gramacho (2007), investigador que cuenta con varias aproximaciones al comportamiento de la popularidad presidencial en Brasil, consideró necesario distinguir dos dimensiones de la popularidad gubernamental: la popularidad del gobierno en las urnas y la popularidad del gobierno en las encuestas de opinión pública.

De acuerdo con el autor, al menos tres características distinguen de modo importante las dos dimensiones. Primero, la aprobación de un gobierno en las encuestas responde a estímulos diferentes de aquellos que determinan la aprobación de un gobierno en las urnas, pues en el primer caso la elección se da entre la labor del gobierno y una expectativa subjetiva de buen gobierno de la que es poseedor el ciudadano entrevistado, mientras en el segundo, la elección se da entre un candidato o partido que controla el gobierno y otro candidato o partido que se encuentra en la oposición. Es decir, en un caso la selección tiene lugar entre un elemento real y otro abstracto y, en el otro, entre dos elementos reales. Segundo, la popularidad del gobierno puede ser observada en cualquier momento, mientras que la popularidad propiamente electoral sólo es observable cuando se concretan las elecciones presidenciales, lo que ocurre cada cuatrienio o sexenio, en dependencia de la duración del mandato en cada país, por lo que la expresión electoral de un gobierno tiene límites claros y formales a diferencia de la no electoral. Tercero, la popularidad de un gobierno en las encuestas es sobre todo un juicio retrospectivo, generando por tanto un discernimiento mucho menos ambiguo que el resultante de la aprobación electoral de un gobierno, que contempla o asocia dos momentos, juzgar al gobierno de turno (*accountability view*) y seleccionar el próximo gobierno (*mandate view*), que suele resultar en un mensaje ambiguo desde los representados a los representantes.

Siguiendo a Gramacho (2007), la popularidad de un gobierno en las urnas determina si un partido o coalición seguirá controlando el Ejecutivo, o si será desplazado a la oposición, mientras la popularidad de un gobierno en las encuestas, no es propiamente electoral. El autor concluye la reflexión sobre las dos dimensiones de lo que denomina popularidad gubernamental, reconociendo que:

> Aunque distinguibles conceptualmente y empíricamente, las dos dimensiones de la popularidad de los gobiernos están, afortunadamente muy asociadas. Sería desconcertante para el conjunto de las teorías de la democracia que los ciudadanos aprobasen en las urnas, de forma sistemática, gobiernos cuya gestión reprueban en la encuestas de opinión pública (Gramacho, 16).

La distinción realizada por el autor, si bien es bienvenida, se presta también a generar cierta confusión. Por ejemplo, la popularidad gubernamental a la que hace referencia, ¿es un concepto similar al de popularidad presidencial?

Gramacho (2007), emplea popularidad gubernamental como sinónimo de popularidad presidencial, entiende que el contenido conceptual de ambos términos es similar. En general, el asunto puede ser enfocado así, pero no sin antes alertar que, en la práctica, podemos encontrarnos con que se trata de dos mediciones completamente diferentes.

Una revisión de la literatura conduce a constatar que en países como Argentina y Chile, la popularidad gubernamental o del gobierno va referida a la medición del nivel de aprobación de la gestión del gabinete del presidente diferenciándola, por tanto, de la del propio mandatario. Esa especificidad puede dar lugar a que exista una diferencia porcentual importante en los niveles de aprobación de uno y de otro. Por ejemplo, Navia y Morales (2007), analizaron las causas de la diferencia de nueve puntos porcentuales entre la evaluación del desempeño del gobierno y el nivel de aprobación de la gestión de Michelle Bachelet.

La diferencia entre popularidad gubernamental y popularidad presidencial se establece cuando la casa encuestadora, acostumbra preguntar a sus entrevistados separadamente sobre la aprobación al gobierno y al presidente. Así contamos con dos niveles de aprobación. Esta forma de preguntar no es la habitual y claramente busca establecer si existe una evaluación diferenciadora por parte de la ciudadanía entre el desempeño del mandatario y el de su equipo político.

Aunque la no coincidencia entre ambas evaluaciones abre espacios para reflexiones variadas, como regla, la popularidad del presidente mide la gestión del mandatario y su gobierno como un todo único. Precisamente, esa dimensión no desdoblada, es la que es objeto de estudio en la literatura y, por supuesto, también en la presente investigación.

En favor de esa perspectiva hay que recordar cómo Sartori (2003), en su análisis del sistema presidencial parte de reconocer como uno de los tres criterios básicos que definen a ese tipo de régimen, que el presidente nombra y dirige su propio gabinete. "Los gobiernos son una prerrogativa presidencial: es el presidente el que a su discreción nombra o sustituye a los miembros del gabinete" (Sartori, 2003: 98). Por consiguiente, en última instancia, es responsabilidad del mandatario cuando las diferencias entre su propia evaluación y la que alcanza su gabinete resultan relevantes.

La revisión de la literatura arroja también que popularidad y aprobación presidencial habitualmente son empleados como sinónimos. La aprobación del gobierno es la medida más antigua de popularidad presidencial. "Con mucho, la mayoría de los estudios utilizan datos de encuestas recopilados por la compañía Gallup. Desde agosto de 1937 la pregunta de la encuesta dice lo siguiente: Usted aprueba o desaprueba la forma en que (nombre del presidente) está conduciendo el gobierno" (Berlemann y Enkelmann, 2014: 13). Lo que distingue la medición de la aprobación es que la forma en que se formula la pregunta está concebida para que principalmente de lugar a dos opciones de respuesta, aprobación o rechazo. Este instrumento es el más estable y el más utilizado para estudios de popularidad presidencial (Cohen, 1999; Gronke y Newmann, 2000).

En tanto, la evaluación presidencial, "aunque se trata de una medida bastante semejante a la aprobación del gobierno, la principal diferencia reside en la escala de respuestas disponibles para los individuos" (De Paula, 2013: 37). De acuerdo con el autor, la evaluación del presidente permite al entrevistado

manejar un número mayor de respuestas posible, en cualquiera de las dos formas o versiones en que tiene lugar, cuantitativa o cualitativa. En su fórmula cuantitativa se pide al entrevistado que atribuya al presidente una calificación en una escala que va de 0 hasta 100, mientras, en la versión cualitativa, el entrevistado es preguntado cómo evalúa el desempeño de un presidente específico teniendo cinco posibilidades de respuesta: óptimo, bien, regular, mal y pésimo. En el segundo caso se arriba a un índice numérico a través de la suma de los porcentajes de respuesta ubicadas en las categorías de óptimo y bien, que representan el nivel de evaluación positiva atribuida al gobierno.

En cuanto al concepto de confianza en el gobierno, su contenido va dirigido a captar si el entrevistado confía o no en el poder ejecutivo más allá de que apruebe o no la gestión. Se trata de una medición menos generalizada en la que no se encuentran muchos estudios que exploren si la relación entre aprobación y confianza es unívoca y cuando no lo es, qué razones podrían explicar la desconexión. Para De Paula, se trata de un instrumento menos adecuado, una vez que la confianza es un concepto extremadamente subjetivo. A nuestro entender la confianza presidencial es una medición adicional y si se quiere más sofisticada, pero que al mismo tiempo no alcanza la trascendencia propia de la aprobación, probablemente debido a que quien aprueba el desempeño presidencial generalmente tiende también a depositar su confianza en el mismo.

El beneficio de esta breve incursión conceptual es que nos va a permitir definir el instrumento de medición apropiado para nuestra investigación. Esto quiere decir que, a lo largo de la investigación, no incurrimos en el error de que el dato tomado en un país refleje la popularidad del gabinete o la confianza presidencial, mientras en otro sea expresión de la aprobación del mandatario. En la totalidad de los casos la medición tomada en cuenta es la aprobación o popularidad del presidente. En caso de no existir datos de ese tipo específico de medición

entonces empleamos la evaluación presidencial, medición que conceptualmente es muy cercana a la de aprobación, lo cual puede constatarse observando la proximidad entre la pregunta central de la evaluación presidencial con relación a la de la aprobación presidencial: Pensando en una escala de óptimo, bien, regular, mal o pésimo, cómo usted evalúa el desempeño del presidente de la República.

Que la popularidad del presidente se mida a través de una pregunta sencilla realizada a una muestra representativa de ciudadanos (¿En general usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?), no significa que su composición también lo sea. En la literatura, por ejemplo, se han identificado tres componentes o determinantes principales de la aprobación: 1) el desempeño; 2) la personalidad; 3) y el partidismo (Romero, 2009: 8).

El desempeño constituye el componente indiscutido de la aprobación y, por consiguiente, también el más ampliamente investigado (Mueller, 1973; Brody, 1991; Buendía, 1996; Lewis-Beck y Stegmaier, 2000; Stimson, 2004; Magaloni, 2006). Dentro del desempeño, la economía ha sido el objeto privilegiado de atención, sin menoscabar que también se le ha asociado con asuntos coyunturales como guerras o con la importancia de ciertos temas en la agenda. Por su parte, la personalidad tiene en cuenta aspectos como el magnetismo o carisma, la forma de interactuar con el público (Kernell, 2006) y el estilo de gobernar (Neustadt, 1991). Aunque los autores señalados insistieron en explicar la aprobación por intermedio de las denominadas variables personalistas, la postura ha sido considerada insostenible por King (1993) para el caso norteamericano y por Romero (2000) para el caso mexicano. Como tercer componente destaca la predisposición a aprobar la gestión del mandatario si milita o representa al mismo partido con el que se simpatiza, es decir, los ciudadanos más proclives a aprobar al mandatario son aquellos que se identifican con el partido del presidente. “Quienes se identifican con el partido del presidente tenderán

a evaluarlo mejor que quienes simpatizan con partidos de la oposición o se consideran independientes o apartidistas" (Somuano, 2018).

A manera de resumen destacamos que el concepto operativo de popularidad presidencial manejado en la investigación integra tres momentos. En primer lugar, se trata de una de las mediciones más comunes de las encuestas de opinión pública, cuyo propósito es captar el nivel de aprobación de la gestión del presidente en un momento dado de su mandato. En segundo lugar, constituye una opinión individual o colectiva no asociada a un tema en específico o asunto electoral que resume en un juicio sumario simple lo que la mayoría piensa del desempeño del gobierno y, de manera indirecta, sobre su percepción del estado general del país. En tercer lugar, la captación de la opinión tiene lugar a partir de un instrumento que goza de una redacción modelada (¿En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente?), una aplicación regular (se mide continuamente en ciclos temporales), y un uso general (prácticamente es medido por todas las encuestadoras que realizan estudios de opinión pública).

Las determinantes de la popularidad presidencial, un debate que se niega a morir

La literatura sobre las determinantes de la popularidad presidencial está abocada a explicar cuáles son los factores fundamentales que inciden en el comportamiento de la variable. A su vez, las causas identificadas pueden agruparse en dos grupos: las de naturaleza política y las de origen económico. La investigación sobre las determinantes de la popularidad presidencial ha recabado la atención cada vez más creciente de los politólogos, debido a una reevaluación de la comprensión del impacto de la aprobación de los mandatarios en la dinámica del sistema político que comenzó con Mueller (1970) y que,

desde entonces a la fecha, se ha constituido en una prolífica línea de investigación.

Entre los estudiosos latinoamericanos la popularidad presidencial también es objeto de atención en las siguientes direcciones: 1) el debate sobre si sus efectos sobre el proceso de democratización son negativos o positivos; 2) la identificación de las determinantes de la popularidad presidencial en períodos gubernamentales específicos; 3) la función voto de la popularidad.

Por ejemplo, en cuanto al debate sobre los efectos de la popularidad Patricio Navia (2009), ha defendido que la medición sistemática de la aprobación de los mandatarios tiene un impacto controversial en la dinámica de los sistemas políticos de los países en proceso de democratización. Por una parte, tiene implicaciones negativas como la inevitabilidad de las campañas permanentes por parte de las autoridades para asegurar niveles de aprobación mayoritarios, la presión que ejerce contra políticas que pueden ser dolorosas hoy pero que producirán resultados futuros beneficiosos y la proclividad de los sondeos a generar ruido innecesario y desviar la atención de los problemas de fondo. Por otra parte, tiene un papel clave como herramienta adicional de pesos y contrapesos, debido a que "mientras los gobernantes mantengan una aprobación mayoritaria durante su mandato, suponemos que gozan de suficiente legitimidad para avanzar sus iniciativas, aun si estas se distancian de las promesas que hicieron cuando eran candidatos" (Navia, 2009: sp).

La conclusión del autor es que si bien los sondeos de aprobación presidencial presentan desafíos complejos para la forma en que se desarrolla la democracia representativa, su existencia también ofrece enormes oportunidades para entender el comportamiento de los gobiernos (Navia, 2009).

Por su parte, Ulises Beltrán (2015) asegura que la publicación continua de la medición de la aprobación presidencial es un elemento relevante de la democracia de cualquier país,

mientras Moreno y Mendizábal (2016), sostienen que quizá la medición de la aprobación presidencial sea uno de los elementos más notablemente democráticos que aportan las encuestas a la vida política, ya que el Gobierno o el jefe de Estado están constantemente bajo escrutinio y evaluación pública.

En general, en la actualidad existe la visión de que el impacto de la popularidad presidencial es multifacético, así por ejemplo, se asocia la popularidad como factor facilitador para que el presidente lleve a cabo su agenda y con viabilizar la concreción de alianzas gubernamentales con otras fuerzas políticas (Baker y Oneal, 2001), con los resultados electorales tanto en las elecciones intermedias (Kernell, 1977) como los que obtienen los candidatos del partido en el gobierno en los comicios presidenciales (Sigelman, 1979; Brody y Sigelman, 1983; Lewis-Beck y Rice, 1982; Echegaray, 1996) y con procesos políticos de largo recorrido como la confianza institucional y la propia legitimidad de la democracia (Lipset y Schneider, 1983; Mishler y Rose, 2001).

Retomando el tema de las determinantes de la popularidad presidencial, Mueller (1970) es el principal ejemplo de autor perteneciente al grupo de investigadores que ha centrado su atención en las variables de naturaleza política que inciden en la dinámica de altas y bajas de la aprobación de los mandatarios. Quizás el más difundido de los hallazgos de Mueller es la variable que denominó *rally round the flag* (reacción patriótica), que constituye un evento de naturaleza internacional que involucra directamente al país y al presidente, que a su vez tiene un carácter específico y muy acotado. Desde Mueller se estableció que los eventos de reacción patriótica tienen la capacidad de unir a la población en torno a su presidente, mientras las problemáticas domésticas tienden más a exacerbar divisiones internas.

Mueller (1970) identificó cinco categorías de eventos que pueden ser calificados como de "reacción patriótica": intervención militar, acciones diplomáticas de gran envergadura, de-

sarrollos tecnológicos dramáticos, cumbres de gobernantes y victorias o derrotas en guerras que ya estaban en marcha, por lo que su primera gran aproximación al esclarecimiento de determinantes de la aprobación presidencial se encuentra asociada específicamente con las relaciones internacionales.

Además del reconocimiento por su contribución en esta dirección, la teoría de Mueller respecto a la dependencia de la popularidad con respecto a la reacción patriótica también fue criticada o matizada por otros miembros de la comunidad científica, que señalaron que los eventos de reacción patriótica suelen ser de naturaleza extraordinaria, de corta duración y tendientes a resultar erosionados tanto por los eventuales y no favorables "partes de guerra" provenientes del frente externo como por las propias problemáticas domésticas como, por ejemplo, el estado de la economía.

Además de los eventos de reacción patriótica, destacan otras causales políticas con incidencia en la popularidad presidencial, como el tiempo de mandato del presidente (Mueller, 1970), escándalos (Kernell, 1978), las apariciones públicas del mandatario (Kernell, 2006), el diseño político institucional del país (Powell y Whiten, 1993) y el partidismo (Kernell, 1977, Romero 2009; Somuano, 2018).

El tiempo de mandato del presidente es otra variable acuñada por Mueller (1970) que pone el acento en la supuesta erosión que pende sobre la popularidad de los mandatarios como consecuencia de la propia duración del mandato y la acumulación de las decisiones gubernamentales. El efecto del tiempo en el desgaste de la popularidad del mandatario llevó por su parte a Norpoht (1984) a introducir la visión del ciclo en la popularidad presidencial. Según su postura, cada presidente comienza un ciclo con una prima de popularidad no ganada que se erosiona posteriormente.

La consideración de que la popularidad sigue un comportamiento determinando por el simple paso del tiempo, esto es, una aprobación relativamente alta que se desgasta en la

medida que avanza la administración y en el que las variaciones provocadas por eventos de alta visibilidad para el público constituyen únicamente desviaciones temporales de ese curso regular, ha trascendido como una de las dos visiones dominantes con relación al comportamiento de la variable. La visión antagónica, en cambio, alega que la evaluación del desempeño presidencial es impredecible y errática, marcada por eventos de gran impacto que fortalecen o deterioran su posición ante el público (Beltrán, 2015).

La teoría defendida por Norphot (1984) ha recibido críticas al considerarse que no necesariamente la tendencia de la popularidad presidencial es a declinar como consecuencia del tiempo o al hecho de que el Jefe del poder ejecutivo se vea obligado a enfrentar decisiones políticas. Por otra parte, la evidencia fáctica ha arrojado la existencia de presidentes que culminan sus mandatos con tasas de popularidad iguales o superiores a cuando lo iniciaron.

La variable "escándalos" es una consecuencia directa del interés de los politólogos norteamericanos en investigar el impacto de "Watergate", la trama Irán-Contras y el caso "Lewinsky" en la aprobación de los mandatarios, Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton, respectivamente. Para los dos primeros casos, los investigadores comprobaron efectos de pérdidas importantes de aprobación, pero no fue así con respecto al tercero de los escándalos.

Que los resultados no hayan sido homogéneos de ninguna manera invalida la fuerza explicativa de la variable "escándalos", todo lo contrario, surge la necesidad de esclarecer porque en unos casos el impacto se confirma y en otros se anula. En realidad, lo que tiende a debilitar el potencial explicativo es que podría estar asociada con eventos que tienden a ser de carácter extraordinario.

Por su parte Kernell (2006) argumentó que para el caso de Estados Unidos existe una interacción entre las apariciones públicas y la popularidad presidencial. Kernell, acuñó el

término *Going Public* que expresa la apelación directa del mandatario a los ciudadanos para solicitar un apoyo activo contribuyendo a que el mensaje político llegue directamente a sus destinatarios sin que medie la interpretación periodística u otras operaciones propias de los procedimientos informativos. Para el autor, con ese recurso los presidentes logran impulsar una imagen pública favorable de sí mismos y de sus políticas. Roncarolo (1994) ha destacado que el empleo del mecanismo tiene que ver con el propósito de transformar la popularidad del presidente en consenso político entre las élites políticas para un mayor control sobre la agenda, lo que devela que si bien la apelación al público puede redundar en mayor popularidad para el mandatario de turno, la eficacia de la utilización del recurso se asocia con la existencia de niveles favorables de aprobación presidencial.

Se encuentran en la literatura también referencias a que el diseño político institucional de un país produce diferentes niveles de claridad en cuanto a la asignación de responsabilidades por los individuos (Powell y Whithen, 1993). En específico, los autores encontraron que el diseño institucional afecta la forma en que las personas asignan responsabilidades al presidente por los resultados económicos. Determinados contextos institucionales facilitan que el ciudadano comprenda mejor la dinámica de las decisiones gubernamentales y atribuya correctamente su evaluación a la institución responsable por el producto político.

Concluyendo el análisis de las causales políticas, destaca como un motivo fundamental para aprobar a un presidente, la pertenencia del mandatario al mismo partido con el cual se simpatiza. “La aprobación presidencial posee un fuerte componente partidista. Es un punto no controvertido el que los ciudadanos que se identifican con el partido del presidente deberían ser más tendientes a aprobarlo” (Romero, 2009:10).

Moreno y Mendizábal (2016) reportaron como resultado de su encuesta aplicada en 18 países de Latinoamérica, que el

partidismo es el factor más importante para explicar la aprobación presidencial, aunque la misma investigación concluyó que esa misma variable muestra una influencia muy débil en México, al menos, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, donde destaca como el factor más influyente en la aprobación o desaprobación del gobernante de turno, la corrupción o la falta de transparencia.

Aunque las variables políticas con incidencia en la dinámica de la popularidad presidencial cuentan con una singular difusión, la incidencia de las variables económicas en la aprobación presidencial constituye ampliamente la explicación dominante. El desempeño económico se privilegia como una variable con la capacidad suficiente como para explicar buena parte de la dinámica de altas y bajas de la popularidad del Jefe del Ejecutivo.

Para el caso de los mandatarios norteamericanos, por ejemplo, Monroe (1978) investigó la importancia de influencias económicas clave en la dinámica de la aprobación presidencial. Su pesquisa arrojó que la inflación y los gastos militares son estadísticamente significativos e influyen políticamente en la popularidad del presidente.

Indagando en la misma dirección, Norpoth (1984), corroboró que la economía tiene la clave para la explicación de los altibajos de la popularidad presidencial. Basado en datos de 1961 a 1980 y empleando modelos estocásticos, concluyó que la inflación tiene un efecto significativo. Sin embargo, también encontró que la influencia de factores no económicos, como guerras, acontecimientos internacionales y escándalos resulta aún más potente.

De cualquier forma, la economía ha resultado privilegiada como determinante por excelencia de la variabilidad de la popularidad presidencial y, en esa tesitura, los argumentos de la teoría del voto económico son retomados con el propósito de explicar también la dinámica de altas y bajas de la aprobación presidencial.

En efecto, el análisis de las causales económicas de la aprobación presidencial extiende la aplicabilidad de la teoría del voto económico al ámbito específico de la comprensión de las determinantes de la popularidad de los mandatarios. Si de acuerdo con la teoría del voto económico, los electores castigan o recompensan al partido de gobierno en dependencia de si el manejo que realizó de los asuntos económicos mejoró o perjudicó su bienestar material (Downs, 1973; Kramer. 1971; Fiorina, 1978), en la misma sintonía se interpreta que los ciudadanos aprueban o desaprueban el desempeño del mandatario de turno tomando en cuenta sus resultados en la gestión económica. En caso de resultar percibida como favorable, la recompensa que recibe el mandatario es la aprobación, mientras el castigo por entregar resultados no favorables es la desaprobación.

A su vez, del mismo modo que es reconocido por la teoría del voto económico, en la evaluación que el ciudadano realiza sobre el desempeño del presidente se encuentran interactuando cuatro dimensiones: retrospectiva, prospectiva, socio trópica y egotrópica. Para la evaluación retrospectiva del mandatario de turno el ciudadano se enfoca en el desempeño pasado de la economía nacional, mientras para la prospectiva en las expectativas hacia el futuro. Por su parte, la evaluación socio trópica indica que el individuo pone en primer plano para evaluar el desempeño del presidente su visión de cómo percibe la situación económica general del país, en lugar de centrarse en la situación de sus propias finanzas personales, como resulta característico del cálculo desde una perspectiva egocéntrica.

Sin embargo, que numerosos autores coincidan en otorgar preferencias a la economía sobre la política, como principal determinante de la variabilidad de la popularidad presidencial, no significa que exista entre ellos unanimidad con relación a cuál es la variable económica puntual con potencial explicativo. Las variables económicas puntuales que han sido identificadas como influyentes en la aprobación presidencial por

diferentes investigadores constituyen prácticamente una docena. Sin embargo, las más comunes en los modelos son, desempleo, inflación, PIB, déficit público, déficit comercial y gastos de defensa (Berlemann y Enkelmann, 2014: 11). Dentro de ese grupo, constituyen tres las variables que los investigadores le comprobaron mayor significación estadística: desempleo e inflación, que frecuentemente son incluidas como pares o consideradas al unísono en los modelos, (Monroe, 1978; Norphot, 1984) y PIB.

Todo apunta a que el dominio de las variables económicas, como determinantes de la popularidad presidencial, debe ser abordado también con cierta prudencia. No son pocos a su vez los autores que cuestionan directamente esa conclusión. Ello obedece a que encontraron en sus investigaciones que inflación y desempleo no causan efectos en la popularidad presidencial. La causa de las inconsistencias se ha atribuido a que los estudios trabajan con series temporales diferentes o emplean técnicas distintas para estimar los parámetros de la regresión.

Es revelador que los investigadores que realizaron la primera gran sistematización de los estudios sobre la asociación entre las variables económicas y la popularidad presidencial, Berlemann y Enkelmann, 2014, concluyeran su trabajo afirmando que incluso después de cuatro décadas de investigación, no está claro si la popularidad presidencial depende del estado de la economía.

Ambos autores encontraron que mientras que, aproximadamente, la mitad de todos los estudios para los Estados Unidos, corroboran un efecto significativo del desempleo y la inflación en la popularidad presidencial, las otras investigaciones no lograron comprobar la asociación. Según su conclusión si bien en el muy largo plazo el desempleo y la inflación tienen un fuerte efecto en la aprobación presidencial, esto no es válido para sub períodos más cortos, lo que puede indicar que la función de popularidad es inestable a lo largo del tiempo. Sin embargo, de acuerdo con los propios autores los hallazgos

también pueden tomarse como una indicación de que el enfoque de estimación lineal empleado con mayor frecuencia es inadecuado.

Quizás no debería extrañarnos la conclusión sobre el limitado poder explicativo de las condicionantes económicas de la popularidad presidencial. La teoría de las determinantes económicas de la aprobación presidencial, como habíamos señalado, lo que hace es extender la aplicabilidad de la teoría del voto económico al ámbito específico de la comprensión de las determinantes de la popularidad de los mandatarios. La intención no es espuria, pues popularidad presidencial y voto parecen guardar una determinada asociación. El problema es que en el propio campo donde fue gestada, el de la comprensión de las determinantes del voto, la teoría del voto económico no alcanza a cubrir ni remotamente la totalidad del espectro explicativo. Todo lo contrario. Cambios en el contexto económico no resultan en diferencias significativas en la magnitud del voto económico, sino que más bien su expresión es de una magnitud modesta, salvo en momentos de crisis extremas (Kramer, 1983; Paldam, 1991; Duch y Stevenson, 2008; Beltrán, 2014). En ese sentido, Berlemann y Enkelmann (2014), no se encuentran con una situación inédita. Numerosos investigadores encontraron una situación similar cuando reunieron grandes bases de datos para apreciar el real alcance de la teoría del voto económico en el propio campo que la vio nacer.

La encuesta regional coordinada por Moreno y Mendizábal (2016) sobre las determinantes de la aprobación en el continente confirman también esos hallazgos. Su trabajo reportó que el impacto de las evaluaciones sobre la economía y la satisfacción con los servicios en la aprobación de los presidentes es modesto con relación a otras variables como el partidismo o la transparencia. Todo lo anterior apunta a que la variable popularidad siendo por momentos sensible a la acción de distintas fuerzas, entre las que por momentos destacan las económicas para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el desempeño económico

a largo plazo (Stimson, 2004), o las políticas para el caso de Latinoamérica (Moreno y Mendizábal, 2016), al mismo tiempo resulta difícil asignarle un patrón general de comportamiento.

En resumen, aunque tanto en la economía como en la política los investigadores han identificados factores que tienen un determinado impacto en la popularidad de los mandatarios, simultáneamente, no se ha logrado establecer desde parámetros confiables de certeza cuáles de manera general resultan en última instancia decisivos para explicar la dinámica de altas y bajas de la popularidad de los mandatarios. Lewis Beck y Paldam (2000), teniendo en cuenta la cada vez más numerosa bibliografía dedicada al estudio de las condicionantes de la popularidad, han sugerido que, precisamente, "este problema de inestabilidad es la razón principal de que las investigaciones sobre las determinantes de la popularidad no muestren tendencia a morir" (Lewis-Beck y Paldam, 2000: 13).

2. El enigma del nivel de asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido en el gobierno en América Latina

Las decisiones investigativas para la comprobación de la primera hipótesis

La hipótesis de partida de la investigación fue que, en los comicios presidenciales en América Latina, se produce una asociación robusta entre la popularidad del mandatario de turno y el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno. Significa que si la popularidad del mandatario de turno es baja entonces corresponde una derrota electoral del oficialismo en la mayoría predominante de los casos y viceversa, si la popularidad del mandatario es alta entonces corresponde el éxito del partido en el gobierno.

El procedimiento seguido para comprobar nuestra hipótesis consistió en contrastar la aprobación del mandatario de turno con los resultados que obtuvo en la elección presidencial el oficialismo, en términos de victoria o derrota. Los países seleccionados fueron: Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y México. La selección la rigieron los criterios siguientes:

Seleccionamos aquellos países latinoamericanos que pudieran tener series temporales relativamente largas desde el retorno a la democracia en los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. De ser posible cinco o más comicios presidenciales, de forma que la muestra en su conjunto abarcara la mayor cantidad de elecciones posibles (Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil,

Colombia), sin que significara excluir a países que aportan casos de no consistencia entre la popularidad del mandatario de turno y el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno aunque contaran con una serie temporal de comicios presidenciales comparativamente reducido (por ejemplo, México).

Descartamos países del contienen que pueden tener series temporales relativamente largas pero donde los mandatarios se han reelegido en dos ocasiones sucesivas o de forma indefinida, pues esa factor compromete seriamente la competitividad y equidad de los comicios.

Seleccionamos aquellos países latinoamericanos cuya dinámica del sistema político, desde el retorno a la democracia en los años 80 del siglo XX hasta la actualidad, ha tendido a ser estable con escasas o ninguna interrupción de los mandatos constitucionales.

Seleccionamos países latinoamericanos cuyo acceso a los datos, especialmente el referente a la popularidad de los mandatarios antes de la celebración de los comicios desde la última década del pasado siglo hasta la actualidad, resultara factible.

El segundo paso importante fue determinar dentro del universo de comicios, cuáles elecciones no debían ser objeto del análisis empírico, debido a que sus características las convertía en irrelevantes para la comprobación de las hipótesis e incluso con potencial para alterar de manera artificial el resultado final que arrojó el ejercicio. Por ejemplo, en los procesos electorales celebrados a dos vueltas, los resultados de la primera vuelta no fueron considerados con independencia de que haya resultado ganador o perdedor de esa etapa el oficialismo. La razón es que, en definitiva, en esa instancia aún no se definió si el partido o coalición de gobierno retendría o no el poder. La decisión afectó a un total de veinte comicios presidenciales. En cambio, cuando el oficialismo resultó eliminado en la primera vuelta, entonces sí fue considerada esa elección porque en ella quedó definida la pérdida del poder por parte del partido en el gobierno. En ese caso específico, la segunda vuelta no fue considerada porque en esa etapa el candidato del partido en el

gobierno no contendió y de haberla considerado duplicaría de forma artificial el número de elecciones en que el partido o coalición gubernamental fue derrotado. La decisión afectó a dos comicios: Brasil, 1989 y Colombia, 2018.

No tomamos en cuenta, a su vez, los comicios presidenciales que fueron precedidos por *impeachment* o renuncias de mandatarios. En esos casos, el mandato del gobernante de turno, así como el de su reemplazante o sustituto, no cumplió el plazo temporal constitucionalmente establecido. Esa decisión metodológica afectó sólo a dos comicios, el mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) en Argentina, así como de Collor de Melo (1990-1992) en Brasil, respectivamente.

No estimamos los resultados de las elecciones que significaron el retorno a la democracia desde un régimen autoritario (Chile, Argentina, Brasil y Uruguay) o la salida, en el caso de México, del régimen de partido hegemónico. En esas circunstancias, los datos sobre la popularidad de los mandatarios oficialistas no son fiables. No es posible pasar por alto que, elclima de desconfianza, falta de trasparencia y de garantías que acompaña a esos regímenes, no deje una impronta destacada en los sondeos políticos que tienen lugar bajo su égida. La no consideración de esos comicios, también denominados “fundacionales” (Echegaray, 1996), responde al seguimiento de la pauta de Sartori (1992), acerca de que en esas condiciones es necesaria una distinción crucial entre *opinión en y del público.* El resultado de los sondeos políticos tiende en esos casos a reflejar no una opinión pública predominantemente autónoma sino preferentemente heterónoma, y por lo cual, inservible como indicativo. Las elecciones presidenciales consideradas por tanto para Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, son aquellas que tuvieron lugar después de la primera elección que marcó el retorno a la democracia en esos países. En México, Costa Rica y Colombia la dinámica del sistema político siguió cauces diferentes a la de los cuatro países sudamericanos mencionados. Para el caso de México, se tomaron en cuenta los comicios que tuvieron lugar después de iniciada la

alternancia a nivel federal (es decir,las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2018). Con relación a Costa Rica, la democracia más estable y prolongada de América Latina, que cuenta con elecciones transparentes e ininterrumpidas desde 1949, el punto de partida de la serie temporal, sin embargo, fue la administración del presidente Rodrigo Carazo (1978-1982), debido a que fue a partir de 1979 que Cid Gallup comenzó a registrar la aprobación de los mandatarios en ese país. Como regla, en los demás países del continente las mediciones de la popularidad presidencial se iniciaron en los años 90 del pasado siglo. En cuanto a Colombia, el punto de partida de la serie temporal fueron las elecciones presidenciales posteriores a "la culminación de la cerrazón del sistema entre dos fuerzas hegemónicas que limitaron la competencia política" (Tanaka, 2002). En Colombia, los dos partidos que habían regido la vida institucional del país desde el siglo XIX, Liberales y Conservadores, acordaron que en los dieciséis años subsiguientes (1958-1974) se compartirían el poder alternándose por períodos paritarios la presidencia, dando lugar a la etapa del Frente Nacional. En la práctica, el acuerdo se extendió hasta 1990. Básicamente, de 1958 a 1974 se eliminó la competencia electoral, regulando la alternancia obligatoria del poder entre los dos partidos tradicionales. Mientras de 1975 a 1990 se restituyó la competencia electoral pero, prácticamente, solo entre esas fuerzas, las únicas con posibilidades reales de ganar y con la condición de que el perdedor tenía la potestad de ocupar el 50% de los cargos ejecutivos. Finalmente, la Constitución de 1991, impulsada por el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994) reformó el sistema electoral, estableciendo reglas de juego que impulsaron la apertura del régimen político. A partir de ese momento actores emergentes comenzaron a obtener parte del poder que antes ocupaban liberales y conservadores. Fue entonces que se inició la reconfiguración de la política y la transformación del sistema partidista (Botero, Losada y Wills, 2011). Por consiguiente, los primeros comicios posteriores a la apertura del régimen político, lo constituyeron las elecciones de 1994.

Cuadro 1
Universo de comicios presidenciales y número de elecciones consideradas en Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y México

Número total de elecciones	Número de elecciones no consideradas[1]	Número de elecciones consideradas
73	31	42

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2
Número total de elecciones por países y de elecciones consideradas y no consideradas

País	Número total de elecciones	Número de elecciones consideradas	Primeras vueltas no consideradas	Elecciones no consideradas por popularidad intermedia	Renuncia o *impeachment*	Segundas vueltas no consideradas oficialismo eliminado en primera
C.R	13	9	3	1	0	0
CHI	11	6	5	0	0	0
UR	11	7	4	0	0	0
ARG	9	6	1	1[2]	1	0
MEX	3	3	0	0	0	0
COL	12	7	4	0	0	1
BRA	14	4	5	2	2	1
Totales	73	42	22	3	3	2

Fuente: Elaboración propia.
C.R: Costa Rica; CHI: Chile; UR: Uruguay; ARG: Argentina; MEX: México; COL: Colombia; BRA: Brasil.

[1] En 2015 la mandataria saliente Cristina Fernández, luego de dos mandatos de gobierno (2007-2011 y 2011-2015) llegó al preámbulo de la campaña presidencial con un 40% de aprobación. El candidato de la coalición gubernamental, Daniel Scioli, perdió la segunda vuelta a manos del representante de "Cambiemos" Mauricio Macri.

[2] En los comicios de 1998, el mandatario en funciones y candidato presidencial del partido de gobierno F. Cardoso (1993-1998) contendió en la campaña con una aprobación del 43%, resultando ganador en primera vuelta. Mientras en 2014 la presidenta en funciones, Dilma Rousseff, contendió en segunda vuelta con un 42% de aprobación y emergió ganadora de la elección.

No consideramos los comicios presidenciales en que la popularidad registrada del mandatario de turno estuvo dentro del rango comprendido entre el 40 y el 45% de aprobación. Aunque la etiqueta de bueno o mal desempeño presidencial se encuentra ampliamente difundida, no encontramos en la literatura académica sobre popularidad presidencial una clasificación que argumente de forma rigurosa, dentro de qué rangos se puede considerar a un mandatario bien o mal evaluado, garantizando que todos los casos sean medidos empleando el mismo rasero. Sin embargo, la dificultad la subsanamos del modo siguiente: Históricamente la aprobación de los presidentes se da en una escala que va de 0 a 100 puntos porcentuales, por lo que para considerar a un presidente como bien evaluado es imprescindible que el número de personas que aprueban su desempeño resulte superior al número de personas que lo desaprueban. Aritméticamente esa situación se produce de forma indiscutida cuando la aprobación del mandatario es superior al 50%. Lewis Beck y Rice (1982) consideraron que la cifra de popularidad que garantiza la reelección del mandatario es una calificación igual o superior al 50%[3]. Nuestra interpretación al respecto es que si una aprobación del 50% constituye una garantía de reelección del gobernante de turno, es porque se trata de un mandato bien evaluado por la ciudadanía. La lógica indica que si más del 50% significa una buena evaluación, menos del 50% no lo es. Sin embargo, no existe literatura académica en la que un autor califique como mal evaluado a un mandatario cuya aprobación fue superior al 45% e inferior al 50%. El argumento que parece sostener esa postura o al menos el que en esta investigación elaboramos, una vez que estudiamos con detenimiento la dinámica de la aprobación y desaprobación a lo largo de los mandatos de todos los presidentes de

[3] Por su parte, Kenney y Rice (1983) consideraron que un gobernador titular puede confiar en la reelección con un índice de aprobación superior al 48% aproximadamente.

los países incluidos en nuestra muestra (42 mandatarios), es que cuando la popularidad del titular del ejecutivo se encontró en el rango que va entre mas de 45% y menos de 50% de aprobación, la diferencia entre los ciudadanos que aprueban el desempeño del mandatario y los que lo desaprueban, como regla, continuó siendo sustancial, es decir, continuó siendo visiblemente favorable para el mandatario. Ello se explica por la razón siguiente: aunque la encuesta de aprobación presidencial interpela al ciudadano sobre si aprueba o desaprueba el desempeño del mandatario de turno, regularmente un grupo de ciudadanos toman una decisión neutra con relación a la cuestión. Es decir, ni rechazan ni aprueban. Como resultado, como regla, no nos encontramos con que un presidente que tenga, por ejemplo, un 48% de aprobación, simultáneamente tiene un 52% de rechazo o desaprobación. Por el contrario, el número de los que desaprueban la gestión de un presidente con un 48% de aprobación (incluso con un 46% de aprobación) resulta significativamente menor al número de los que aprueban su desempeño, porque está presente y se computa también el porcentaje de quienes no se pronunciaron, es decir, de quienes ni aprobaron ni tampoco desaprobaron la gestión del gobernante de turno. En cambio, corroboramos que cuando la aprobación del mandatario comienza a descender del 40%, el número de quienes desaprueban su gestión es siempre mayor a quienes la aprueban. Asumimos, entonces, que un mandatario mal evaluado es precisamente aquel cuya aprobación es inferior al 40%, lo que indicaría que la diferencia entre los ciudadanos que lo desaprueban y los que aprueban su desempeño tiende a inclinarse significativamente en su contra. Consideramos a su vez, que los presidentes con una aprobación superior al 45% e inferior al 50% deben considerarse como dentro del límite inferior del grupo de mandatarios que cuentan con una popularidad alta, ya que dentro de ese rango la diferencia entre los que aprueban su gestión y los que la desaprueban tiende a ser significativamente favorable al titular del ejecutivo. Como

regla, un presidente con una evaluación superior a 45%, a su vez le es característico contar con un porciento de desaprobación significativamente menor a esa cifra. Mientras la situación de los mandatarios con una aprobación entre 40 y 45% es de naturaleza diferente. Dentro de ese rango el número de los que desaprueban el desempeño presidencial tiende a aproximarse, igualarse y en determinadas coyunturas incluso supera reñidamente al de los que la aprueban. La característica distintiva del rango comprendido entre 40 y 45% de aprobación, es la existencia de un estado de tensión creciente entre los ciudadanos que aprueban y los que desaprueban a los mandatarios, lo cual nos conduce a clasificarlo como de desempeño intermedio o regular. El impacto que tiene ese rango de popularidad en el resultado electoral del partido o coalición de gobierno es laxo, es decir, cuando la popularidad del mandatario se ubica en esa franja (40-45% de aprobación), no existe garantía de que el partido o coalición de gobierno pueda retener el poder pero tampoco de que pueda perderlo. Atendiendo a esa razón, los comicios presidenciales a los que los mandatarios de turno arribaron con una aprobación dentro de ese rango no fueron considerados. Entonces, el intervalo en el que los mandatarios tienen entre el 40 y el 45% de aprobación, lo enfocamos en la investigación como un interregno donde la popularidad del presidente no anticipa con fiabilidad o de manera contundente el resultado electoral del candidato del partido o coalición gubernamental. Aunque a primera vista la franja parece relativamente amplia, la evidencia empírica reflejó que la regla es que los mandatarios latinoamericanos lleguen mal o bien evaluados al momento en que se disputa en las urnas la continuidad del partido o coalición de gobierno. Por tanto, esa decisión investigativa afectó a un total de sólo tres comicios, uno celebrado en Costa Rica (1994), uno en Argentina (2015) y dos en Brasil (1998 y 2014), respectivamente, que no formaron parte de nuestra muestra de 42 comicios presidenciales. A continuación resumimos en el cuadro 3 dentro de qué intervalo clasificamos

la popularidad de los mandatarios en buena, regular y mala y el impacto potencial que tiene cada uno de esos niveles en el resultado electoral del partido o coalición de gobierno.

Cuadro 3
Clasificación de la popularidad de los mandatarios y del impacto potencial de cada rango en el resultado electoral del partido o coalición de gobierno

Rangos	De 0 hasta 39%	De 40 hasta 45%	De 45 hasta 100%
Calificación del nivel de popularidad obtenido por el mandatario	Bajo	Regular o intermedio	Alto
Impacto potencial en el resultado electoral del partido en el gobierno	Alto. Tiende a anticipar que el resultado electoral no favorecerá al partido o coalición de gobierno	Laxo. No anticipa de forma fiable el resultado electoral del partido o coalición de gobierno	Alto. Tiende a anticipar que el resultado electoral favorecerá al partido o coalición de gobierno

Fuente: elaboración propia.

En la literatura, se suele tomar como criterio de clasificación de los comicios presidenciales los diferentes umbrales que las constituciones reconocen para que un candidato presidencial sea reconocido como ganador de la contienda, esto es, elección presidencial por mayoría relativa simple, por mayoría relativa especial y por mayoría absoluta, así como la coincidencia o no en cuanto a fecha de realización de las elecciones del ejecutivo y las del legislativo, elecciones simultáneas o no simultáneas, (Molina, 2001).

Sin embargo, esa clasificación adolece de una omisión fundamental, no toma en cuenta un elemento que cambia la dinámica de la competencia electoral: el hecho de que el presidente de turno constituya o no el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno. Cuando el presidente busca su reelección sucesiva, la equidad de la competencia electoral es puesta a prueba o simplemente se encuentra severamente cuestiona-

da[4]. La razón es que, los mandatarios que buscan su reelección sucesiva, disponen de herramientas mediáticas y logísticas que son difíciles de limitar o fiscalizar por la autoridad competente y a su vez, de igualar por el resto de los competidores. La situación llega a representar una indudable ventaja competitiva. Dos hechos parecen favorecer esa aseveración. Primero, el argumento está en la base de los países que no permiten la reelección presidencial (México y Guatemala), la reelección sucesiva (Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, El Salvador y Panamá) o que dieron marcha atrás a la aprobación de la misma (por ejemplo, Colombia, 2016). Segundo, la tasa de éxito de los mandatarios latinoamericanos, cuando contiende por su reelección sucesiva desde el retorno a la democracia en los años 80 hasta el año 2018 es notoriamente elevada. De un total de prácticamente veinte mandatarios que en ese lapsus compitieron por su reelección sólo dos, el nicaragüense Daniel Ortega (1990) y el dominicano Hipólito Mejía (2004), no pudieron alcanzar el propósito debido a la presencia de condiciones excepcionales. Ambos lidiaron con crisis económicas profundas. Una tasa de éxito no sólo tan exorbitante, sino con una diferencia abismal con respecto a la tasa de éxito cuando el candidato presidencial no es el gobernante de turno, así como el propio carácter de las condiciones que son indispensables para bloquear el propósito de reelegirse, evidencia las ventajas competitivas de las que goza el mandatario de turno cuando contiende por la reelección sucesiva. Así como la figura del presidente domina el escenario político, la figura del mandatario que busca su reelección domina la campaña electoral. “No existe otro rol institucional que tenga un poder equivalente o un peso similar en el imaginario social” (Pérez-Liñán, 2013). De aquí que en esta investigación,

[4] En la literatura sobre el tema destaca especialmente como autor que ha mantenido una reflexión sistemática sobre la inequidad electoral derivada de la presencia como candidato presidencial del titular del ejecutivo, M.D. Serrafero (1997, 2010 y 2016). Aunque el tema también ha sido objeto de atención por Aquino, J.D. (2012).

seguimos el criterio de clasificar los comicios presidenciales en dos tipos, los caracterizados por el hecho de que el mandatario de turno constituye a su vez el candidato presidencial del oficialismo (elección de reelección sucesiva) y aquellos en que el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno no es el propio mandatario de turno y por tanto se trata de una elección cuyo rasgo decisivo es el propósito del oficialismo de traspasar el poder del mandatario de turno al candidato nominado por el partido o coalición gubernamental.

Al enfocarlas como dos tipos diferentes de comicios presidenciales, en la toma de lectura de la popularidad del mandatario de turno a efectos de contrastarlas con el resultado electoral del partido o coalición de gobierno, seguimos también dos procedimientos diferentes. La lectura de la medición de la aprobación del mandatario que se presenta a reelección se toma de la semana o incluso de los días previos a la fecha de celebración de los comicios, siguiendo en ese sentido la metodología de Sigelman (1979). Por su parte, la lectura de la medición de la aprobación del mandatario de turno que no es a su vez candidato presidencial de su partido, la tomamos de una fecha anterior al inicio de las campañas presidenciales, siguiendo en ese sentido la metodología de Lewis Beck y Rice (1982 y 1984), quienes recomiendan tomar la lectura de un período de relativa calma política, que es aquel cuando ya fueron designados los candidatos presidenciales de todos los partidos pero aún no han comenzado las campañas electorales. Simultáneamente, constatamos durante la realización de la investigación que cuando el mandatario de turno no es a su vez el candidato presidencial de su partido, las mediciones de la popularidad del presidente pasan a un plano secundario o incluso dejan de realizarse por las encuestadoras, es decir, tienden como regla a desaparecer durante la campaña electoral relegadas por las continuas mediciones de la intención de voto de los candidatos. Así que, por regla general, los datos de la aprobación del gobernante de turno a los que se puede acceder coincidentemente están fechados antes del inicio de la campaña o después

de finalizadas las mismas. En ese sentido, nos encontramos con que aplicar la metodología de Lewis Beck y Rice (1982), es prácticamente la única forma de lograr una lectura homogénea de la popularidad en los comicios que constituyeron nuestra muestra con independencia del país en que se celebraron.

En cambio, cuando el gobernante de turno constituye a su vez el candidato presidencial del oficialismo, las mediciones de la popularidad, como regla, tienden a acompañarlo durante su periplo por la campaña tendiendo a ser más factible el acceso a ese tipo de datos. En ese sentido, constatamos que cuando el mandatario de turno es a su vez el candidato presidencial del partido de gobierno, durante la campaña su nivel de aprobación suele estar sujeto a una alta volatilidad en sentido casi siempre ascendente, tendiendo a crecer en la medida que se acerca la fecha de la elección. Presumimos que ese comportamiento de la aprobación se debe al involucramiento directo del mandatario en la campaña. El incremento puede ser tan sustancial que hemos registrado un promedio de crecimiento de la popularidad en esa fase en un rango entre los seis y los diez puntos porcentuales. De este modo, el tipo específico de elección, la factibilidad de disponer de datos y la volatilidad ascendente verificada de la aprobación cuando el mandatario de turno es a su vez el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno debido a su involucramiento directo en la campaña, conducen forzosamente a seguir en esos casos la perspectiva de Sigelman (1979), para quien el registro de popularidad decisivo a efectos de calcular las probabilidades de reelección del mandatario de turno es aquel tomado en el mismo mes o en los días previos a la elección presidencial.

La decantación por el empleo de dos procedimientos diferentes en la toma de lectura de la aprobación presidencial en este trabajo no representa una amenaza o violación de regla investigativa alguna. En primer lugar, porque hemos fundamentado la existencia de dos tipos de comicios presidenciales y a cada tipo de comicios correspondió la aplicación en todos los casos del mismo procedimiento. En segundo lugar, porque los

requisitos que debe cumplir el procedimiento de investigación es ser trasparente, ordenado y explícito de manera que cualquier investigador que los emplee obtenga los mismos resultados reportados en la investigación original.

Como se refleja en el cuadro 4, dentro del número total de elecciones consideradas, las elecciones de reelección sucesiva incluidas en la muestra constituyen seis, concentradas a su vez en tres países: Argentina (3), Colombia (2) y Brasil (1).

Cuadro 4
Número de elecciones en las que el candidato presidencial oficialista no es el presidente en turno dentro del total de comicios considerados

Número total de elecciones consideradas	Número de elecciones en las que el candidato presidencial oficialista no es el presidente en turno	Número de elecciones de reelección sucesiva
42	36	6

Fuente: Elaboración propia.

Por último, los datos de la aprobación de los mandatarios de cada país fueron tomados siempre de la misma fuente primaria, a la que seleccionamos luego de un sondeo previo donde identificamos las encuestadoras que suelen privilegiar investigaciones realizadas por reconocidos académicos del país.

No decidimos emplear en ningún caso el promedio de aprobación de todas las encuestadoras, en primer lugar, debido a que los datos de los años 90, en algunos países, se dificultó el acceso incluso a los de la casa encuestadora que desde un inicio comprobamos que constituía la que generalmente emplearon como fuente primaria destacados académicos locales y, en segundo lugar, comprobamos que para el caso de los mandatarios latinoamericanos la regla general que rige es su arribo a la etapa previa a la campaña con una aprobación decididamente alta o decididamente baja. Significa que, la existencia de una diferencia hipotética de cinco o siete puntos porcentuales

a favor o en contra de la lectura de la aprobación registrada, no afecta en absoluto su calificación de bien evaluado o de mal evaluado si ese fuera el caso.

En la mayoría de los casos, la ficha técnica de las encuestas, pese a tratarse de diversos países y de diferentes casas encuestadoras, reunieron similares requisitos. Se trató de encuestas nacionales, sobre una muestra aleatoria aproximadamente de 1200 personas, con un nivel general de confianza del 95% con un margen de error de más-menos 2.81 a más-menos 3,4, en dependencia de la casa encuestadora. Debemos advertir a su vez que el fraseo de las encuestas, aunque bastante semejante no es homogéneo. Diferentes investigadores (Schuman y Presser, 1981) han comprobado que aún las más triviales diferencias en los fraseos tiene un efecto sobre la plena confiabilidad de las respuestas y en la ampliación del margen de error de la medición. De los siete países seleccionados en cinco (Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y México) todas las lectura de popularidad corresponden a datos reportados por fuentes primarias (encuestas nacionales). En Costa Rica, sólo la lectura de la popularidad del presidente L. Solís (2014-2018) dentro de un universo de 10 mandatarios no se corresponde con una fuente primaria sino con reportes de prensa. Para el caso de Argentina, la lectura de la aprobación de los mandatarios N. Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) se sustenta en la fuente primaria. Mientras la lectura de la aprobación de los presidentes R. Alfonsín (1983-1989) y C. Menem (1989-1995) y (1995-1999) se apoya en fuentes académicas (Vázquez y Falleti, 2007; Pérez-Liñán, 2013; Tagina, 2013) por las dificultades que encontramos con el acceso a datos primarios de las décadas de los años ochenta y noventa en ese país.

Como en cada serie temporal de elecciones presidenciales de un país dado, los comicios se celebran casi siempre en la misma fecha, intentamos, siempre que nos fue posible, que el registro de la popularidad coincidente con el momento de relativa calma política también correspondiera al mismo mes

para todos los mandatarios. En la mayoría de las ocasiones logramos ese objetivo, pero en algunos procesos electorales, especialmente, los de los años 80 y 90 en Costa Rica, las dificultades con la obtención del dato, debido a la falta de regularidad en el sondeo, nos impidió cumplir con esa premisa. Así que es posible que la serie temporal de un país, en que en la mayoría de las ocasiones tomamos el dato de aprobación correspondiente, por ejemplo, al mes de mayo, mientras la elección se desarrolló en el mes octubre, reportemos elecciones en que el registro de popularidad no corresponde exactamente al quinto mes del año sino al mes de junio o de abril, debido a que ese fue el sondeo que logramos ubicar y registrar.

Para el caso de Chile, la fuente de los datos de la aprobación presidencial elegida es CEP, en Uruguay, Equipos Mori, en Brasil, Datafolha, en Argentina, Ipsos-Mora y Araujo, en Colombia Gallup, en Costa Rica, Cid Gallup y en México, Parametría.

Por último, los datos sobre los por cientos en votos alcanzados por el partido de gobierno en cada una de las elecciones presidenciales consideradas, lo obtuvimos de los registros oficiales de la autoridad electoral en cada país seleccionado.

Comprobación por países

En este apartado presentó los resultados del contraste entre la popularidad de los mandatarios de turno y el éxito o la derrota del partido en el gobierno en los países seleccionados. Se presenta información relativa al nombre del presidente en funciones, fechas de inicio y culminación del mandato, nivel de popularidad registrado, resultado obtenido por el oficialismo en la elección presidencial y el tipo de asociación específica que se produce en cada caso (consistente o no consistente). La asociación es consistente cuando a una baja popularidad del mandatario de turno correspondió la derrota electoral del partido de gobierno y viceversa, una alta popularidad fue seguida por el triunfo del oficialismo.

a) Chile

La primera elección después del retorno a la democracia en 1989 (Walker, 1992; Huneeus, 2000;Garretón y Garretón, 2010; Garretón, 2015 y Paredes, 2011) tuvo lugar en 1993. Todas las elecciones celebradas desde esa fecha fueron consideradas en la presente investigación debido a que en Chile los mandatarios de turno desde entonces arribaron al período previo a la campaña electoral con una evaluación satisfactoria o insatisfactoria, es decir, no se reportan gobernantes con evaluaciones intermedias.

Lo que destaca de la serie temporal de comicios presidenciales chilenos es la presencia de dos elecciones 2000 y 2010 donde la asociación entre la popularidad de los mandatarios de turno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Michelle Bachelet (2006-2010) y el resultado electoral de la coalición gobernante no fue consistente. En el año 2000, el oficialismo logró imponerse pese a que el gobernante Frei Ruiz-Tagle arrastraba una aprobación baja (28%). Mientras que en 2010, la coalición gobernante perdió los comicios pese a que la mandataria de turno Michelle Bachelet exhibía una aprobación alta (70%). La tasa de asociación entre popularidad presidencial y resultado electoral del oficialismo para el caso de Chile arroja 66.66%.

Cuadro 5
Asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota electoral del oficialismo en Chile

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
Patricio Aylwin	1990/1994	53%	Ganador	Consistente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle	1994/2000	28%	Ganador	Inconsistente
Ricardo Lagos	2000/2006	61%	Ganador	Consistente
Michelle Bachelet	2006/2010	70%	Perdedor	Inconsistente
Sebastián Piñera	2010/2014	31%	Perdedor	Consistente
Michelle Bachelet	2014/2018	22%	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas de Opinión Pública de CEP.

b) Uruguay

La primera elección después del retorno a la democracia en 1985 (Chasquetti y Buquet, 2004; Caetano, 2005; Ferro, 2006; Corbo, 2007) tuvo lugar en 1989. Todas las elecciones celebradas desde esa fecha fueron consideradas en la presente investigación debido a que en Uruguay los mandatarios de turno desde entonces arribaron al período previo a la campaña electoral con una evaluación satisfactoria o insatisfactoria, es decir, no se reportan gobernantes con evaluaciones intermedias.

Lo que destaca de la serie temporal de comicios presidenciales uruguayos, conjuntamente con la tendencia a la consistencia en la relación entre popularidad y resultado electoral del oficialismo, es a su vez la presencia de una elección (1999) donde la asociación entre la aprobación del mandatario de turno, Julio M. Sanguinetti (1995-2000) y el resultado electoral del partido gobernante no fue consistente. Sanguinetti registró una aprobación de 26%, pero sin embargo, el candidato presidencial del partido de gobierno, Jorge Batlle logró imponerse en la segunda y decisiva vuelta aventajando por más de 8 puntos porcentuales al representante del principal partido opositor, Tabaré Vázquez del Frente Amplio. La tasa de asociación de Uruguay es de 85.71%.

Cuadro 6
Asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota electoral del oficialismo en Uruguay

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
Julio Sanguinetti	1985/1990	22%	Perdedor	Consistente
L. Lacalle	1990/1995	21%	Perdedor	Consistente
Julio Sanguinetti	1995/2000	26%	Ganador	Inconsistente
Jorge Batlle	2000/2005	7%	Perdedor	Consistente
Tabaré Vázquez	2005/2010	54%	Ganador	Consistente
José Mujica	2010/2015	56%	Ganador	Consistente
Tabaré Vázquez	2015/2020	28%	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas de Equipos Mori.

c) Brasil

En Brasil tienen lugar elecciones competitivas desde 1989 (Azevedo, 2006; Neto, 2007; Anastasia y Melo, 2009) por lo que hasta la fecha de culminación de la presente investigación se han celebrado un total de doce comicios presidenciales que forman parte en realidad de siete procesos electorales (1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) pues los procesos de 1989, 2002, 2006, 2010 y 2014 se celebraron a dos vueltas y en los de 1994 y 1998 sólo tuvo lugar la primera instancia. En los comicios de 1989 el oficialismo fue eliminado en la primera fase, de aquí que no fue necesario considerar el resultado electoral de la segunda vuelta, en cambio en los comicios de 2002, 2006, 2010 y 2014 los resultados de la primera vuelta no fueron considerados pues, como señalamos en el capítulo metodológico, la retención o pérdida del poder por el oficialismo no se produjo en esa instancia sino en la segunda fase. A su vez los comicios de 1994 fueron precedidos por la interrupción del mandato constitucional del presidente Collor de Mello (1990/1992) quien fue sometido a juicio político, mientras en las elecciones presidenciales de 1998 y 2014 la popularidad de los gobernantes Fernando Henrique Cardoso (1995/1999) y Dilma Rousseff (2010/2014)que buscaron y consiguieron su reelección sucesiva estaba dentro del rango de intermedia 43 y 42%, respectivamente. A pesar de que el número final de comicios no considerados en el caso de Brasil es de 8, su serie temporal no incumple con el criterio de estabilidad, pues sólo una elección fue afectada por el hecho de que el mandatario de turno vio interrumpido el mandato constitucional (1994) y en realidad el verdadero hecho que eleva nominalmente el número de comicios no considerados es que constituye el país de la región que más procesos electorales a dos vueltas ha celebrado desde el retorno a la democracia en la década de los ochenta del siglo XX. Con relación a los comicios considerados la tasa de asociación registrada equivale al 100%.

Cuadro 7
Asociación entre popularidad presidencial y éxito
o derrota electoral del oficialismo en Brasil

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
José Sarney	1985/1989	5%	Perdedor	Consistente
Cardoso	1999/2002	31%	Perdedor	Consistente
Luis I. Da Silva	2002/2006	47%	Ganador	Consistente
Luis I. Da Silva	2006/2010	76%	Ganador	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Encuestas Datafolha.

d) Argentina

En Argentina, la primera elección tras retorno a la democracia en 1983 (O'Donell, Philippe y Schmitter, 1988; McGuire, 1996; Rapaport, Madrid, Musacchio y Vicente, 2006) se produjo en 1989, donde emergió ganador Carlos Menem, cuyo primer mandato se extendió de 1989 a 1995. De entonces a la fecha, se han realizado un total de ocho comicios de los cuales cinco cumplen con los requisitos para ser considerados. R. Alfonsín (1983-1989) empezó su gobierno con un apoyo cercano al 70%, pero en el año preelecotral de 1988 su aprobación era de 32%, incluso las elecciones previstas para diciembre se adelantan para mayo ante la crisis institucional que afectó el final de su mandato (Tagina, 2013).C. Menem (1989-1995) buscó su reelección con éxito en 1994 con un registro de 50% de popularidad (Vázquez y Falleti, 2007; Tagina, 2013; Pérez-Liñán, 2013), mientras en su segundo mandato (1995/1999) su aprobación previa a la campaña registró 23%(Vázquez y Falleti, 2007; Tagina, 2013; Pérez-Liñán, 2013). Por su parte, el mandato del candidato presidencial ganador de las elecciones de 1999, Fernando de la Rúa (1999-2001) quedó interrumpido en el año 2001 por su renuncia, por lo que los resultados de los comicios de 2003 donde emergió ganador Néstor Kirchner no fueron considerados.

Néstor Kirchner (2003/2007) traspasó el poder exitosamente a Cristina Fernández (2007/2011) en los comicios de 2007 a los que llevó exhibiendo una popularidad alta (55%). Cristina Fernández a su vez logró su reelección sucesiva en 2011 sustentada en una aprobación de 64%,mientras al término de su segundo mandato (2011/2015) exhibía en la etapa previa a la campaña presidencial de 2015 una aprobación del 40%, que al calificar como intermedia impide que consideremos el resultado electoral de esa elección pues nuestro fundamento metodológico reconoce que cuando la popularidad del gobernante de turno se encuentra en un rango comprendido entre el 40 y el 45% de aprobación la popularidad no anticipa la victoria ni tampoco la derrota del candidato presidencial del partido o coalición de gobierno. Por consiguiente, en el caso de Argentina, no fueron considerados los comicios presidenciales de 2003 y ninguna de las dos vueltas electorales del proceso de 2015. En los comicios considerados la tasa de consistencia fue equivalente al 100%.

Cuadro 8
Asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota electoral de socialismo en Argentina

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
Raúl Alfonsín	1983/1989	32%	Perdedor	Consistente
Carlos Menem	1989/1995	50%	Ganador	Consistente
Carlos Menem	1995/1999	23%	Perdedor	Consistente
Néstor Kirchner	2003/2007	55%	Ganador	Consistente
Cristina Fernández	2007/2011	64%	Ganador	Consistente
Mauricio Macri	2015/2019	28%	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Ipsos- Mora y Araujo.

e) Colombia

Aunque desde 1958 Colombia reporta la realización de comicios presidenciales de forma ininterrumpida, de esa fecha hasta 1990 las elecciones fueron celebradas bajo los acuerdos del Frente Nacional que restringieron la competencia política a sólo los dos partidos tradicionales: liberales y conservadores. El acuerdo dejó de regir en el mandato del presidente César Gaviria (1990-1994) donde se convocó una Asamblea Constituyente y se promulgó en 1991 una nueva Constitución que terminó con la cerrazón del sistema político al permitir la incorporación y participación de fuerzas políticas emergentes. En 1994, por consiguiente, se celebraron las primeras elecciones competitivas. Todas las elecciones celebradas desde esa fecha fueron consideradas en la presente investigación debido a que en Colombia los mandatarios de turno desde entonces arribaron al período previo a la campaña electoral con una evaluación satisfactoria o insatisfactoria, es decir, no se reportan gobernantes con evaluaciones intermedias. Por último, destaca para el caso de Colombia que en los siete comicios considerados la asociación entre la popularidad del mandatario de turno y el resultado electoral del partido o coalición de gobierno fue consistente. Una baja evaluación del gobernante de turno fue seguida por la derrota electoral del oficialismo, mientras que a una buena evaluación del mandatario de turno correspondió la victoria del partido o coalición de gobierno. En ese sentido la tasa de asociación registrada es equivalente al 100%.

Cuadro 9
Asociación entre popularidad presidencial y éxito
o derrota electoral del oficialismo en Colombia

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
César Gaviria	1990/1994	53%	Ganador	Consistente
Ernesto Samper	1994/1998	31%	Perdedor	Consistente
Andrés Pastrana	1998/2002	17%	Perdedor	Consistente
Álvaro Uribe	2002/2006	69%	Ganador	Consistente
Álvaro Uribe	2006/2010	64%	Ganador	Consistente
Juan Manuel Santos	2010/2014	49%	Ganador	Consistente
Juan Manuel Santos	2014/2018	26%	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Gallup Poll.

f) Costa Rica

Costa Rica tiene la serie temporal de elecciones presidenciales competitivas más longeva de América Latina. Desde 1949, reporta comicios ininterrumpidos con esas características, pero las mediciones de la popularidad presidencial se registran a partir de la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982). Destaca para el caso de Costa Rica que de los nueve comicios considerados en dos, la asociación entre popularidad presidencial y éxito o derrota del partido en el gobierno fue inconsistente (1990 y 2002). En ese sentido, la tasa de asociación registrada fue de 77.77%. Una baja evaluación del gobernante de turno fue seguida por la derrota electoral del oficialismo, mientras que a una buena evaluación del mandatario de turno correspondió la victoria del partido o coalición de gobierno. En ese sentido la tasa de asociación registrada en el caso de Casta Rica es equivalente al 100%.

Cuadro 10
Asociación entre popularidad presidencial y éxito
o derrota electoral del oficialismo en Costa Rica

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
Rodrigo Carazo	1978/1982	9%	Perdedor	Consistente
José Figueres	1994/1998	18%	Perdedor	Consistente
Luis A. Monge	1982/1986	51%	Ganador	Consistente
Óscar Arias	1986/1990	75%	Perdedor	Inconsistente
Miguel A. Rodríguez	1998/2002	64%	Ganador	Consistente
Abel Pacheco	2002/2006	18%	Perdedor	Consistente
Óscar Arias	2006/2010	47%	Ganador	Consistente
Laura Chinchilla	2010/2014	9%	Perdedor	Consistente
Luis Solís	2014/2018	55%	Ganador	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas Cid Gallup.

g) México

La primera elección tras la llegada de la alternancia (2000) fueron los comicios presidenciales de 2006. La serie temporal de México es reducida, en cambio, aporta un caso de inconsistencia (comicios presidenciales de 2012) donde el presidente de turno Felipe Calderón (2006-2012) arribó a la etapa previa a la campaña con una alta popularidad (60%), sin embargo, el partido de gobierno no pudo retener el poder. La tasa de asociación en México registra 66.6%.

Resultados obtenidos

Cuadro 11
Asociación entre popularidad presidencial y éxito
o derrota electoral del oficialismo en México

Presidente	Período	Popularidad	Resultado del oficialismo en la elección presidencial	Tipo de asociación
Vicente Fox	2000/2006	60%	Ganador	Consistente
Felipe Calderón	2006/2012	60%	Perdedor	Inconsistente
Enrique Peña Nieto	2012/2018	25%	Perdedor	Consistente

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas Parametría.

Resultados obtenidos

De un universo de setenta y tres elecciones presidenciales, cuarenta y dos comicios constituyen nuestra muestra. En treinta y seis de ellos la aprobación presidencial es consistente con el triunfo o derrota del partido o coalición de gobierno, es decir, una aprobación presidencial baja fue seguida por la derrota electoral del oficialismo mientras a una aprobación alta del ejecutivo correspondió el éxito electoral del oficialismo, lo que representa un 85.71% de los casos. Se puede afirmar entonces que la asociación entre popularidad presidencial y resultado electoral del partido o coalición de gobierno en los comicios presidenciales de América Latina es positiva y robusta.

De las cuarenta y dos elecciones consideradas, un total de seis correspondieron a elecciones de reelección presidencial sucesiva, casos donde la literatura reconoce que la conexión de la popularidad y el resultado electoral del partido en el gobierno es más directa. En este tipo específico de elección, en cinco casos el presidente de turno en su rol de candidato presidencial del oficialismo terminó imponiéndose. De modo que la tasa de asociación de la aprobación presidencial en comicios de reelección sucesiva fue de 83.33%

De las cuarenta y dos elecciones consideradas, en un total de treinta y sesis el candidato del oficialismo no era el gobernante en turno. De acuerdo con la literatura, en ese escenario lo esperado es que la conexión entre aprobación presidencial y resultado electoral del oficialismo no resulte tan directa como en el escenario en que el presidente busca su reelección. Sin embargo, la comprobación empírica arrojó lo contrario. En treinta y una elecciones la aprobación del ejecutivo de turno fue consistente con el resultado electoral del candidato presidencial del partido o coalición de gobierno, para un 86.11% de significación estadística. Por tanto, se produjo una asociación ligeramente mayor entre aprobación y resultado electoral

del oficialismo cuando el candidato presidencia no es el propio mandatario en turno.

Los seis casos en que se registró inconsistencia en la asociación entre popularidad y resultado electoral del oficialismo, en tres el partido o coalición gubernamental no logró retener el poder pese a que el mandatario de turno se encontraba bien evaluado (Costa Rica 1989, Chile 2010 y México 2012), mientras en otros tres sí pudo conservarlo pese a que el gobernante de turno registraba una baja aprobación (Uruguay 1999, Chile 2000 y Costa Rica 2000).

Cuadro 12
Casos registrados de inconsistencia en la asociación entre popularidad y resultado electoral

País	Mandatario	Año de la elección	Tipo de inconsistencia
Uruguay	Julio M. Sanguinetti	1999	Baja popularidad y triunfo del oficialismo
Chile	Eduardo Frei Ruiz-Tagle	2000	Baja popularidad y triunfo del oficialismo
Chile	Michelle Bachelet	2010	Alta popularidad y derrota del oficialismo
Costa Rica	Miguel Ángel Rodríguez	2002	Baja popularidad y triunfo del oficialismo
México	Felipe Calderón	2012	Alta popularidad y derrota del oficialismo
Costa Rica	Oscar Arias	1990	Alta popularidad y derrota del oficialismo

Fuente: Elaboración propia.

Con esos resultados concluimos que en los dos tipos de comicios presidenciales considerados, reelección sucesiva y traspaso del poder entre el mandatario de turno y el candidato presidencial de su partido o coalición, la asociación entre popularidad y resultado electoral del partido de gobierno es robusta, por tanto la aprobación presidencial tiende a anticipar de forma potente del resultado electoral del partido de gobierno en términos de victoria o derrota en los comicios presidenciales.

3. El enigma de la derrota del partido en el gobierno cuando es alta la popularidad del mandatario de turno

Los resultados de contrastar la popularidad de los mandatarios de turno con el éxito o la derrota del partido en el gobierno reportados en el capítulo anterior, arrojaron que Chile 2009-2010 y México 2012, el oficialismo no alcanzó a retener el poder pese a que era alta la popularidad de los mandatarios de turno, Michelle Bachelet (78%) y Felipe Calderón (60%), respectivamente. Se trata, en ambos casos, de un escenario controvertido, debido a que se inhibió el traspaso de la popularidad en votos del gobernante de turno al candidato presidencial del oficialismo. ¿Cuál es el factor capaz de generar un comportamiento de esa naturaleza que llegó al punto de anular la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial?

Nuestra hipótesis fue que si la participación del oficialismo en la contienda electoral se encuentra afectada por un proceso de división interna manifiesta u oculta, entonces el partido o coalición de gobierno no retendrá el poder pese a que el mandatario de turno cuente con una alta popularidad.

La división del partido o coalición de gobierno refleja una fractura o desunión del partido o coalición gubernamental en el momento de enfrentar los compromisos electorales, especialmente los comicios presidenciales (Panebianco, 1986). Manifiesta la falta de solución de conflictos internos de la organización que afloran durante la propia contienda electoral comprometiendo el propósito de conservar el poder.

Consideramos que la división del partido o coalición de gobierno es manifiesta si, durante la campaña electoral, el proceso de fractura que afecta a la organización es incapaz de ser contenido por sus estructuras y se convierte en objeto indiscutido de dominio para el grueso de la opinión pública, debido a que se reportan de forma más o menos sistemática evidencias concluyentes al respecto. El modo en que ante la opinión pública se expresan las evidencias concluyentes, inicialmente, es a través de la desaprobación pública del proceso de selección del candidato presidencial del partido o coalición de gobierno por líderes, legisladores o altos funcionarios pertenecientes al propio partido o coalición gubernamental. No obstante, la característica decisiva va a ser el abandono del partido o coalición de gobierno por los referentes señalados que, a su vez, crean o se integran a fuerzas electorales alternativas para competir en la elección presidencial, desde las que abiertamente manifiestan una visión crítica del desempeño del partido o coalición de gobierno.

De acuerdo con nuestra clasificación, estamos ante un caso de popularidad presidencial alta cuando el registro del nivel de aprobación del mandatario de turno, que no compite por su reelección sucesiva, es igual o superior al 46% previo al inicio de la campaña.

El análisis tanto del caso chileno, como del mexicano, lo abordamos de forma homogénea. En primer lugar, exponemos el contexto general de la elección. En segundo, presentamos la dinámica seguida por la aprobación del presidente de turno durante el mandato constitucional. En tercero, analizamos los resultados electorales y comprobamos la capacidad explicativa de nuestra hipótesis. En cuarto, exponemos las conclusiones del caso.

El caso Chile 2009-2010. División interna manifiesta. Contexto de la elección presidencial

La elección presidencial de diciembre de 2009 y enero de 2010 en Chile constituye, probablemente, un ejemplo fehaciente de

cómo la división interna del partido o coalición oficialista, es capaz de alterar o anular la asociación que debe producirse entre una alta popularidad presidencial y el triunfo eventual del partido o coalición en el poder.

Cuadro 13
Fecha de los comicios presidenciales, mandatario en turno y candidato presidencial del oficialismo

Año de los comicios presidenciales	Mandatario en turno	Candidato presidencial del oficialismo
2009 y 2010	Michelle Bachelet	Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Fuente: Elaboración propia.

Posiblemente, la mayor ironía asociada con el resultado del oficialismo en esos comicios resida en que el comando del candidato presidencial de la coalición oficialista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, trabajó especialmente en ligar al aspirante con la imagen de la mandataria, bajo el supuesto de que el alto nivel de aprobación de Bachelet terminaría por traducirse en intención de voto hacia su candidatura, siguiendo las líneas teóricas asociadas a la función voto-popularidad (Espinosa, Morales y Perelló, 2009). Pero la estrategia terminó por resultar fallida. El presupuesto teórico de partida, en principio correcto, esa vez no les funcionó.

Para diciembre de 2009 la centroizquierdista "Coalición de Partidos por la Democracia" se propuso ganar su cuarta elección consecutiva desde el retorno de Chile a la democracia (1989). Aspiraba con ello a convertirse en la coalición que más tiempo había permanecido democráticamente en el poder en América Latina. Para alcanzar ese fin basaba sus aspiraciones en los siguientes resultados:

Desde que asumió el poder en 1990, la Concertación había guiado al país por un sendero de desarrollo y progreso. Los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) así como los de Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010) transformaron radicalmente

el país. La reducción de los niveles de pobreza, la ampliación de la cobertura de educación, salud y vivienda y el crecimiento económico fue notable abriendo las puertas del desarrollo a más personas. En ninguna época anterior Chile estuvo mejor que bajo las riendas de la Concertación. El país jamás progresó tanto y la consolidación de la democracia fue un hecho innegable. Ningún observador objetivo pasaba por alto que la Concertación transformó a Chile en la dirección correcta (Morales y Navia, 2010: 21-22).

Al mismo tiempo, la enorme popularidad de la presidenta saliente, Michelle Bachelet, que exhibía niveles de aprobación que no había recibido ningún mandatario en el país, parecía augurar que una vez más el traspaso de poder dentro de la propia coalición gobernante tenía enormes probabilidades de resultar exitoso, del mismo modo que lo había sido en los comicios de 1994, 2000 y 2006, respectivamente.

En esas condiciones favorables para que el partido o coalición gobernante alcance a retener el poder, el factor que puede detonar la división interna y con ello debilitar el traspaso de la popularidad del mandatario de turno en votos para el oficialismo es el proceso de selección del candidato a suceder al presidente, especialmente, cuando no se desarrolla cumpliendo requisitos de equidad, participación y transparencia.

Precisamente, desde su formación como coalición multipartidista en 1988, la Concertación tuvo altibajos con el proceso de selección del candidato presidencial. En las elecciones de 1990, aunque los partidos de izquierda miembros de la coalición consideraron apropiado que la Democracia Cristiana tenía el mejor derecho a escoger el candidato y declinaron sus aspiraciones presidenciales para favorecer una transición ordenada y no traumática hacia la democracia, al interior de la Democracia Cristiana no existió un mecanismo claro, transparente y legitimado para seleccionar al candidato:

> De hecho, el proceso de nominación interna que ungió a Patricio Aylwin como candidato presidencial estuvo marcado por acusaciones de irregularidades y negociados que hasta el día de hoy parcialmente tiñen la forma en que Aylwin logró la nominación de su partido (Morales y Navia, 2010: 29).

En las elecciones de 1993 la situación mejoró, pues los partidos de izquierda integrantes de la coalición lograron imponer un proceso de primarias que permitió a militantes y simpatizantes previamente inscritos definir el nombre del candidato. Fue la voluntad popular y no las estructuras de liderazgo partidistas las que definieron el nombre del candidato presidencial oficialista. Incluso, el entonces aspirante por el partido socialista, Ricardo Lagos, quién fue derrotado por Frei Ruiz-Tagle en las primarias de 1993, reconoció públicamente que la coalición oficialista había sentado el precedente de un mecanismo de legitimidad democrática para la selección del abanderado concertacionsita (Navia y Rojas, 2008).

Seis años después, en 1999, la Concertación dio otro paso en favor de profundizar el proceso democrático interno de selección del candidato presidencial implementando elecciones primarias abiertas y vinculantes. De hecho, el presidente Frei (1994-2000) intentó que el procedimiento de primarias fuera adoptado como ley y no que quedara como una decisión unilateral de la concertación, pero la iniciativa fue abortada en el senado por la oposición (Navia y Rojas, 2008). No obstante, el mecanismo fue aplicado en las propias primarias de la coalición gubernamental y de esa forma cualquier persona inscrita en los registros electorales que no fuera militante de algún partido ajeno a los de la Concertación podía votar para escoger al candidato oficialista. Contrario a su resultado de 1993, en esa oportunidad Ricardo Lagos logró emerger vencedor revistiéndose de una sólida legitimidad democrática con vistas a la disputa de la contienda presidencial en la que el contexto general fue

comparativamente más adverso para el propósito de continuidad gubernamental de la Concertación.

Pero hacia 2005 el avance se frenó. La Concertación demoró en establecer un mecanismo de selección de su candidato y finalmente quedó como única candidata la aspirante mejor situada en las encuestas, Michelle Bachelet. A diferencia de 1999, la Concertación no estableció desde temprano las reglas y un calendario para la selección de su candidato lo que facilitó que la nominación finalmente recayera en la persona que estaba mejor posicionada en las encuestas. Fue la popularidad anterior de Bachelet y no su desempeño en una campaña de primarias lo que la terminó convirtiendo en candidata presidencial de la Concertación, lo que evidenció una clara falencia en el proceso utilizado para seleccionar al candidato presidencial. La ausencia de un procedimiento claro y establecido desde temprano condujo a que la Concertación terminara diseñando un proceso *ad hoc* que le permitiera nominar al candidato que estaba mejor posicionado en las encuestas (Morales y Navia, 2010).

En 2009, al cabo de veinte años en el poder, los partidos de la Concertación seguían sin tener un mecanismo consensuado y establecido para escoger al candidato presidencial del conglomerado, sin embargo, el número de potenciales aspirantes era significativo. Figuraban entre ellos, los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Tanto Lagos como Insulza renunciaron, mientras Frei Ruiz-Tagle mantuvo sus aspiraciones. En esas circunstancias, la Concertación anunció nuevas reglas para desarrollar el proceso de primarias. Se optó por un mecanismo que permitía que un candidato se inscribiera para las primarias con el patrocinio de al menos seis legisladores de la Concertación. La decisión apuntaba a repetir la exitosa experiencia de 1999 cuando la concertación había celebrado primarias con múltiples candidatos proceso que a la postre se convirtió en una fuente de legitimidad para las aspiraciones del

aspirante vencedor, Ricardo Lagos. En ese contexto, el diputado socialista Marco Enríquez- Ominami, fue el primero que oficialmente anunció su intención de contender en las primarias. Sin embargo, el procedimiento inicial de nominación de candidatos a las primarias fue descartado, el liderazgo de la concertación promovió un nuevo cambio en las reglas del juego. En efecto, las cúpulas de los partidos de la coalición decidieron que, de celebrarse, las primarias se realizarían entre candidatos nominados por cada uno de los cuatro partidos de la Concertación. El cambio de las reglas de juego otorgó más poder sobre la selección del candidato presidencial de la coalición gubernamental a los liderazgos partidistas. Los partidos decidirían los nombres de los aspirantes e incluso existió la posibilidad de que podrían también negociar con el propósito de designar un candidato único sin necesidad de efectuar primarias. Las variaciones introducidas estrictamente favorecían la candidatura del ex presidente Frei. Ante el reclamo de desarrollar primarias abiertas, la concertación obstaculizó el proceso haciendo caso omiso de la necesidad de renovación y competencia (Espinoza, Morales y Perelló, 2010).

Las cúpulas de tres de los cuatro partidos integrantes de la Concertación, Partido Democracia Cristiana (PDC), Partido Socialista (PS) y Partido Por la Democracia (PPD), terminaron nominando a Frei Ruiz-Tagle su candidato presidencial, pero el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), nominó al senador José Antonio González, forzando la realización de unas primarias para las que se acordaron un grupo de reglas que pusieron de manifiesto que se trataba de un proceso electoral interno parcial, regionalmente limitado, rápido y favorable a la candidatura de Frei. “Así, mediante un particular sistema de primarias, Frei fue proclamado como el único abanderado de la coalición oficialista” (Espinoza, Morales y Perelló, 2010). La cúpula de la Concertación negoció unas reglas de primarias que hacían prácticamente imposible una derrota de Frei. La primaria de 2009, “en lugar de transformarse en un proceso abierto y parti-

cipativo, reeditó las decisiones cupulares y el encapsulamiento de las élites de los partidos" (Contreras, 2010: 145).

El efecto de esa forma de proceder sobre la unidad de la Concertación se hizo sentir. Como consecuencia, en primer lugar, se hicieron públicas las confrontaciones entre los máximos dirigentes de la Concertación, especialmente entre el partido del aspirante que enfrentó a Frei Ruiz-Tagle en el simulacro de primarias (PRSD) y el liderazgo del PS, que acusó a los primeros de tener interés en resquebrajar la unidad de la coalición, dando lugar a que el PRSD se excluyera de participar en las reuniones de los líderes partidarios de la Concertación hasta que el presidente del PS, Camilo Escalante, no ofreciera disculpas públicas. En segundo lugar, el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami renunció a su partido y lanzó su candidatura presidencial como independiente (Contreras, 2010). En tercer lugar, el diputado socialista Jorge Arrate, también renunció a su organización y se convirtió en candidato presidencial de la izquierda extraparlamentaria. "Decepcionado por la forma en que el Partido Socialista llevaba a cabo la selección de su candidato presidencial, Arrate renuncia al partido, y posteriormente, es elegido como candidato de la coalición de izquierda Juntos Podemos" (Garrido, 2010: 123).

De esa forma, el proceso de nominación del candidato presidencial tuvo efectos desfavorables para la eventual continuidad de la coalición gubernamental. Los esfuerzos cupulares por presentar un candidato único, en realidad generaron dos candidatos adicionales que contendieron paralelamente a la coalición. Debido a que la equidad y competitividad de las primarias de la coalición de gobierno fue puesta en duda por referentes de la propia Concertación, los principales actores insatisfechos crearon o se integraron en otras organizaciones con el propósito de atraer a la mayor parte del votante oficialista y lograr pasar a la segunda vuelta. Con esa decisión, la primera vuelta electoral se transformó también en una especie de primaria oficialista sumamente disputada. El elector pro

gubernamental se vio obligado a elegir entre tres alternativas oficialistas que, además, compitieron entre sí con particular dureza comprometiendo así, con vista a la contienda en segunda vuelta, el proceso de cicatrización o sanación de las heridas que mutuamente se infligieron.

Aprobación presidencial de Michelle Bachelet

La dinámica de la aprobación de la presidenta durante su mandato, evidenció que en los primeros dos años de su gobierno la mandataria tuvo que lidiar con caídas en la aprobación de su gestión, debido a asuntos cuya solución se había continuamente aplazado por los gobiernos de centroizquierda, como la gratuidad de la educación básica y decisiones fallidas en torno a servicios como el mejoramiento del transporte urbano. La recuperación llegó hacia finales de 2008. A partir de ese momento las altas evaluaciones a su gestión (superiores al 60%) la acompañarían hasta el final de su mandato.

Durante el cuatrienio que duró la gestión, los principales puntos de conflicto como de inflexión de la aprobación de la mandataria fueron: 1) las protestas estudiantiles de mayo y junio de 2006; 2) los problemas con la implementación del nuevo sistema de transportes en Santiago, el Transantiago, en 2007; 3) la reforma del sistema de pensiones de 2008; 4) y de manera general, la decisión de Bachelet de mantener una férrea disciplina fiscal durante los años del *boom* de los precios del cobre, resistiendo presiones de todos los sectores políticos que pedían aumentar el gasto, lo que dio márgenes de maniobrabilidad al Estado chileno una vez que estalló la crisis económica mundial de 2008. En ese sentido, la mandataria defendió una política fiscal austera que permitió la acumulación de grandes reservas estatales en dos fondos soberanos en el exterior. Luego cuando el país enfrentó la severa crisis económica causada por variables externas, la aprobación de Bachelet despegó a

niveles inéditos en el Chile post Pinochet (superiores al 70%). Aunque Bachelet no podía competir por la reelección sucesiva, todo indicaba que el candidato presidencial que contara con el apoyo de la popular presidenta tenía una ventaja considerable con respecto a sus rivales (Navia y Cabezas, 2010; Morales y Navia, 2010).

Cuadro 14
Dinámica de la aprobación de la presidenta
Michelle Bachelet (2006-2010)

Mes y año	Popularidad
Diciembre 2006	52%
Junio 2007	41%
Diciembre 2007	39%
Junio 2008	40%
Diciembre 2008	43%
Junio 2009	67%
Octubre 2009	78%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta CEP.

La primera y segunda vueltas electorales

En la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2009 en Chile se presentaron cuatro candidatos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle representando a la coalición gubernamental "Concertación de partidos por la democracia", Marco Enríquez- Ominami, como candidato independiente, Jorge Arrate, por el Partico Comunista y Sebastián Piñera, por la centroderechista Coalición por el Cambio.

La dinámica errática seguida por el proceso de selección del candidato presidencial de la Concertación tuvo su reflejo en los resultados electorales de esa primera fase. El candidato de centro derecha, Sebastián Piñera, ganó esa instancia con un resultado que lo situó con grandes probabilidades de repetir su

triunfo en la segunda etapa. Mientras Piñera obtuvo 44.05%, el candidato presidencial de la Concertación, Frei Ruiz-Tagle sumó 29.6%, una votación muy por debajo del promedio histórico de la Concertación. Por su parte, el candidato independiente Enríquez-Ominami obtuvo un respaldo electoral equivalente al 20.1% de los votos, el mejor resultado alcanzado por un candidato de su tipo en una elección presidencial chilena posterior a la etapa pinochetista, en tanto, Jorge Arrate sumó el 6.2%.

Aunque el conjunto de los votos obtenidos por los candidatos presidenciales de centro izquierda e izquierda en primera vuelta, Frei Ruiz -Tagle, Enríquez-Ominami y Arrate, superaba la votación obtenida por el concursante de centro derecha, Sebastián Piñera (55.9% contra 44.05%), la división oficialista no pudo ser resuelta tampoco en la segunda fase de los comicios:

> En la primera fase de la campaña, incluso, Enríquez-Ominami fue sustantivamente más agresivo con Frei que con el propio Piñera. Criticó ácidamente su gobierno, cuestionó la altura moral de Frei en caso de que llegara nuevamente al poder y formó una lista parlamentaria que tenía por objetivo desbancar a algunas figuras de la Concertación. Este escenario de competencia en la Concertación terminó por favorecer a Piñera (Morales y Sánchez, 2010: 58).

A cinco días de tener lugar la elección definitiva, Enríquez-Ominami hizo un débil llamado a votar, según sus propias palabras, "por el candidato del 29%" (Frei Ruiz-Tagle), acto que lo que dejó bien claro fue la falta de convicción política en respaldar al candidato de la Concertación:

> Finalmente, Enríquez-Ominami optó por votar por el entonces oficialismo, pero sin pedirles a sus adherentes que hicieran lo mismo. Como resultado el 17 de enero de 2010 Piñera celebraba con sus seguidores el triunfo, anunciando una segunda transición que dejaba atrás los años de la Concertación y prometía un nuevo camino para Chile (López y Baeza, 2011: 291).

Ocho años después, concluida la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 en Chile, Enríquez-Ominami, reconocería que en los comicios de 2009, él jamás se pronunció de forma rápida, tajante y clara a favor del candidato presidencial de la Concertación (La Tercera, 2017). De cualquier forma, la ruptura, el enfrentamiento, la crítica y luego la ausencia de espaldarazo a la candidatura de Frei Ruiz-Tagle, abonó no a favor de la cicatrización sino de la profundización de la división en las bases de apoyo del oficialismo. Aunque en la fase decisiva, Frei Ruiz-Tagle logró reducir de forma importante la diferencia que lo separó en la primera vuelta de Sebastián Piñera, de 15 a 3 puntos porcentuales, estudios sobre el comportamiento del traspaso de votos demuestran que la división oficialista entorpeció de forma decisiva ese proceso. Así por ejemplo, del 20.1% de votantes que respaldó a Enríquez-Ominami en la primera fase, sólo el 49% apoyó a Frei en segunda vuelta, el 21% votó por Piñera y el 29.7% votaría nulo o blanco (Osorio y Schulter, 2010).

Osorio y Schulter (2010) también coincidieron con Navia (2009) en que Enríquez-Ominami, fue el hijo ilegítimo de Bachelet, pues recogió el discurso de democracia de abajo hacia arriba que había prometido la expresidenta, pero que dejó de lado tras las protestas de los estudiantes secundarios de mayo a junio de 2006. Para estos autores la gran diferencia entre Bachelet y Enríquez-Ominami es que Bachelet pretendía impulsar más participación ciudadana desde la Concertación, mientras que Enríquez-Ominami intentaba hacer las reformas desde afuera.

Aunque la falta de unidad manifiesta fue el factor decisivo que frustró las aspiraciones oficialistas de conservar el poder, nuestro análisis no reflejaría la complejidad del caso objeto de estudio si pasáramos por alto que, en los comicios presidenciales de 2009 y 2010 celebrados en Chile, también se manifestaron otros fenómenos potencialmente adversos a la candidatura gubernamental como la desaceleración económica, la unidad

del bloque opositor de centroderecha y el hecho de que este último también dejó atrás su proximidad con la dictadura pinochetista. Pero esos factores, a los que podemos denominar confluyentes, de algún modo se habían manifestado también en anteriores comicios sin que alcanzaran por ello a comprometer la victoria de la coalición gubernamental. Por ejemplo, en los comicios presidenciales de 1999, cuando el entonces candidato de la concertación, Ricardo Lagos, contendió en un contexto electoral signado por una fuerte desaceleración económica durante los años finales del mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), ello no impidió al oficialismo imponerse en las urnas.

Al mismo tiempo, aunque resulta indudable que en 2009 y 2010, la situación económica era desfavorable para la intención oficialista de retener el poder, pues como consecuencia del impacto de la crisis financiera mundial de 2008 la economía chilena había decrecido, el propio origen externo de la desaceleración económica permitió que la ciudadanía pudiera apreciar la política responsable de disciplina fiscal seguida por el gobierno de Bachelet en los años anteriores cuando el país promediaba altos niveles de crecimiento del producto interno bruto convirtiéndose en detonante para el incremento exponencial de la popularidad (78%) de la mandataria concertacionista (Navia y Cabezas, 2009; Morales y Navia, 2010).

En efecto, la responsabilidad por la crisis económica, generalmente proclive a reducir el respaldo electoral de los gobiernos, en el caso de los comicios presidenciales en Chile 2009 y 2010, como regla no fue endosada a la gestión oficialista. Las fuentes del estallido fueron de origen externo. Además, la desaceleración facilitó que los ciudadanos percibieran los beneficios de la política fiscal responsable seguida por la administración durante los años de bonanza. De ese modo, resultó en cierto modo contrarrestado el potencial efecto adverso de la crisis económica en el voto por el oficialismo.

Otro factor desfavorable a los propósitos oficialistas de retener el poder en los comicios presidenciales de 2009 y 2010, fue que la oposición de centroderecha presentó una alternativa democrática unida. En efecto, la oposición dejó atrás su antigua proximidad con la dictadura pinochetista. Hay que recordar que, precisamente la cercanía y complicidad de la oposición con el régimen militar que asoló al país entre 1973 y 1989, constituyó el factor clave que impidió a esa fuerza política imponerse en los comicios presidenciales de 1999, celebrados en medio de un contexto decididamente adverso para las aspiraciones de continuidad de la coalición oficialista de centroizquierda. Sin embargo, a diferencia de los comicios de 1999, en las elecciones presidenciales celebradas en 2005 y 2006, la oposición de centroderecha presentó mejores credenciales de compromiso con la democracia. Si bien es cierto que en la primera vuelta electoral de los comicios presidenciales de 2005, la derecha presentó dos candidatos presidenciales, el propio Sebastián Piñera representando al partido Reconstrucción Nacional (RN) y Joaquín Lavín a Unión Democrática Independiente (UDI), con vista a la segunda vuelta, Piñera, que obtuvo una mayor votación que Lavín, resolvió en forma expedita que UDI le diera su apoyo irrestricto en la elección. Además, Piñera centró su campaña en la idea de que el desarrollo del país exigía la alternancia política en el poder, pues la coalición gubernamental había gobernado durante tres mandatos y se encontraba muy desgastada para continuar haciéndolo. Que en definitiva, Sebastián Piñera y no Joaquín Lavín, resultara el candidato de la centroderecha en la decisiva segunda vuelta electoral en 2006 contribuyó también a darle fuerza a la perspectiva democrática de esa fuerza. Desde 1990, Piñera, se había mostrado como un político más liberal, desligado por completo de Pinochet y su gobierno. Él mismo había votado NO en el plebiscito de 1988, donde se definió la continuidad del régimen pinochetista y puso especial énfasis en la campaña en sumar también a sus filas a

antiguos adherentes de la coalición gubernamental de centroizquierda (Gamboa, 2006).

Conclusiones

La división manifiesta del oficialismo en un proceso electoral constituye una variable que, cuando se presenta, lo hace con la mayor intensidad. Se trata de un proceso notorio, que no pasa desapercibido para la mayoría de la opinión pública mientras transcurre la campaña electoral. Ello se debe a las críticas que líderes de opinión dentro del oficialismo realizan al proceso de selección del candidato presidencial que son difundidas ampliamente por los medios de comunicación y de auto comunicación de masas. También a la decisión que toman algunos referentes gubernamentales de crear o integrase a una fuerza política electoral alternativa. Y, por supuesto, a que buena parte del discurso de campaña que expresan va dirigido, precisamente, contra el candidato presidencial elegido por el partido o coalición de gobierno.

La principal secuela de la división manifiesta del oficialismo en el proceso electoral es que tiene el efecto de dispersar el voto oficialista, elevando los costos y tiempos de una eventual reunificación del mismo para enfrentar una segunda vuelta. Mientras más aguda es la división menos garantías existen que los votantes progubernamentales que tomaron distancia con respecto al candidato electo por el partido o coalición de gobierno, accedan luego unánimemente a darle su respaldo.

Constituye un aspecto adicional de interés presente en el contexto de la elección presidencial de 2009 y 2010 en Chile el hecho de que, paralelamente al resquebrajamiento profundo de la unidad en la coalición gubernamental, se manifestaron a su vez otros factores potencialmente adversos para sus aspiraciones de retener el poder. Sin embargo, la división manifiesta, que mermó las posibilidades de concentración del voto progu-

bernamental, fue no sólo lo nuevo sino también lo que vino a inclinar definitivamente la balanza a favor de la oposición en los comicios presidenciales de 2009 y 2010, debido a que el resto de los factores adversos se habían también puesto de manifiesto en comicios presidenciales anteriores (1999/2000 y 2005/2006), sin que lograran por ello ser determinantes en el desenlace electoral. En ese punto, no hay disenso entre los académicos que conocen en profundidad la dinámica electoral en Chile:

> Piñera se vio favorecido por el contexto político de 2009. La división concertacionista fue un punto de inflexión para estas elecciones no sólo por la fuga de diputados y senadores del PS, PDC y PPD, sino también por la irrupción de Marco Enríquez-Ominami como candidato presidencial independiente. En la práctica, la Concertación compitió con dos candidatos cuyas bases electorales jamás sumarían en una segunda vuelta. De hecho, los votantes socialistas tenían tres opciones en esta elección presidencial: Eduardo Frei por la Concertación, Jorge Arrate, (ex miembro de la Concertación y del PS) por el Juntos Podemos, y Marco Enríquez-Ominami (Morales y Sánchez, 2010: 57).

El caso de México 2012. División interna oculta. Contexto de la elección presidencial

Si los comicios presidenciales de 2009 y 2010 celebrados en Chile, constituyeron un ejemplo de división interna manifiesta del oficialismo, las elecciones de 2012 en México, fueron reflejo de otro tipo fractura hacia el interior del partido de gobierno, la división interna oculta.

Un reto específico para el análisis de cualquier contienda donde la fractura del oficialismo tiende a ser solapada es que los poderosos actores involucrados, en virtud de sus intereses a mediano y largo plazo, optan por encubrir claves de su com-

portamiento desunificador para no resultar alcanzados por los costos políticos. Por esa razón, el proceso de identificación de las evidencias de ruptura tiende a ser más complejo.

Simultáneamente, el contexto de ocultamiento de maniobras y decisiones clave es favorable para que otros factores, eventualmente incidentes, consigan entonces de forma errónea ser calificados como decisivos. Se trata de un proceso de suplantación inducida, que puede tener lugar con la complicidad de los poderosos actores cuyos actos minaron de forma determinante la cohesión interna de la organización, restándole competitividad ante las fuerzas políticas con probabilidades de imponerse en los comicios. En este sentido, cuando hablamos de división oculta o solapada del oficialismo lo que tenemos en cuenta es que, mientras transcurre la campaña electoral, la fractura interna de la organización logra pasar como tendencia desapercibida para el grueso de la opinión pública, debido a la ausencia en esa etapa de evidencias concluyentes. Ello no entra en contradicción con el hecho de que observadores especializados logren captar en esa fase indicios o elementos de ese tipo de comportamiento. Tampoco de que transcurrido un margen de tiempo prudencial desde la conclusión de los comicios, los investigadores consigan reunir cierta evidencia con la que gradualmente sensibilizan en esa dirección a segmentos de la opinión pública.

La división oculta del partido o coalición de gobierno en el momento de participar en los comicios presidenciales la detectamos a través de las siguientes manifestaciones y comportamientos: la presencia de tensión entre el programa del candidato presidencial del partido de gobierno y la gestión del gobierno saliente, consistente en una falta de compromiso o de defensa por parte del candidato oficialista de las principales políticas seguidas y resultados alcanzados por el mandatario de turno. El escaso respaldo logístico y mediático del presidente de turno a la campaña electoral del candidato del partido en el gobierno.

Cuadro 15
Fecha de los comicios presidenciales, mandatario de turno y candidato presidencial del oficialismo

Año de los comicios presidenciales	Mandatario en turno	Candidato presidencial del oficialismo
2012	Felipe Calderón	Josefina Vázquez Mota

Fuente: Elaboración propia.

En los comicios presidenciales de 2012 el partido de gobierno, Acción Nacional (PAN), se propuso ganar su tercera elección consecutiva luego de sus victorias electorales de 2000 y 2006, sin embargo, el contexto electoral que enfrentó fue controvertido debido fundamentalmente a que si bien el presidente en funciones, Felipe Calderón, se encontraba bien evaluado, simultáneamente, en la sociedad existía una fuerte sensación de que había fracasado el enfrentamiento frontal contra el narcotráfico, justamente, la política central de su gobierno. A su vez, los resultados que arrojaron las primarias del partido en el poder fueron distintos a las expectativas del gobernante de turno, el aspirante que contaba con el respaldo del mandatario Felipe Calderón y, por tanto, de la maquinaria gubernamental panista, Ernesto Cordero, fue derrotado por Josefina Vázquez Mota, que de forma sorpresiva se convirtió en la candidata presidencial del partido. Por último, la campaña de la candidata presidencial del partido en el poder, Josefina Vázquez Mota, no se pronunció de forma explícita desde un inicio por respaldar y dar continuidad a la política principal de la administración saliente, la lucha contra el narcotráfico. Todo lo contrario, Vázquez Mota se posicionó de manera ambigua con respecto al principal legado del sexenio calderonista, comportamiento que constituyó un incentivo adicional para el desencuentro entre el mandatario de turno y la candidatura presidencial de su partido.

En efecto, como es unánimemente reconocido en la literatura, a inicios de su mandato el presidente Calderón decidió que el eje de sus seis años de gobierno sería el enfrentamien-

to frontal contra el narcotráfico (Chabat, 2010; Morales, 2011; Montero, 2012; Robles, Calderón y Magaloni, 2013; Olmeda y Armesto, 2013). Significó un giro abrupto con relación al programa que había dado a conocer en su campaña electoral, en el que no se hizo referencia alguna a ese objetivo. Al contrario, durante la campaña, Felipe Calderón, situó la creación de empleos como el centro de la gestión de un eventual nuevo gobierno panista. Como consecuencia de la decisión de combatir frontalmente al narcotráfico, se produjo un incremento sustancial de la violencia en todo el país, creció el número de muertes letales, secuestros y extorsiones y se incrementó la percepción de inseguridad ciudadana. El propio ejército se vio involucrado de forma creciente en ejecuciones extrajudiciales y otras flagrantes violaciones de los derechos humanos.

Hacia el final del sexenio, mientras que la propaganda gubernamental presumió de haber detenido o desactivado a un número importante de jefes de las principales organizaciones criminales, las evaluaciones provenientes de fuentes académicas y periodísticas coincidieron en que el descabezamiento de los cárteles provocó la fragmentación de los mismos en diferentes células mucho más violentas y sanguinarias, incrementando la inseguridad a lo largo y ancho del país (Aguilar y Castañeda, 2009; Morales, 2011). En tanto, las encuestas nacionales registraron que la opinión casi generalizada de la ciudadanía se inclinó a considerar que el gobierno del presidente Calderón perdió la guerra contra el narco (Trejo, 2012). De acuerdo con registros de casas encuestadoras, seis de cada diez ciudadanos consideraron un fracaso gubernamental la guerra contra el narcotráfico (Gabinete de Comunicación Estratégica, 2012; Parametría, 2012), mientras que en el primer dialogo entre el gobierno federal y con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el presidente reconoció públicamente que la violencia había afectado la vida de muchas familias en el país y que el estado es sujeto corresponsable de esa situación. Posteriormente, la postura no fue reivindicada en los marcos

del segundo dialogo, donde al contrario, el mandatario legitimó las acciones oficiales ante las diversas representaciones civiles presentes llegando a afirmar que su estrategia contra el crimen organizado era la adecuada (Meyer y Ríos, 2012).

En ese escenario en febrero de 2012 tuvieron lugar las elecciones primarias del PAN a las que se presentaron tres candidatos, Enrique Cordero, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota y en las que el primero fue claramente identificado como el aspirante que contaba con el respaldo del presidente, Felipe Calderón:

> Parecía una reedición de la campaña interna de 2006. Los funcionarios panistas arropaban a Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda. Los gobernadores le daban su respaldo público. El presidente conducía el descarte de los aspirantes que podían hacer sombra a su delfín: Alonso Lujambio, Javier Lozano, Heriberto Félix, Emilio González Márquez. Vázquez Mota sólo tenía el apoyo de un centenar de diputados (Mauleón, 2012).

Pero las preferencias de los votantes terminaron favoreciendo a Vázquez Mota, que se impuso a la candidatura de Cordero. "No era la candidata oficial. Su triunfo sólo se explica por los diputados, y porque supo echarse en la bolsa a las bases de 25 estados" (Mauleón, 2012). "En el proceso se evidenció un claro apoyo del presidente Calderón a favor de Cordero" (Vela, 2013).

La victoria de Vázquez Mota en las primarias trastocó los planes de sucesión calderonista. En lugar de resultar electo un continuador solícito con el legado del mandatario de turno, las bases respaldaron a un candidato que al carecer justamente del respaldo directo de funcionarios, gobernadores y del propio presidente, se ganó a su vez el derecho a decidir con cierta autonomía, cuál sería su ruta hacia la presidencia. La eventual sucesión, al menos en la forma en que la preveía el gobernante de turno, se descarriló a partir de ese resultado, sin dejar de tomar en cuenta que, las fricciones durante las primarias entre

los grupos que apostaron por Cordero y Vázquez Mota, respectivamente, no fueron precisamente superficiales. “La contienda interna fue salvaje, y Vázquez Mota nunca pudo sanar las heridas que dejó. Por el contrario, se profundizaron” (Rivapalacio, 2012).

La conversión de Josefina Vázquez Mota en candidata presidencial del partido en el gobierno, se produjo a su vez en medio de un intenso debate en el terreno de la opinión pública acerca de los resultados y el futuro de la guerra contra el narco. El debate, en cierto sentido, fue eludido por la campaña del principal partido opositor (PRI), al que según las encuestas de aquel momento, favorecían las intenciones de voto. En ese contexto, la campaña de la candidata presidencial panista se posicionó al respecto, en el mejor de los casos, de forma ambigua. “Su propuesta osciló entre la defensa de la continuidad y la necesidad de diferenciarse de Calderón” (Olmeda y Armesto, 2013). En ese sentido, la consigna principal de la campaña panista fue “Josefina, diferente”, lo que naturalmente dio lugar a interpretaciones diversas y especialmente, a dejar abierta la interrogante de si la diferencia era respecto al gobierno en funciones, esto es, con relación a Calderón y su política de enfrentamiento frontal al narco.

Otro incidente que alertó sobre la naturaleza de la relación que se estableció entre el presidente Felipe Calderón y la campaña de la candidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, fue la queja manifestada por la segunda acerca de que su campaña era espiada por Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, y sus conversaciones telefónicas filtradas por Alejandra Sota, coordinadora general de comunicación social y vocera del gobierno federal (adnpolítico, 2012). Ese asunto nunca se aclaró ante la opinión pública. Josefina no negó la autenticidad de la conversación, pero tampoco insistió en aclararla, mientras desde el gobierno los actores implicados hicieron mutis (Hernández, 2012).

Aprobación presidencial de Felipe Calderón

A pesar del incremento de la sensación de fracaso de la guerra contra el narcotráfico a nivel de la ciudadanía y de buena parte de la clase política y de la gradual pérdida de poder territorial que afectó al partido de gobierno en los comicios estatales y municipales previos a la elección presidencial de 2012 (Temkin y Salazar-Elena, 2012), los registros de las principales encuestadoras nacionales mostraron que la popularidad del presidente Felipe Calderón, se mantuvo relativamente alta (superior al 60% de aprobación), durante todo el sexenio.

Para que pueda tenerse una idea cabal, el nivel más bajo de aprobación registrado por el mandatario fue de 47% a inicios de su mandato, resultado que se asoció con el conflicto postelectoral de 2006. El entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, es declarado ganador de la elección con una diferencia de 0.56 puntos porcentuales con respecto al candidato que arribó en segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, en un ambiente en que se entremezclan acusaciones de fraude electoral, reclamo de reconteo de votos, amenazas de desconocimiento de su legitimidad como presidente constitucionalmente electo a lo largo del eventual mandato y la decisión de la justicia electoral de reconocerlo finalmente como ganador de la contienda.

Después del conflicto postelectoral y a lo largo del sexenio, la popularidad del mandatario se mantuvo como tendencia alta, llegando a alcanzar picos superiores al 70% de aprobación, en tanto, el promedio de la aprobación durante sus seis años de gobierno fue superior al 60%. De hecho, el mandatario de turno enfrenta el proceso electoral de 2012 donde se eligió a su sucesor con un nivel de aprobación de esa naturaleza.

Algunos análisis previos a los comicios presidenciales dieron cuenta de la falta de correspondencia entre la popularidad del presidente y las percepciones negativas de los ciudadanos con respecto al rumbo del país y el estado de la guerra y cues-

tionaron por qué esos negativos no se trasladaron a la evaluación presidencial, alegando como hipótesis explicativa una supuesta incapacidad de los mexicanos para criticar a las autoridades y reprobarlas. (Parametría, marzo de 2010, La aprobación del Tlatoani).

Cuadro 16
Dinámica de la aprobación del presidente
Felipe Calderón (2006-2012)

Mes y año	Popularidad
Agosto 2007	69%
Agosto 2008	60%
Diciembre 2009	60%
Septiembre/octubre 2010	59%
Octubre/noviembre 2011	66%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Parametría.

La elección presidencial de 2012

En definitiva, son cuatro los candidatos presidenciales que se presentaron a la contienda presidencial de 2012 en México: Josefina Vázquez Mota por el partido gobernante Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador, por la coalición integrada por el partido de la revolución democrática (PRD) y el partido del trabajo (PT), Enrique Peña Nieto, por el partido revolucionario institucional (PRI) y el partido verde ecologista de México (PVEM) y Gabriel Quadri por el partido nueva alianza, PANAL.

En términos generales, otro aspecto que marcó la contienda fue que a lo largo de todo el proceso las encuestas de intención de voto dieron como amplio favorito al candidato del PRI, ex gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, otorgándole una diferencia abultada, como regla siempre mayor a los diez puntos porcentuales, con respecto al candidato ocupante del segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador. La gran sorpresa una vez computados los votos electorales por

la autoridad correspondiente fue que la diferencia final entre los ocupantes de los dos primeros lugares, Peña Nieto y López Obrador, respectivamente, fue menor a los 7 puntos porcentuales.

Alejandro Moreno (2012) reconoció que:

> la principal falla de las encuestas en 2012 se observa con mayor claridad en la distancia entre primero y segundo lugar que finalmente hubo. Según los resultados oficiales, Enrique Peña superó a López Obrador por 6.8 puntos porcentuales. En promedio, las encuestas preelectorales finales estimaban una distancia poco mayor a los 14 puntos, e incluso hubo encuestas finales que preveían hasta 20 puntos de distancia (Moreno, 2012).

Los resultados electorales muestran que el partido gobernante, representado por Josefina Vázquez Mota, fue relegado al tercer lugar de la contienda con una diferencia de casi 13 puntos porcentuales con relación al caudal de votos obtenido por el ganador y a casi 6 puntos porcentuales del ocupante del segundo lugar. ¿Por qué la relativamente alta popularidad del mandatario Felipe Calderón no se vio trastocada en votos para el candidato presidencial de su partido?

Dos hipótesis consideraremos como dominantes al respecto: 1) una mala evaluación del presidente Calderón específicamente en el tema de la lucha contra el crimen (Brown, 2014); 2) la división entre los panistas (Rivapalacio, 2012).

La primera hipótesis es objetada tanto por resultados de investigaciones como de encuestas. Por ejemplo, Aguirre (2015) investiga los factores que explican el comportamiento del electorado mexicano en los comicios de 2012 y encuentra que:

> llama poderosamente la atención que la percepción de la seguridad pública tampoco fuera el factor principal en el proceso de toma de

> decisiones del votante mexicano en la elección de 2012. Éste es el hallazgo más importante de la investigación (Aguirre, 2015)[1].

Por su parte, contrariando también la supuesta mala evaluación del gobierno de Calderón específicamente en el tema de la lucha contra el crimen, una encuesta de Parametría de septiembre de 2012 reportó que el rubro de combate al narcotráfico es el cuarto mejor evaluado en la gestión presidencial de Calderón (40%) después de carreteras, salud y educación (Parametría, 2012). Mientras en la misma dirección BCG-Beltrán y asociados registraron una aprobación del 61% en el rubro del combate al narcotráfico y el crimen organizado (Excélsior, 2012).

Coincidimos con Rivapalacio que el factor que puso en desventaja al partido de gobierno (PAN), desde el inicio del proceso electoral 2012 determinando posteriormente su derrota, es la división interna que termina por lastrar la propia campaña del PAN, el desempeño de la candidata presidencial y a su vez, multiplicó exponencialmente la sensación de desgaste del partido tras dos sexenios consecutivos de gestión federal.

Una revisión cuidadosa y exhaustiva de diferentes fuentes con el apoyo de los indicadores diseñados en esta investigación, hacen factible la identificación de hechos y la presentación de diferentes evidencias que sustentan que la elección presidencial mexicana de 2012, califica como un caso en el que la división

[1] Sin embargo, el mismo autor reporta como la variable más clara para explicar el comportamiento del electorado mexicano en la elección la desaprobación del presidente. Esta última conclusión contradice los registros de casas encuestadoras como Parametría y Reforma y de la propia BGC, que reportan una alta aprobación de Calderón a los largo de todo el sexenio y fundamentalmente en los años preelectoral y electoral. La fuente de información empleada por Pérez (2015) fueron algunos reactivos de la Encuesta de Salida y Conteo Rápido realizada por la encuestadora BGC-Ulises Beltrán y Asociados, durante la jornada electoral del 1 de junio de 2012. La encuesta contiene 11232 entrevistas pero no se utilizó la totalidad de ellas. En tanto la encuesta en vivienda de BGC-Ulises Beltrán realizada entre el 22 y el 27 de febrero de 2012 reportó que la gestión de Calderón es aprobada por el 61% de la población encuestada.

oculta anula la asociación entre la aprobación presidencial y el resultado electoral del partido de gobierno.

Si bien la continuidad de la guerra frontal contra el narco constituyó un tema que podía estar prácticamente ausente de la plataforma de los candidatos opositores, fue importante la actitud que asumió la propia candidata del partido de gobierno, Josefina Vázquez Mota, con respecto a la principal política del gobernante de turno.

En general, la actitud del candidato presidencial del partido de gobierno hacia el legado del gobernante de turno define, finalmente, buena parte del tipo de respaldo que el primero recibirá del segundo durante el proceso electoral. En el caso de México, a pesar de que las regulaciones electorales limitan el involucramiento del mandatario de turno en la campaña electoral, no hay que subestimar el potencial de influencia indirecta del ejecutivo en ese proceso. Ya sea de forma mediática, logística o por otras vías más difíciles de clasificar, el ejecutivo federal siempre cuenta con un arsenal de herramientas para impulsar la campaña del candidato de su partido. La experiencia comparada demuestra que cuando ese potencial, por las razones que sean, no se pone en función de respaldar la campaña del candidato oficialista o lo hace de forma limitada, las posibilidades de triunfo del partido de gobierno se reducen. Así ocurrió, por ejemplo, en Argentina 1999, con motivo de la ruptura entre el mandatario saliente, Carlos Saúl Menem, y el candidato oficialista Eduardo Duhalde y también en Estados Unidos 2000, como resultado del distanciamiento entre el candidato demócrata Al Gore y el gobernante saliente William Clinton.

En los comicios presidenciales de 2012 en México, en medio de los debates en torno a la necesidad de cambiar la forma de enfrentar el narco seguida por la administración de Calderón, la campaña de la candidata presidencial del partido de gobierno evitó en sus inicios dar un fuerte espaldarazo a la continuidad de la política que el gobernante de turno había situado en el centro de su gestión. En efecto, Josefina Vázquez

Mota, que estaba lejos de ser la candidata presidencial predilecta del gobernante de turno, a su vez no se comprometió con la continuidad de la guerra contra el narco en los términos en que Felipe Calderón la había defendido y aplicado a lo largo de su sexenio:

> La candidata del partido en el gobierno habla de su diferencia pero nadie sabe en qué consiste la novedad. ¿Se trata de la cuarta candidatura de la oposición? ¿Quiere Vázquez Mota construir una campaña que contraste con la política de Calderón? El hecho es que la carta principal de su candidatura queda, de inmediato, vaciada de contenido (Silva-Herzog, Reforma, 2012).

El mensaje de la consigna de la candidata presidencial panista ("Josefina, diferente") se decantó por una falta de compromiso explícito con la columna central del discurso gubernamental y en cierto sentido, fue interpretado como una especie de "fuego amigo" contra el principal legado del mandatario de turno, Felipe Calderón.

Ciertamente, hacia marzo de 2012, la campaña de la candidata panista se reestructuró, son incluidos en el comando colaboradores cercanos al mandatario, el propio presidente del partido y el lema central fue sustituido por el de "Josefina, mejor". Incluso, de forma sorpresiva, en medio del cierre de campaña en Guadalajara, Vázquez Mota ofreció al presidente saliente el puesto de procurador general de la República en un eventual nuevo gobierno panista, hecho que apuntó hacia a un eventual compromiso final de la candidata con la herencia calderonista. Sin embargo, las tres etapas que con toda claridad identificamos en el desenvolvimiento de la campaña, ponen en evidencia que el proceso que llevó a la candidata presidencial del partido en el gobierno a aproximarse, nunca de manera convincente, a la principal política acometida por el mandatario de turno, fue dubitativo, dificultoso y dilatado y esa conducta, tendrá su reflejo en la actitud que finalmente

asumió Calderón con respecto a la campaña de su propio partido. "Josefina Vázquez Mota nunca se asumió como una opción de continuidad en el gobierno, lo cual le restó la simpatía y mayor apoyo del presidente Felipe Calderón, sumado a que Enrique Cordero era el aspirante del presidente" (Bastidas, 2012).

En resumen, la falta de compromiso explícito con la herencia fundamental del calderonismo, los incidentes de espionaje y filtración desde el gobierno reportados por la campaña panista e incluso el relanzamiento de la propia campaña supuestamente probatorio del realineamiento entre la presidencia de la república y el aspirante oficialista, pusieron de manifiesto la tensión entre el programa del candidato del partido gubernamental y la gestión del gobierno saliente.

Aunque el punto que defendemos es que la elección presidencial mexicana de 2012 es un ejemplo de división solapada del oficialismo durante el proceso electoral, curiosamente, la etapa previa a los comicios tampoco estuvo exenta de que se manifestaran a su vez, acciones más bien propias de una fractura abierta. Son los casos de Manuel Espino y Vicente Fox, el primero presidente del PAN en los dos años iniciales y claves del sexenio calderonista (2007 y 2008) y el segundo, el primer presidente panista de la república (2000-2006). A pesar de constituir en su momento referentes del entramado partidista, ambos tomaron la decisión de respaldar públicamente la candidatura del candidato a la presidencia priista, Enrique Peña Nieto. La decisión de ambos puso en evidencia la magnitud de la crisis de identidad que afectaba al partido dejando la puerta abierta para un desalineamiento silencioso mucho mayor, como en definitiva ocurrió. Igualmente consideramos que los abandonos protagonizados por Espino y Fox, así como otros actos aislados durante la campaña que pudieron manifestar falta de unidad hacia el interior del panismo no nos llevan a considerar el caso de México como de división manifiesta debido a que generalmente pasaron inadvertidos salvo para ciertos analistas especializados y operadores políticos, pero fundamentalmente

porque los tres grandes actores que lideraban el propósito panista de conservar el poder, candidato presidencial, gobernante de turno y presidente del partido, como regla, trasladaron el mensaje a la opinión pública de que el partido en el gobierno no se encontraba afectado por un proceso con esas características.

La evidencia apunta a que Felipe Calderón tampoco ofreció un respaldo indiscutido a la campaña de la candidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, salvo que en abril de 2012, ingresaron al comando de campaña de la candidata buena parte del equipo que lo acompañó en la campaña de 2006, como Max Cortázar, ex vocero de la presidencia, Germán Martínez, ex presidente del PAN, Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa del presidente, Margarita Zavala, Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, y Miguel Székely, ex subsecretario de la SEP (Aristegui Noticias, 2012). Esas incorporaciones dejan en evidencia el interés de alcanzar un realineamiento entre la campaña de la candidata presidencial del PAN y el gobierno en funciones, aspecto que no había podido materializarse inmediatamente concluidas las elecciones internas, como sin dudas era lo idóneo.

Al presentar las nuevas incorporaciones, Josefina Vázquez Mota, admitió "que los conflictos internos de su partido consumieron energía política y generaron distracciones". A su vez la candidata manifestó que exigió a su partido dejar atrás los conflictos internos y de una vez por todas trabajar juntos por la victoria (Aristegui noticias, 2012). La declaración de Vázquez Mota no puede tomarse como un indicador de división manifiesta por las razones siguientes: 1) la integración, a inicios de la campaña electoral, de los colaboradores del presidente de turno al comando de campaña de Vázquez Mota, que se mantuvieron allí hasta que se produjo el desenlace electoral da por concluido, a efectos de la opinión pública, los posibles desencuentros anteriores; 2) no existió desaprobación pública del proceso de selección del candidato presidencial del partido de gobierno por

líderes o figuras públicas del propio partido gubernamental; 3) aunque Fox y Espino anunciaron su respaldo al candidato del principal partido opositor (PRI), ese tipo de comportamiento, al menos de forma abierta o pública, se limitó prácticamente a ambos.

En cuanto al respaldo mediático, Hernández (2012) no duda en señalar que una de las cosas que perjudicó de manera determinante la campaña de Josefina fue la falta de operación de Felipe Calderón con los medios masivos de comunicación. De acuerdo con la autora, el entonces mandatario no hizo nada para detener el crecimiento de apuesta mediática de Peña Nieto, centrada en sus nupcias con una reconocida actriz, al contrario, la intención de Calderón fue dejar morir a Josefina de inacción mediática.

Una actitud completamente distinta había asumido Calderón cuando su hermana, Luisa María Calderón, contendió en noviembre de 2011 por la gubernatura del estado de Michoacán. A propios y extraños quedó claro que contó con el respaldo del gobierno federal y del presidente. La misma situación se reprodujo en febrero de 2012, entonces Enrique Cordero contendió en las primarias presidenciales del panismo y el gobernante de turno tampoco dejó dudas sobre a cuál de los aspirantes a relevarlo respaldaba.

En realidad, Felipe Calderón, jamás se sintió cómodo con la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Primero, porque Josefina Vázquez Mota no era parte de su círculo más estrecho de colaboradores, del que emergió Ernesto Cordero, justamente, como delfín del presidente. Segundo, porque una vez declarada como su eventual sucesora, Vázquez Mota y su equipo de campaña, no defendieron ni tampoco se comprometieron de forma categórica con la continuidad de la política de guerra frontal contra el narcotráfico, el corazón de la herencia calderonista. Tercero, porque una vez que la candidata presidencial y su comando de campaña se mostraron más o menos dispuestos a una alineación con la herencia política del calderonismo

y unieron sus esfuerzos con los del gobierno para combatir un blanco único, la candidatura de Enrique Peña Nieto, el mandatario de turno se alarmó al comprobar que, en la medida que lanzaron mejores ataques contra los planteamientos de la candidatura priista, en lugar de que la principal beneficiada resulte la campaña de Vázquez Mota, lo que sucedió es que se incrementan las probabilidades de que el candidato del PRD-PT, Andrés Manuel López Obrador, recorte distancias y se convierta en un adversario capaz de vencer en la elección.

El ascenso de López Obrador a costa del descenso de Peña Nieto no es precisamente el escenario más propicio para el gobernante de turno, sino que, en cierta medida, es mucho más riesgoso y desalentador que el hecho que la candidatura panista quede relegada. Una eventual victoria de Peña Nieto deja sin garantías la continuidad de la guerra frontal contra el narcotráfico, pero un eventual éxito de López Obrador significa además dejar al descubierto los excesos gubernamentales acumulados en esa confrontación:

> en el momento climático del ataque a Peña Nieto, se detuvo súbitamente. El porcentaje de spots negativos que se le habían dedicado a Peña Nieto con lo de los compromisos incumplidos eran de 50% –contra momentos en la campaña de 2006 donde Calderón llegó a tener hasta el 100% de spots negativos contra López Obrador–, pero no continuaron. El sector empresarial se asustó y llegaron presiones para que dejaran de criticar a Peña Nieto y se enfocaran en López Obrador. Desde Los Pinos hubo órdenes implícitas para disminuir esa frecuencia de spots… La recuperación de Peña Nieto fue consecuencia del temor ante el ascenso López Obrador. "Teníamos a Peña, pero cuando venía en picada, le dimos oxígeno", indicó un colaborador de Vázquez Mota (Rivapalacio, 2012).

Si exponemos como cambió la estrategia de campaña panista contra Peña Nieto es debido a que al enfrentarse a la disyuntiva de que la candidatura de López Obrador crezca hasta el pun-

to de tener posibilidades de imponerse en la elección, Felipe Calderón optó por concluir cualquier respaldo sustantivo a la campaña de la candidata presidencial de su partido. Es otro momento de inflexión. Después de esa decisión la actitud que vino por parte del mandatario de turno fue mantener las apariencias de respaldo a la candidata presidencial de su partido y simultáneamente no hacer ni respaldar acciones que entorpeciera un eventual triunfo del candidato priista. Durante la contienda, el doble juego de Calderón, en general, no fue captado por el grueso de la opinión pública. Sin embargo, un asunto más difícil es evitar que la dinámica pase también desapercibida para aquellos que tienen una posición privilegiada o ejercen profesionalmente como observadores o analistas. Por ejemplo, Juan Miguel Alcántara, ex subprocurador general de la República, no dudó en señalar que Calderón es culpable de la derrota de Josefina Vázquez Mota porque le negó el respaldo que desde la presidencia de la República sí le transfirió a su hermana Luisa María Calderón. Para el ex subprocurador, Calderón abandonó a Josefina, quien sí habló de traición en privado, debido a que fue notable la falta de apoyo y ausencias de miembros del gabinete de Calderón en la campaña. Según, Alcántara, nunca se pidió a Calderón apoyo ilícito para Vázquez Mota, sino que así como a la candidata a gobernadora de Michoacán, Cocoa Calderón, desde Los Pinos se le gestionaron apoyos financieros muy relevantes, en el comando de campaña de Josefina se esperaba algo similar. Lo esperaba Vázquez Mota y lo esperaban todos (Delgado, 2012, en Proceso, 17 de noviembre).

El punto que señala Alcántara es esencial, el presidente de turno tiene la influencia para generar destacados apoyos financieros indirectos hacia la campaña presidencial del candidato de su partido cuando se propone hacerlo, pero Calderón se abstuvo de hacerlo con respecto a Josefina Vázquez Mota. La visión del periodista Álvaro Delgado (2016) en su libro *El Amasiato* es que, en efecto, la campaña de Vázquez Mota quedó prácticamente a la deriva y sin recursos, abandonada por

el entonces presidente Felipe Calderón que ya había pactado con Peña Nieto, en su obsesión por impedir el triunfo de López Obrador, pero además infiltrada por calderonistas que lejos de jugar a su favor velaban por garantizar su derrota y con ello cumplir así el pacto entre Los Pinos y el candidato presidencial priista (Delgado, 2016).

Si Alcántara destacó la falta de respaldo financiero por parte del presidente hacia la campaña de la candidata presidencial panista, Santiago Creel, quien declaró que Josefina Vázquez Mota fue abandonada, pone el énfasis en otra faceta, la falta de respaldo desde la propia organización partidista que evidenció que a Josefina la dejaron sola. Creel testimonió que durante la campaña iban a eventos, incluso a cierres en donde prácticamente estaban dos o tres panistas de presencia nacional y a veces ni dos o tres, a veces solamente uno o Josefina Vázquez Mota sola (Jiménez, 2012).

Por su parte, la postura de Vela (2013) se inclinó a destacar como causal de la falta de respaldo gubernamental el hecho de que el discurso político utilizado por la candidata presidencial panista no encajaba con el gobierno de Felipe Calderón. "La unidad que se logró en el PRI y paradójicamente en el PRD estuvo lejos de ocurrir en el PAN. El proceso de apoyo y reconciliación entre los aspirantes a la candidatura no ocurrió" (Vela, 2013: 55).

La pregunta que emerge es por qué la principal afectada, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, guardó silencio, no alzó la voz para hacer plenamente evidente ante la opinión pública el proceso de división interna que afectó al partido en el gobierno y la falta real de respaldo a la campaña por parte del mandatario de turno.

Habíamos alertado que se trata de una división solapada cuando los principales actores involucrados en la falta de cohesión de la organización, en función de sus intereses a corto y mediano plazo ocultan ante la opinión pública la naturaleza desunificadora de sus acciones. A cambio de que la candida-

tura de López Obrador no se convirtiera en un riesgo real de que el político tabasqueño alcanzara el poder y que los excesos gubernamentales cometidos en la guerra frontal contra el narcotráfico fueran investigados, Calderón optó por brindar un apoyo "light" a la candidata presidencial de su partido y cuando menos, adoptó una posición pasiva con respecto a un probable retorno del PRI a los Pinos. Al mismo tiempo, no puede dejar de llamar la atención que en los años subsiguientes al desenlace electoral, la organización "Juntos Podemos", liderada por la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota[2], recibió recursos federales de un gobierno de signo partidista diferente al suyo en una cuantía de 900 millones de pesos para financiar actividades en favor de los migrantes.

Conclusiones

Si bien cuando la división oficialista en el marco de un proceso electoral tiende a ser solapada, el proceso de identificación de las evidencias de ruptura y de calibración de su peso específico tiende a ser más complejo, con ayuda de los indicadores elaborados en la presente investigación resultó factible superar esa dificultad. Precisamente, el auxilio de esas herramientas nos permiten concluir que la elección presidencial mexicana de 2012 califica como un caso en el que la división soterrada dentro del partido de gobierno, constituye la causa fundamental que anula la asociación entre la aprobación presidencial y el resultado electoral del partido de gobierno en esa contienda.

La sorpresiva victoria de Josefina Vázquez Mota en la elección interna panista, obtenida a base de derrotar al candi-

[2] Finalmente en 2015, tres años y seis meses después de los comicios presidenciales de 2012, en entrevista con La Jornada, Vázquez Mota confirmó que su campaña sufrió el abandono del presidente Felipe Calderón (La Jornada, 7 de diciembre de 2015. Recuperado de http://www.jornada.com.mx/2015/12/07/politica/006e1pol

dato "oficial" Ernesto Cordero, la dureza de esa contienda, pero especialmente, la falta de compromiso explícito de su campaña con la herencia fundamental del gobernante en turno puesta de manifiesto en su consigna de "Josefina diferente", evidenciaron la tensión entre el programa del candidato del partido gubernamental y la gestión del gobierno saliente. Mientras la naturaleza raquítica del respaldo logístico que la candidata presidencial del panismo recibió del mandatario de turno, puesta de manifiesto por colaboradores, operadores, analistas y la propia candidata, también emergen cuando se compara con el apoyo que Calderón otorgó en coyunturas electorales anteriores a candidatos que abiertamente eran de su preferencia como Luisa María Calderón, en los comicios estatales en Michoacán y Ernesto Cordero, en las primarias presidenciales panistas o incluso en el respaldo irrestricto que él mismo recibió en la campaña presidencial de 2006 por el entonces gobernante en turno panista Vicente Fox.

En resumen, el eventual respaldo logístico y mediático del mandatario en turno, Felipe Calderón, a la campaña de la candidata presidencial de su partido, Josefina Vázquez Mota, se caracterizó por la intermitencia, la simulación y sobre todo, por la falta de compromiso. En un primer momento, Calderón tomó distancia de una candidata que no era su preferida para sucederlo y que no manifestó un compromiso explícito con su legado político. Considerando que el ingreso al comando de campaña de Vázquez Mota de colaboradores cercanos a Calderón marcó un eventual viraje en la relación, esa posibilidad fue rápidamente abortada cuando los esfuerzos realizados para hacer descender a Peña Nieto en las encuestas fueron capitalizados por el archirrival de Calderón en 2006 y candidato del PRD-PT, Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese instante, el presidente volvió a tomar una distancia prudencial de la campaña de su partido apostando por un triunfo seguro de la candidatura priista, ello entrañó llevar a efecto un doble juego, mientras mantuvo las apariencias de respaldar a Váz-

quez Mota partiendo de que sus colaboradores continuaban formando parte del equipo de dirección de la campaña, a su vez negoció con el PRI y Peña Nieto, detalles del inminente retorno de esa fuerza política al poder.

4. El enigma del éxito del partido en el gobierno cuando es baja la popularidad del mandatario de turno

Los resultados de contrastar la popularidad de los mandatarios de turno con el éxito o la derrota del partido en el gobierno reportados en el capítulo tercero, también arrojaron que el oficialismo alcanzó a retener el poder en los comicios presidenciales de Chile 1999-2000 y Uruguay 1999, pese a que fue decididamente baja la popularidad de los mandatarios de turno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (28%) y Julio María Sanguinetti, (26%) respectivamente.

Ambos casos revelan que la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial fue inhibida o anulada, pero en favor de los candidatos presidenciales del partido en el gobierno. El oficialismo logró conservar el poder pese a que el desempeño del mandatario en turno se encontraba insatisfactoriamente evaluado. ¿De qué factor depende la concreción de un escenario con esas características?

Nuestra hipótesis fue que la baja popularidad del gobernante de turno no impide al partido en el gobierno retener el poder, siempre que se cumpla la condición de que la oposición no constituya una opción de gobierno creíble.

En un sistema político de carácter democrático la oposición no es creíble cuando sus declaraciones políticas, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, no sirven para prever con exactitud su comportamiento posterior (Downs, 1973). Significa que en el imaginario político, la oposición enfrenta el

rechazo de la mayoría de los votantes a ser considerada fuerza gubernamental alternativa de carácter nacional. Cuando la oposición no es creíble, el candidato del partido o coalición de gobierno se sitúa en una situación de ventaja crucial desde antes de iniciarse la campaña, incluso a contrapelo de la baja aprobación del gobernante saliente.

¿Pero qué es lo que determina que la mayoría de los votantes tiendan a considerar a la oposición como no creíble? Los modos específicos en los que se manifiesta ese escenario, cuando menos, son de dos tipos. El primero, lo asociamos con el hecho de que los líderes opositores, si bien han declarado respetar la institucionalidad democrática, sin embargo, ocuparon puestos de responsabilidad durante el régimen no democrático anterior y se les asocia responsabilidad directa o indirecta con la prolongación de esa experiencia autoritaria relativamente reciente. Por experiencia autoritaria relativamente reciente, entendemos el escenario en que, después del retorno a la democracia en el país, todavía no han tenido acceso al control del poder ejecutivo nacional las fuerzas políticas que colaboraron con el régimen no democrático, formando incluso directamente parte de sus gobiernos.

Igualmente, la oposición también presenta un problema de falta de fiabilidad ante la mayoría de los potenciales electores, cuando no posee experiencia de gobierno a nivel nacional y, en el país, no existe una crisis económica, social e institucional, que justifique que los votantes tomen la decisión electoral desde el dominio de las pérdidas. De acuerdo con Kahneman y Tversky (1979), el dominio de las pérdidas es aquella situación de aguda crisis económica, social e institucional, que empuja a los votantes a vencer el temor de entregar a una fuerza política emergente el control del poder ejecutivo nacional. Por naturaleza, el votante promedio es contrario a tomar riesgos. El dominio de las pérdidas, funciona como catalizador que lo compulsa a abandonar ese comportamiento tendencial.

Por último, de acuerdo con nuestra clasificación, estamos ante un caso de popularidad presidencial baja cuando el nivel de la aprobación del mandatario de turno, que no compite por su reelección sucesiva, es inferior al 40% previo al inicio de la campaña.

El caso de Chile en 1999-2000. Contexto de la elección presidencial

Tras dos períodos consecutivos de mandatos, 1990-1993 y 1994-2000[1], la coalición gubernamental, Concertación de partidos por la democracia, se disponía a intentar ganar su tercera elección consecutiva.

La historia de la Concertación de partidos por la democracia hasta ese momento se puede resumir del siguiente modo: en 1988 se constituyó en bloque electoral que derrotó al gobierno militar de Augusto Pinochet en el plebiscito sobre el respaldo a la continuidad o no del régimen dictatorial, en 1989 pasó a ser una alianza electoral con vistas a enfrentar las primeras elecciones presidenciales que marcarían la transición a la democracia en Chile y a partir de 1990 se convirtió en coalición gubernamental bajo el mandato del presidente

Patricio Aylwin, proveniente del partido democratacristiano, condición que retuvo en 1994 a través del también democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

[1] El ordenamiento constitucional chileno ha consagrado períodos de cinco, seis, ocho y cuatro años. En 1989, en virtud de una disposición transitoria se estableció como excepción que el primer período presidencial sólo fuera de cuatro años, contrario a lo estipulado en la Constitución de 1980, que preveía un mandato de 8 años de duración. En diciembre de 1993, el gobierno y los partidos aprobaron el acuerdo de seis años de duración del mandato, que en 2005 volvió a ser objeto de reforma constitucional, para dejar la duración del mandato en cuatro años sin posibilidad de reelección para el período inmediato (García, 2002; Beca, 2008).

El primer presidente proveniente de la Concertación, Patricio Aylwin, había concluido su mandato con una aprobación superior al 50%, tasas elevadas de crecimiento económico y una disminución de los índices de pobreza, lo que contribuyó a un traspaso exitoso del poder dentro de la misma coalición gubernamental.

De modo que:

> la administración Frei inicia su sexenio, en marzo de 1994, bajo promisorios auspicios, tras un primer gobierno democrático que, más allá de los vaivenes y peripecias cívico-militares, concluía su mandato con innegables tasas de popularidad, lo cual le permitía emprender un ciclo regulado de reproducción política de la alianza en la forma de primarias cerradas, frente a una oposición carente de proyecto político y de liderazgo (Joignant, 2003: 85).

Sin embargo, en 1999, cuando estaba por concluir el mandato la situación era diferente. En efecto, la aprobación de la gestión del mandatario Frei fue descendiendo gradualmente a lo largo de su mandato, hasta que finalmente se vio arrastrada por la crisis financiera asiática que golpeó la economía chilena generando un decrecimiento del PIB. Si en los primeros cuatro años del sexenio el crecimiento del PIB había promediado 7,75%, en el importante año electoral de 1999 alcanzó a contraerse hasta el 1%. Como consecuencia, el desempleo había alcanzado niveles históricos, mientras se disparaba a su vez la percepción de inseguridad por parte la ciudadanía.

Navia (2000), tomando como referencia primordialmente las tasas de crecimiento del país entre 1994 y 1997, consideran que:

> el gobierno de Eduardo Frei será probablemente recordado por los exitosos primeros cuatro años, pero también por el desencanto y por la crisis económica de los últimos dos. He allí la originalidad, pero también la ambigüedad de la segunda administración concertacionista (2000: 2).

En efecto, hasta 1998 el consenso sobre el funcionamiento del modelo económico consolidado a fines del régimen militar se sostenía en tres pilares: altas tasas de crecimiento, inserción internacional y reducción de la pobreza. Pero, el panorama era diferente hacia el final del mandato de Frei Ruiz-Tagle:

> El desempleo alcanzaba el 11%, el crecimiento registraba cifras cercanas a cero, se producía un aumento de la conflictividad social, existía una fuerte sensación de inseguridad y aumentaba la evaluación negativa sobre la gestión del gobierno (Avendaño, 2009).

A partir de 1988 el comportamiento electoral del votante chileno lo había condicionado el eje dictadura-democracia, reflejado en la contraposición Concertación-Pinochet. Dentro de ese marco, se habían producido las contundentes victorias electorales de los mandatarios concertacionistas, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El primero se impuso en los comicios de 1989 por una diferencia mayor a los 25 puntos porcentuales, mientras Frei Ruiz-Tagle, emergió vencedor en las elecciones de 1993 con una diferencia aún mayor, 33.56 puntos porcentuales. Ambas victorias fueron obtenidas en primera vuelta. Las abismales diferencias existentes en cuanto a caudal de votos obtenidos por los candidatos presidenciales de la Concertación evidenciaron una composición de las preferencias con una inclinación manifiesta hacia la centroizquierda, la fuerza política que encarnó en Chile los ideales democráticos. Lo específico, por tanto, del año electoral de 1999 consistió en si en un contexto general desventajoso, signado por la contracción sustancial de las tasas de crecimiento económico y el fuerte rechazo a la gestión del mandatario de turno Frei Ruiz-Tagle, la Concertación de partidos por la democracia podría ser también capaz de obtener el respaldo mayoritario de los votantes chilenos como había sucedido tanto en los comicios de 1989 y 1993.

En ese escenario, los partidos de la coalición gubernamental efectuaron un proceso abierto de primarias en el que

emergió como candidato presidencial de la Concertación, el socialista Ricardo Lagos. Fue la primera vez desde la transición a la democracia que un miembro del partido socialista era a su vez el candidato presidencial del oficialismo. En 1989, el democratacristiano Aylwin había sido elegido como candidato presidencial debido a consideraciones tanto políticas como electorales (Navia y Joignant, 2000). En tanto, a Frei, lo favoreció también tanto su pertenencia a la democracia cristiana como su imagen hacia el final del mandato de Aylwin. El reto adicional que planteaba para la Concertación la elección de un militante de izquierda, Ricardo Lagos, como su candidato presidencial, es que abrió la posibilidad de que la coalición de derecha se volcara con mucho mayor vigor en la campaña electoral hacia la conquista del votante de centro. Este último podría llegar a sentirse temeroso de que la moderación que había caracterizado la gestión de la Concertación de partidos por la democracia, fuera desplazada por una eventual izquierdización o radicalización de la coalición gubernamental.

Cuadro 17
Fecha de los comicios presidenciales, mandatario en turno y candidato presidencial del oficialismo

Año de los comicios presidenciales	Mandatario de turno	Candidato presidencial del oficialismo
1999/2000	Eduardo Frei Ruiz Tagle	Ricardo Lagos

Fuente: Elaboración propia.

Pero no se trataba sólo del desencanto con la situación económica, de los problemas de gestión de la administración Frei y de los temores de que la moderación política pudiera estar en riesgo ante la designación de un socialista como candidato presidencial de la coalición gubernamental sino también que, un año antes de las elecciones presidenciales, en 1998, el general Augusto Pinochet había sido detenido en Londres. La detención del dictador contribuyó a que el candidato de la coa-

lición de derecha, formada por los partidos Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), el ex alcalde Joaquín Lavín, tomara distancia con respecto al régimen militar y "despinochetara" su campaña electoral (Huneeus, 2007).

En efecto, Joaquín Lavín, que como alcalde había logrado ser reelecto con un respaldo superior al 70% de los votos, el más alto conseguido entre sus homólogos, se desmarcó de la condición de que el candidato de la derecha era un representante más o menos directo del régimen militar, con una campaña signada por el reconocimiento de que Pinochet era algo del pasado. Lavín proclamó que lo decisivo era elegir un agente eficiente como gestor, capaz de solucionar los graves problemas acumulados durante los diez años de administración concertacionista.

En resumen, la campaña de Lavín tomó distancia del eje dictadura-democracia para intentar centrar la definición electoral en uno menos politizado. El centro de su atención fue estrictamente la calidad y solvencia de la gestión presidencial en la solución de los crecientes problemas que aquejaban al ciudadano chileno. Lavín, aprovechó la procedencia socialista del candidato de la Concertación así como la propia detención de Pinochet en Londres, para dirigir su campaña hacia el votante de centro, propenso a identificar, no sin sobresalto, una línea de continuidad entre el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y la candidatura presidencial socialista de Ricardo Lagos.

Aprobación presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Eduardo Frei inició su mandato con un amplio respaldo popular, pero su aprobación fue cayendo en la misma medida que corría el sexenio, a pesar de que durante los primeros cuatro años del mandato las tasas de crecimiento del PIB alcanzaron un promedio cercano al 8%.

En noviembre de 1995, un año después de iniciado su mandato la aprobación del presidente Frei era relativamente favorable, 47%, pero en noviembre de 1996 había caído al 40% y para enero de 1998 al 37%. En septiembre-octubre de 1999, meses antes del desenlace electoral, registraba un 28% de aprobación contra un 45% de rechazo, siendo esta última la mayor tasa de desaprobación registrada en democracia por un mandatario chileno.

Cuadro 18
Dinámica de la aprobación del presidente
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000)

Fecha y Año	Popularidad
Julio 1994	50%
Septiembre 1995	47%
Noviembre 1996	40%
Enero 1998	37%
Marzo 1999	32%
Octubre 1999	28%

Fuente: Elaboración propia con información de Encuestas CEP.

En condiciones normales de competencia electoral es de esperar que semejante desempeño del mandatario de turno se vea reflejada en una reducción del volumen de votos que alcanza la candidatura presidencial del partido o coalición de gobierno induciendo una derrota gubernamental en las urnas. La evaluación retrospectiva conduce a que segmentos crecientes y decisivos de votantes tiendan a concluir que respaldando a un candidato de continuidad, es decir, perteneciente al mismo partido o coalición del mandatario de turno, tanto la situación general del país como la personal difícilmente tenderá a mejorar durante un nuevo gobierno oficialista.

Buena parte de la dinámica de descenso de la aprobación presidencial de Frei se produjo a la par de una fuerte expansión económica. Mientras económicamente le fue mejor al país,

simultáneamente también caía el nivel de aprobación de Frei Ruiz-Tagle. Sin embargo, la irrupción de la crisis tuvo el efecto de acentuar la caída de su evaluación. Justo el peor momento del mandatario con respecto a su aprobación se produjo en los meses previos a la definición de los comicios presidenciales (Navia, 2009).

Por su parte, Sergio España (2002), indagó en las razones de la declinante popularidad del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a lo largo de su mandato, señalando tres posibles causas de esa dinámica. España considera que la administración de Frei Ruiz-Tagle ostentó importantes logros que no son reconocidos en la evaluación de algunos sectores, tendiendo a prevalecer sobre la gestión del mandatario una mirada excesivamente crítica. Sin embargo, encuentra en tres dimensiones las claves que incidieron en la forma en que fue estructurada la evaluación del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle: 1) la personalidad del propio Frei y la forma en que ésta se proyecta públicamente; 2) las tensiones internas de la Concertación carente de un proyecto que reemplazara al de carácter fundacional que le diera origen durante los años ochenta; 3) y la reticencia de Frei a asumir un proyecto modernizador que le aportara un signo diferenciador y sentido global a su administración (España, p. 40).

Un balance general del comportamiento de la popularidad del presidente Frei Ruiz-Tagle nos llevó a destacar, en primer lugar, que la situación económica favorable en los años iniciales de su sexenio (1994-2000) no resultó suficiente para que la relativamente alta popularidad que exhibió a inicios del mandato constitucional se incrementara o cuando menos se conservara. En su lugar, la dinámica de su aprobación se vio afectada por un proceso gradual de decrecimiento. Entre marzo de 1994 y enero de 1998, un período de prácticamente cuatro años, de forma gradual pero sostenida su popular descendió trece puntos. Otros factores ajenos a la economía, relacionados tanto con la proyección de su personalidad (falta de ca-

risma) como directamente políticos (incapacidad de promover una agenda de cambios acorde con la situación de constituir el segundo gobierno de la Concertación y de impedir que emergieran las diferencias de visiones entre los partidos miembros de la coalición gubernamental), al parecer tuvieron un mayor peso en la evaluación del desempeño presidencial. Eso sí, cuando a partir de 1998 las tasas favorables de crecimiento cedieron lugar a la contracción, el alineamiento que se produjo entre los factores económicos y políticos adversos tuvo el efecto de acelerar el ritmo de descenso de los niveles de aprobación de Frei Ruiz-Tagle. Así sólo en el período comprendido entre enero de 1998 y octubre de 1999 (18 meses), su aprobación se redujo en otros nueve puntos. De este modo, durante la administración de Frei Ruiz-Tagle la bonanza económica (1994-1997) no fomentó el incremento de la popularidad del mandatario, pero sin dudas debió contribuir a que su descenso, en el que incidían los factores extraeconómicos que ya señalamos, no fuera en esa etapa decididamente brusco sino como tendencia gradual. En cambio, cuando en los dos años finales del mandato (1998 y 1999) las tasas de crecimiento del PIB se desplomaron, el factor económico terminó por sumarse también al resto de los factores, políticos y personales, que venían lastrando la aprobación del gobernante de turno. Una especie de tormenta perfecta caracterizó entonces el contexto electoral en el cual la coalición gubernamental buscó ganar su tercera elección presidencial consecutiva.

La elección presidencial de 1999-2000

En la primera vuelta de la elección presidencial, que no se desarrolló de forma simultánea con los comicios legislativos, contendieron seis candidatos presidenciales: el socialista Ricardo Lagos, representando a la coalición gubernamental, Joaquín Lavín, en representación de la Alianza integrada por UDI y RN,

Arturo Frei Bolívar, en representación de los independientes con apoyo en Alianza Popular, Sara María Larraín Ruiz-Tagle, independiente con apoyo en los ecologistas, Gladys Marín, Partido Comunista y Tomás Hirsch, Partido Humanista.

El candidato presidencial de la Concertación de partidos por la democracia, Ricardo Lagos, había sido electo en primarias abiertas, trasparentes y limpias, lo que le daba una indiscutible legitimidad democrática a su candidatura y garantizaba la unidad del conglomerado. Sin embargo, en su contra jugaban también no pocos factores de enorme importancia. Primero, era el representante de la coalición gubernamental cuyo gobernante de turno registraba una aprobación del 28% y un rechazo del 45%. Segundo, el crecimiento económico se había contraído hasta alcanzar niveles de recesión durante el mandato oficialista cuya candidatura presidencial él representaba. Tercero, había transcurrido 10 años de gobiernos ininterrumpidos de la Concertación de partidos por la democracia por lo que la coalición gubernamental estaba afectada por el desgaste propio de quienes conducen las riendas del poder por varios mandatos. Cuarto, dada su militancia de izquierda, Lagos de acuerdo con la crónica de la elección presidencial de 1999 y 2000 de Zúñiga y Gutiérrez (2000) "fue visto como una amenaza por el empresariado por el ideario progresista que encarnaba, que aparecía como una remembranza de la traumática experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende cuando llegó al poder a fines de 1970" (2000, 294), pero al mismo tiempo su candidatura "hizo temer a la iglesia Católica, Apostólica y Romana el advenimiento al gobierno de un líder de pensamiento agnóstico y tolerante" (2000, 294). Quinto, luego de su holgado triunfo en primarias donde logró el 71% de los votos de casi un millón y medio de votantes, la campaña de Lagos se vio afectada por un exceso de confianza y comenzó tarde, cediendo la iniciativa a su principal adversario, un ex alcalde con notables resultados de gestión que enmarcó al socialista como el candidato de la continuidad del estado de cosas que la mayoría de la sociedad

desaprobaba. Sexto, el arresto del General Pinochet en Londres facilitó que el discurso del candidato presidencial de la derecha tomara distancia del régimen dictatorial que padeció el país entre 1973 y 1990.

A pesar de esos importantes inconvenientes, el candidato de la coalición gubernamental, Ricardo Lagos, se impuso en la primera vuelta electoral sumando el respaldo del 47.96 por ciento de los votos válidos. Sin embargo, la noticia destacada no fue el triunfo de Lagos, sino que el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, obtuviera una votación de 47.51 por ciento de los votos válidos, a sólo 0.45 por ciento del candidato de la coalición de gobierno, ciertamente, la mayor votación alcanzada por la derecha en su historia. Por primera vez, ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos y por tanto debió acudirse a la segunda vuelta para dirimir al vencedor. No hay que olvidar que, hasta ese momento, los presidentes anteriores de la Concertación no habían tenido que recurrir a una segunda vuelta y que además, el margen de sus triunfos electorales había sido aplastante.

Indudablemente, los resultados de Lavín y la necesidad de convocar una segunda vuelta electoral, por primera vez, en la historia de Chile, constituyeron hitos de esa elección. Pero en nuestra visión, dados los negativos que impactaban la campaña del candidato de la coalición oficialista, en primer lugar, la herencia del pobre desempeño del gobernante de turno, debió sorprender del mismo modo que el candidato oficialista Ricardo Lagos lograra imponerse en la primera vuelta.

Para que algo así sucediera debieron influir dos factores: primero, el eje democracia-dictadura cuyo origen databa de 1988, aunque erosionado, continuaba vigente y era capaz de contrarrestar el peso de importantes factores de mediano y corto plazo que afectaban directamente la candidatura del candidato de la coalición de gobierno, fundamentalmente, la baja aprobación presidencial y la brusca afectación de los principales indicadores macroeconómicos (crecimiento, inflación y desempleo).

Segundo, el grueso de los votantes percibió que la elección tenía enormes posibilidades de decidirse sin necesidad de acudir a una segunda instancia, por lo que el voto se concentró casi exclusivamente en las dos alternativas con posibilidades reales de imponerse.

A propósito, Lagos y Lavín, de conjunto sumaron el respaldo del 95.47% de los votos válidos emitidos en la primera vuelta, mientras que los cuatro restantes contendientes se repartieron el resto del siguiente modo, los independientes: Arturo Frei y Sara Larraín, 0.38% y 0.44%, respectivamente, la comunista Gladys Marín, 3.19% y el humanista Tomás Hirsh, 0.51%.

La segunda vuelta electoral, de acuerdo a lo establecido por la ley, se efectuó un mes después que tuvo lugar la primera. En esa etapa son importantes los endosos y llamados que realizan a sus votantes los candidatos perdedores de la primera etapa.

Los candidatos Larraín e Hirsh llamaron a sus votantes a respaldar al candidato de la coalición de gobierno, Ricardo Lagos. Mientras que Arturo Frei Bolívar pidió a sus votantes apoyar a Lavín. Por su parte, la comunista Gladys Marín pidió a sus votantes anular el voto, llamado que a juzgar por los análisis post electorales fue desatendido. Las bases comunistas no respaldaron la orientación dada por la cúpula partidista.

El resultado de la segunda vuelta, aunque nuevamente reñido, favoreció igualmente al candidato de la coalición de gobierno, Ricardo Lagos, que sumó el 51 por ciento de los votos, contra el 48 por ciento de su rival, Joaquín Lavín.

Con base en la evidencia analizada, lo que determinó en última instancia la victoria oficialista es que estaba en juego la posibilidad de retorno al poder de los representantes directos o indirectos del régimen autoritario. Ello implicaba, cuando menos, un eventual retroceso en el camino de la democratización que el país había seguido en los últimos diez años. El arresto del general Pinochet y la toma de distancia con respecto al régi-

men militar que encabezó, realizada por Joaquín Lavín y otros líderes de la derecha durante la campaña, sin embargo, debieron contribuir a que fuera más complicado percibir que el eje surgido en 1988 continuaba activo.

El eje democracia-dictadura, Concertación-Pinochet, que explica el comportamiento del votante chileno tanto en el plebiscito de 1988, como en las presidenciales de 1989 y 1993 conservó aún su vitalidad, ciertamente erosionado como evidencia lo reñido de la votación, pero vigente. El significado de ese eje es que, sólo uno de los dos contendientes principales en disputa, no ofrecía dudas sobre su compromiso con la continuidad de la consolidación democrática. La coalición de derecha al generar dudas sobre su compromiso con la democracia, no constituía una opción de gobierno creíble para la mayoría de los votantes, aun pese a los indudables problemas de desempeño que lastraron a la administración de Frei Ruiz- Tagle y al empeoramiento de la situación económica. A nuestro modo de ver, ese fue el hecho decisivo y determinante que hizo posible la victoria de la candidatura presidencial de Ricardo Lagos, en un contexto tan adverso.

En efecto, aunque Joaquín Lavín, miembro destacado de Unión Democrática Independiente (UDI) y ex secretario general del partido (Huneeaus, 2001), durante su campaña hiciera ver, por primera vez, que un eventual gobierno de derecha tomaría distancia con respecto a los personeros del régimen pinochetista, varios datos duros continuaban condicionando que el imaginario colectivo tendiera a viajar en una dirección diferente a la imagen que promocionaron el aspirante presidencial y otros líderes de la coalición de derecha.

Primero, Joaquín Lavín llegó a candidato presidencial por UDI, un partido de derecha creado durante la etapa dictatorial con financiamiento del régimen debido a que su fundador, Jorge Guzmán, apoyó a la dictadura, justificó la “mano dura” y las violaciones de los derechos humanos. La UDI “surgió durante el régimen autoritario del general Augusto Pinochet y cuyos diri-

gentes constituyeron la principal élite civil de apoyo a éste y su fundador, Jaime Guzmán, fue el actor civil más influyente en ese régimen político" (Huneeus, 2001).

La UDI desarrolló a partir de su surgimiento durante el gobierno de la Junta Militar "una estrategia de construcción de un movimiento político, aprovechando los recursos proporcionados por el autoritarismo. Ello les permitió establecer una organización a lo largo del país con adherentes y simpatizantes y una considerable presencia de los sectores populares. Fue posible que desarrollaran esta labor porque respaldaron sin vacilaciones al régimen autoritario y en especial al General Pinochet, y porque contaron con la simpatía de los militares y el empresariado. El "gremialismo" (UDI) constituyó, junto al equipo económico conocido como "los Chicago boys", el principal grupo de poder, teniendo una importante presencia en los numerosos gabinetes del régimen" (Huneuus, 2001, 8 y 9).

Llegado el momento en que el régimen militar debió convocar elecciones presidenciales que devendría en una eventual transición democrática, el líder y fundador de UDI, Jaime Guzmán, fue coautor intelectual de la tesis de la democracia protegida por la primacía de los militares y los enclaves autoritarios sembrados en la Constitución del país:

> …como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, (Jaime Guzmán) tuvo una enorme influencia en la definición de la arquitectura institucional de la democracia protegida y autoritaria establecida en la Carta Fundamental de 1980. Sus argumentos ayudaron a persuadir a los demás miembros de la Comisión para incorporar en el Anteproyecto sus principales recursos institucionales, como la tutela militar, el pluralismo limitado, las restricciones al rol de los partidos y el presidencialismo sobredimensionado (Huneeus, 2001: 20).

La imbricación entre UDI y el régimen militar fue de tal magnitud que ninguna otra organización civil tuvo el número de

representantes que tuvo UDI al frente de ministerios durante la Junta Militar. Un total de veintiséis miembros del UDI ocuparon altos cargos en los diferentes gabinetes de la Junta Militar que gobernó al país entre 1973 y 1989.

> La influencia del autoritarismo en el surgimiento y desarrollo de la UDI fue considerable. Sus principales dirigentes fueron altos funcionarios del régimen. Todos sus senadores elegidos en cada una de las tres elecciones parlamentarias –989, 1993 y 1997– ocuparon cargos en él, la mayoría de sus diputados elegidos en esas tres elecciones habían sido alcaldes designados por el régimen anterior y la casi totalidad de sus dirigentes superiores tuvieron cargos en el gobierno militar. Importantes ministros de Pinochet, como el del Interior, Sergio Fernández, el de Hacienda Hernán Buchi, y el de Vivienda y Urbanismo, Miguel Ángel Produje, están integrados a la UDI. En la experiencia comparada de las nuevas democracias no encontramos otro partido que tenga tan alto grado de continuidad con la elite autoritaria como la UDI (Huneeus: 2001, 9).

Asimismo, una vez que la transición democrática dio inicio con los primeros dos gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia liderados por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, las tensiones generadas por el eje dictadura-democracia no desaparecieron sino que se manifestaron de otras formas.

Especialmente, se experimentaron a través de provocaciones de los militares, como los movimientos inusitados de tropas, el freno a las iniciativas de investigación de las violaciones de los derechos humanos y la disposición a no entregar a los máximos responsables probados de las mismas. Pero, sobre todo, su presencia era muy fuerte en el terreno institucional, donde fue evidente la necesidad de que mediante reformas constitucionales se eliminaran enclaves autoritarios como los senadores designados y vitalicios y el Consejo de Seguridad Nacional, donde las decisiones estratégicas del país eran tuteladas por las Fuerzas Armadas y, además se avanzara en el

reclamo de exigir responsabilidades judiciales a los violadores de los derechos humanos durante la etapa dictatorial.

El progreso legislativo de esos temas tropezó siempre con el bloqueo férreo por los congresistas de UDI, que gracias al sistema electoral binominal heredado de la dictadura, disfrutaban de una sobrerrepresentación en el Congreso:

> Durante los 90, la UDI logró bloquear los diversos proyectos de reforma constitucional que fueron presentados desde el gobierno, amparándose en la capacidad de veto que éste partido adquiría como consecuencia del sistema binominal y de la presencia de senadores designados (Garretón, 2003: 192ss). La defensa de la institucionalidad autoritaria por parte de la UDI, radicaba en su sólida coherencia doctrinaria sustentada bajo el principio de la "democracia protegida". Pero también influían otros hechos relacionados con la organización y composición del partido, como el carácter cohesionado y centralizado de la organización (Berrios, 2007: 30) y la alta presencia entre sus parlamentarios de personas que desempeñaron cargos en el gobierno militar (Huneeuss, 2000: 616-617) (Avendaño, 2009: 7).

Que centráramos nuestra atención en la implicación de UDI con el régimen militar, se debe fundamentalmente a que de allí procedía el candidato presidencial, Joaquín Lavín, pero para nada significa que el otro partido integrante de la alianza de derecha, Restauración Nacional (RN), estuviera excluido de colaborar con el régimen autoritario:

> Hemos argumentado que la UDI estuvo estrechamente vinculada con el régimen autoritario, lo cual no quiere decir que RN no tuviera relación con éste. En efecto, los candidatos de los dos partidos en las elecciones parlamentarias de 1989 fueron seleccionados mayoritariamente entre personas que había colaborado con el régimen de Pinochet. De los 120 candidatos a diputados, 51 habían sido alcaldes (42,5%) 18 ocuparon algún puesto de Gobierno (15%) y 51 no ocuparon posición alguna en la estructura de poder del régimen militar (Huneuus, 37).

Por consiguiente, si bien después de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, podría concederse que perdió relativamente fuerza la amenaza de un posible retorno al régimen dictatorial con un eventual triunfo de la derecha, en cambio, continuaba plenamente vigente la amenaza del congelamiento del avance del proceso de democratización mediante el enquistamiento de los enclaves autoritarios y la protección a los responsables directos de la violación de los derechos humanos.

La cancelación de esos avances, a la postre significaba la continuidad del modelo de democracia protegida o tutelada y el aborto, a mediano plazo, de la consolidación democrática. Lo que estaba en juego con la elección era, por tanto, la continuidad de la construcción democrática o la amenaza de estancamiento en una forma diferente de régimen con respecto al que caracterizó a la Junta Militar, pero con fuertes componentes autoritarios.

Los representantes principales de la derecha negaron esa visión durante la campaña, en primer lugar, Andrés Allamand (Zúñiga y Gutiérrez, 2000), uno de los fundadores del partido RN, socio de UDI en la alianza electoral de derecha. Pero, el hecho de que la mayoría de los votantes decidió pasar por alto factores de mediano y corto plazo de indiscutida relevancia (pobre desempeño presidencial y situación económica crítica) y siguiendo un comportamiento que desafía la lógica de la decisión electoral respaldaron la continuidad del oficialismo, apunta a que la razón potencial tras esa conducta es que la oposición, dicho en lenguaje downsiano, no constituía una fuerza política fiable, en este caso, dada la indudable fortaleza de sus lazos con el régimen militar pinochetista.

Conclusiones

La Concertación de partidos por la democracia ganó con amplitud las primeras dos elecciones presidenciales que representa-

ron la transición a la democracia en Chile, 1989 y 1994, pero en 1999, cuando enfrentó el reto de ganar su tercera elección consecutiva, la coyuntura electoral era sumamente desfavorable.

La aprobación de la gestión del mandatario Frei Ruiz-Tagle, meses antes del inicio de la campaña, se ubicó en el 28%, mientras la tasa de rechazo era de 45%, complicando el traspaso de voto que generalmente tiene lugar hacia el candidato del partido de gobierno cuando el presidente de turno se encuentra bien evaluado.

De conjunto con la baja aprobación de Frei, conspiró contra las probabilidades de que el candidato del partido de gobierno, el socialista Ricardo Lagos, lograra conservar el poder en manos de la coalición gubernamental, la detención del general Augusto Pinochet en Londres (1998). El arresto facilitó que el discurso del candidato de la coalición de derecha, Joaquín Lavín, se desmarcara como representante de los intereses de los personeros del régimen militar.

Para que se produjera el triunfo de Lagos en primera vuelta debieron influir dos factores: primero, el eje democracia-dictadura cuyo origen databa de 1988, aunque erosionado, continuaba vigente y era capaz de compensar el peso de importantes factores de mediano y corto plazo que afectaron directamente la eventual continuidad de la coalición de gobierno; segundo, a partir del resultado de la primera vuelta se puede señalar que el grueso de los votantes percibió que la elección tenía enormes posibilidades de decidirse sin necesidad de acudir a una segunda instancia, por lo que el voto se concentró casi exclusivamente en las dos alternativas con posibilidades reales de imponerse.

El candidato de la Concertación también se impuso en segunda vuelta donde logró ampliar la diferencia a aproximadamente 2.5 puntos porcentuales. Sin embargo, Navia y Joignant (2000) reportaron que lo inédito del carácter reñido de la competencia fue asociado por algunos autores a la supeditación del comportamiento del votante chileno a un nuevo y emergente eje

(desempeño vs. incompetencia) que supuestamente sustituyó al transicional (democracia vs dictadura):

> Una vez decidida la victoria de Lagos, los analistas comenzaron a sugerir que el mapa político chileno había cambiado y que la división "Si-No" que caracterizó todas las elecciones desde 1988, donde era mayoría el "No" (Concertación), ya no existía. Varios modelos diferentes fueron ampliamente discutidos en la prensa. Todos sugerían alguna nueva forma de alineación política (...) la evidencia utilizada para anunciar el fin de dicho cleavage no es tan concluyente como muchos han planteado (Navia y Joignant, 2000: 121).

Sin embargo, aunque Navia y Joignant descartaron por prematura la hipótesis de que en la elección presidencial de 1999 desapareció el clivaje que venía determinando los resultados electorales desde 1988 hasta ese momento, llama la atención como en su análisis la influencia de la variable desempeño gubernamental, reflejada de forma más o menos aproximada en la medición de la popularidad del mandatario, pasó prácticamente a un plano secundario. Así, por ejemplo, ambos autores no la destacaron directamente como un factor que gravitó en lo reñido del resultado electoral:

> En el contexto de una década de gobierno concertacionista y una crisis económica, la elección estuvo marcada por el arresto del General Pinochet (cuya ausencia permitió que Lavín se desplazara al centro político), la celebración de primarias (que llenó de excesiva confianza a las huestes concertacionistas) y la izquierdización de la Concertación (al presentar a un socialista de candidato) (Navia y Joignant, 2000: 14).

Desde luego, los sucesos que relacionan ambos autores marcaron la elección. Pero, muy pocas cosas suelen impactar más la dinámica de la competencia en la campaña y las características del desenlace (reñido o abultado, ganador o perdedor) que el hecho de que el oficialismo llegue a los comicios, con el lastre

de un desempeño presidencial ampliamente reprobado por la mayoría de los ciudadanos.

Justamente, el hecho de que la Concertación lograra apenas un triunfo tan reñido, algo que no había sucedido en las presidenciales anteriores, encuentra su explicación principal en el pobre resultado que reflejaba la gestión gubernamental durante el sexenio 1994-2000. La Concertación lidió todo el tiempo con ese inconveniente y adicionalmente, con los tres factores señalados por Navia y Joignant: 1) movimiento hacia el centro de la oposición gracias a ausencia de Pinochet; 2) amenaza de abandono a su vez del centro político por el oficialismo por la victoria de un candidato socialista; 3) y embelesamiento inexplicable ante una primaria exitosa.

Navia y Joignant (2000) concluyen con que no se sostenía la tesis de un nuevo votante chileno a partir de los resultados electorales de diciembre de 1999 y enero de 2000, debido a que a fin de cuentas, la concertación de partidos había emergido victoriosa en la contienda como en todas las contiendas electorales anteriores. Así el eje que condicionaba el comportamiento electoral en Chile desde el plebiscito de 1988 no estaba obsoleto sino que conservaba su vigor.

Justamente, lo que en definitiva expresa la presencia de ese eje es que sólo uno de los dos polos de la relación, constituía para la mayoría de los votantes en los comicios presidenciales de 1999 y 2000 en Chile, una opción de gobierno creíble.

La conclusión de esos autores nos parece acertada. La detención del general Augusto Pinochet en Londres, en Octubre de 1998, significó que perdiera fuerza la amenaza de un posible retorno al régimen dictatorial con un eventual triunfo de la derecha (aspecto que fue sobredimensionado por sus propios ideólogos durante la campaña). En cambio, debido al involucramiento de UDI y RN con el régimen militar y a sus permanentes bloqueos en el Congreso a las reformas constitucionales destinadas a eliminar los enclaves autoritarios, el riesgo de congelamiento del avance del proceso de democratización, en

caso de una victoria electoral de la oposición, no podía constituir un asunto marginal carente de debido sustento.

Sólo puede explicarse el triunfo oficialista a partir de lo que estaba verdaderamente en juego con la decisión electoral: la continuidad de la construcción democrática o el desvío hacia una forma diferente de régimen con respecto al que caracterizó a la Junta Militar, pero también básicamente autoritario.

Resumiendo, cuando se reconoce que el eje dictadura-democracia continuaba vigente (Navia y Joignant, 2000), lo que subyace es que los ganadores de la elección presidencial de 1999 y 2000, la Concertación, lo fue fundamentalmente debido a que un eventual triunfo de sus adversarios de UDI y RN, continuaba constituyendo para sectores decisivos de votantes una amenaza para la continuidad del régimen democrático apenas en construcción. Dicho con otras palabras, la oposición no constituía entonces una alternativa de gobierno creíble.

El caso de Uruguay en 1999. Contexto de la elección presidencial

La elección presidencial de 1999, representó la cuarta elección desde el retorno a la democracia en 1984. Antes del golpe militar y desde principios del siglo XX, la característica fundamental del sistema político uruguayo fue su carácter bipartidista. Dos fuerzas, Partido Colorado y Partido Nacional (blancos), se habían alternado en el poder, sumando entre ambos en cada elección una cifra cercana al 90% de los votos. En el continuum ideológico ambos partidos se ubican a la derecha (Yaffe, 2004).

González (1999) y Queirolo (2006) destacan que los partidos políticos uruguayos suelen agruparse en dos familias ideológicas: partidos tradicionales y partidos desafiantes. “Los partidos “tradicionales” son el Partido Colorado y el Partido Nacional, ambos ubicados en el ala derecha del continuo ideológico; mientras que los “desafiantes” son el Frente Amplio y el

Partido Independiente, los dos ubicados en la actualidad en el centro izquierda. Hasta el 2004, ninguno de los partidos "desafiantes" había estado a cargo del gobierno nacional, por eso mismo eran llamados desafiantes" (Queirolo, 2006).

El principal "partido desafiante" el Frente Amplio, se formó en 1971, producto de la coalición entre varias organizaciones de izquierda y de centro como el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, respectivamente, y algunos sectores escindidos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Pero su aparición no cambió de inmediato la dinámica de acceso al poder, que continuo siendo repartido entre colorados y blancos.

Entre 1985 y 2000, los colorados se aseguraron dos mandatos presidenciales, el de 1985-1990 y el de 1995-2000, ambos encabezados por Julio María Sanguinetti. En cambio, los blancos dirigieron el país con la administración de Luis A. Lacalle entre 1990 y 1995. Sin embargo, paradójicamente, la nota más relevante de ese período (1984-1999) fue el continuo crecimiento de la intención de voto de izquierda (Frente Amplio) que gradualmente pasó de tener cerca del 20% a una cifra ligeramente superior al 40% de los votos:

> El casi constante crecimiento electoral de la izquierda ha sido la nota más saliente de la transformación del sistema de partidos. Elección tras elección, con la sola excepción de la de 1989, el Frente Amplio incrementó su caudal electoral y su contingente legislativo. En las elecciones presidenciales y legislativas de Octubre de 1999 esa tendencia alcanzó su máxima dentro del período cuando el EP-FA (Encuentro Progresista- Frente Amplio) se constituyó en el partido más votado y obtuvo la bancada parlamentaria mayor de la actual legislatura, aunque no obtuvo la presidencia de la república (Yaffe, 2004: 179).

Los años 80 en Uruguay, como en el resto de América Latina, también significaron el abandono del modelo de sustitución de

importaciones por el de apertura y privatización. La responsabilidad por la introducción de las políticas liberales recayó en los gobiernos comandados por Luis A. Lacalle (1990-1994) y la segunda administración de Julio María Sanguinetti (1994-1999). Los resultados de la aplicación de las medidas económicas neoliberales en ambos mandatos de Lacalle y Sanguinetti fueron controvertidos, por una parte, en los primeros años de aplicación se logró un crecimiento relevante del PIB, dinámica que perdió fuerza, justamente, en el año previo a las elecciones (1998) y en el año de realización de los comicios presidenciales (1999) cuando el país entró en recesión. Los efectos sociales del cambio hacia el nuevo modelo se reflejaron en un crecimiento de la pobreza, la marginación, la segregación y la segmentación social (Zubieta, 2010).

Por consiguiente, los comicios presidenciales de 1999, en los que el candidato presidencial del oficialismo fue Jorge Batlle, se celebraron en un contexto económico relativamente adverso para los propósitos del partido de gobierno de retener el poder y bajo una fuerte sensación de amenaza de quiebre del bipartidismo, ante un eventual triunfo electoral del Frente Amplio.

Cuadro 19
Fecha de los comicios presidenciales,
mandatario en turno y candidato presidencial del oficialismo

Año de los comicios presidenciales	Mandatario de turno	Candidato presidencial el oficialismo
1999	Julio M. Sanguinetti	Jorge Batlle

Fuente: Elaboración propia.

El desafío que significaba para la continuidad de la hegemonía de los partidos tradicionales el ascenso continuo de la intención de voto del izquierdista Frente Amplio, había quedado suficientemente explícito a partir del resultado de los comicios presidenciales de 1994 que de acuerdo con Lanzaro (1998) dejaron un saldo impactante. Por primera vez, los votos se divi-

dieron prácticamente en tres tercios, con los competidores mayores casi empatados. “El Partido Colorado gana con el 32,2% de los votos. Los blancos del Partido Nacional salen segundos con el 31.2%. El Frente Amplio –decano de la izquierda nacional que en esta ocasión armó con un agregado de la fórmula del Encuentro Progresista– llega al 30,6%. Y el Nuevo Espacio (desprendimiento del Frente Amplio, de orientación centrista) consigue un 5,2%” (Lanzaro, 1998: 1).

La lectura que se hizo por los partidos de derecha sobre los resultados de los comicios presidenciales de 1994 fue que, teniendo por base el sistema de decisión por mayoría relativa simple y contendiendo de forma separada como venían haciéndolo hasta la fecha blancos y colorados, era muy posible en el futuro inmediato no pudieran impedir un triunfo electoral de la izquierda.

Hasta 1994, la elección del presidente del país se decidía a través de un sistema de mayoría relativa simple, en la que la fórmula presidencial que sumara más votos era reconocida como la ganadora de la elección presidencial. “En Uruguay se utilizó hasta 1994 el sistema de mayoría relativa (MR) con DVS (doble voto simultáneo) para la elección presidencial y, a partir de 1999, el sistema de doble vuelta o balotaje unido a elecciones primarias” (Buquet y Piñeiro, 2014: 140).

En efecto, durante el segundo mandato de Sanguinetti (1995-2000), los partidos tradicionales impulsaron la reforma constitucional del sistema electoral introduciendo el mecanismo de la elección presidencial a dos vueltas, con la modalidad de que para ser declarado vencedor definitivo era indispensable hacerlo con la mayoría absoluta de los votos o de lo contrario es convocada una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. El nuevo mecanismo prevenía que, un eventual triunfo electoral de la izquierda en la primera fase no fuera definitivo y permitía a su vez, que colorados y blancos unieran fuerzas rumbo a la segunda y decisiva vuelta. “En términos tipológicos, esta fue una reforma de carácter defensivo, impulsada por

una coalición "declinante" (Buquet, 2007), que operó como una alianza de "dos contra uno", típica de los escenarios en tríada" (Lanzaro, 2013).

De esta forma blancos y colorados "sellaron", al menos de forma temporal, el acceso a la primera magistratura de la fuerza política emergente. De acuerdo con sus expectativas, el alto umbral exigido (mayoría absoluta) como condición para ser declarado vencedor, daría lugar forzosamente a una segunda vuelta electoral. Los partidos tradicionales haciendo un frente común, podían revertir un resultado eventualmente adverso en la primera fase, conservando las riendas del poder. Para Buquet y Piñeiro (2014) "el sistema de DV (doble vuelta) facilitó la coordinación entre blancos y colorados y alimentó la competencia entre bloques diferenciados ideológicamente" (Buquet y Piñeiro, 2014: 135).

Aprobación presidencial de Julio María Sanguinetti

Rumbo a los comicios de 1999, conspiraba contra las aspiraciones del partido de gobierno de conservar el poder, el hecho que durante el mandato la aprobación del gobernante de turno, Julio M. Sanguinetti, se mantuvo como tendencia baja. Así, por ejemplo, en el primer año de gestión (1995) su pico más alto de popularidad fue en el mes de julio con 31%, en el segundo (1996) fue en noviembre, 29%, en el tercero (1997) fue en febrero, 29%, en el cuarto (1998) fue en octubre, 35% y en el último año (1999) fue en enero con 37%. Mientras su tasa de desaprobación promedio anual fue casi siempre muy superior al 40%, con picos de 51% (septiembre de 1995), 50% (mayo de 1996), 48% (marzo de 1997) y 42% (junio de 1999). La característica de la dinámica de la popularidad presidencial de Sanguinetti a lo largo de su mandato, por tanto, fue exhibir niveles bajos de aprobación y altos de desaprobación.

Cuadro 20
Dinámica de la aprobación del presidente Julio M. Sanguinetti
(1995-2000)

Mes y año	Popularidad
Junio de 1995	27%
Junio de 1996	23%
Junio de 1997	20%
Junio de 1998	28%
Junio de 1999	26%

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuestas de Equipos Mori.

Debido a que a lo largo del mandato (1995-2000) los partidos colorado y blanco compartieron como nunca antes las responsabilidades ejecutivas y legislativas, formando directamente un gobierno de coalición integrado exclusivamente por ambas fuerzas, la baja evaluación del presidente reflejaba a su vez simultáneamente el nivel bajo de aprobación de la gestión gubernamental de los dos partidos tradicionales.

En efecto, la división del electorado uruguayo en prácticamente tres tercios y el ascenso mostrado en la intención de voto por parte del izquierdista Frente Amplio, llevó a que desde el inicio de su segundo mandato presidencial (1995-2000), Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) optara por conformar una coalición de gobierno con el Partido Blanco. "(...) blancos y colorados formaron una coalición con características inéditas que generó un gobierno que nunca careció de mayorías parlamentarias a lo largo de sus cinco años de duración" (Buquet, 2000).

Los frutos legislativos más destacados de la colaboración gubernamental entre los partidos tradicionales entre 1995 y 2000 fueron: El Ajuste fiscal a inicios del mandato que elevó los impuestos sobre los sueldos y el consumo a 6 y 23% respectivamente. La reforma de la Seguridad Social (1995), medida más importante del período (Moreira, 2004). La reforma constitucional de carácter electoral, que cambió la forma de elección

del presidente de la República (1996) y la reforma educativa (1995-1999).

El denominador común de la aprobación de las reformas fue una ágil negociación entre los aliados gubernamentales, la falta de respaldo de la bancada parlamentaria de la izquierda a las mismas y la manifestación de una importante postura crítica y movilizaría por parte de la opinión pública, como ocurrió, por ejemplo, con la reforma educativa (Lanzaro, 2004) y con la reforma de la seguridad social. Incluso el proceso derogatorio de la segunda, fue detenido por la Corte Electoral que invalidó el 3% de las firmas necesarias para plebiscitar la ley (Quirici, 2010).

Lanzaro (2004) y Quirici (2010), dan cuenta a su vez que aunque en su contenido la reforma de la seguridad social y la reforma educativa no llevaban el sello de neoliberales (aunque si fueron tildadas como tales), pues apostaron por fortalecer la centralidad del estado en ambas áreas, sin embargo, todo el proceso legislativo de aprobación fue excluyente y careció de legitimidad social. En su elaboración, colorados y blancos excluyeron a movimientos y sectores sociales interesados en participar y para su aprobación hicieron uso de un proceder mayoritarista. Incluso, la posibilidad de la aprobación de la reforma constitucional electoral de 1996, estuvo en duda hasta el momento final pues se sancionó apenas con un 0.45% de votos superior a lo estipulado por la Ley Fundamental, producto de los votos de las dos bancadas oficialistas (Moreira, 2007).

Por último, el mandato comenzó y finalizó con tasas recesivas de crecimiento del PIB. En 1995, primer año del mandato, de acuerdo con datos del Banco Mundial la economía se contrajo hasta -2,15, mientras en el año electoral de 1999, fue de -2,44. En cambio, en los años intermedios, 1996, 1997 y 1998, la tasa de crecimiento fue favorable, 4,82; 7,78 y 3,84, respectivamente, lo que evidencia que en el mandato de Sanguinetti (1995-2000) el comportamiento de la economía no logró ser estabilizado.

En resumen, el proceder legislativo excluyente de los partidos blanco y colorado, la falta de legitimidad de las reformas que generaron movimientos sociales a favor de su derogación y la inestabilidad en el comportamiento de la economía, dejaron su impronta en la baja popularidad del mandatario de turno.

La elección presidencial de 1999

En la primera fase de los comicios se presentaron cinco fórmulas en representación de cada una de las fuerzas políticas en disputa. Jorge Batlle por el oficialista Partido Colorado, el ex presidente Luis Alberto Lacalle por el Partido Nacional, Tabaré Vázquez por El Frente Amplio-Encuentro Progresista, Rafael Michelini por Nuevo Espacio y Luis Pieri, por la Unión Cívica.

El ganador de la primera vuelta fue el representante del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez que obtuvo 40.1% de los votos, superando por 7.3 puntos al candidato del Partido Colorado, Jorge Batlle (32.8%). Por su parte, el Partido Blanco quedó relegado al tercer lugar con el 22.3% de los votos, mientras Nuevo Espacio y Unión Cívica, obtuvieron el 4.6% y el 0.2% de los votos, respectivamente.

Sin embargo, en la segunda fase se produjo una reversión del resultado inicial, consistente en que el candidato triunfador en primera vuelta, que hubiera triunfado en un sistema de mayoría simple, sin embargo emerge derrotado en la segunda vuelta (Pérez, 2002). En efecto, el oficialista Jorge Batlle se impuso con el 54.13% de los votos, contra los 45.87% obtenidos por el representante del Frente Amplio, Tabaré Vázquez.

La pregunta que sigue es cómo fue posible que se revirtiera el resultado de la primera vuelta electoral de los comicios de 1999, a favor del candidato oficialista, Jorge Batlle, cuando la aprobación del mandatario de turno, Julio María Sanguinetti, era decididamente baja y en esas circunstancias es de esperar

también que el caudal de votos que consigue el oficialismo tienda a ser insuficiente para el propósito de conservar el poder.

La respuesta es que en 1999, el Frente Amplio no constituía una oposición creíble, debido a que la izquierda no había gobernado ni cogobernado a nivel nacional. En Uruguay, salvo en las dos etapas de interrupción democrática que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX (1933-1942 y 1973-1985), las riendas del país la habían llevado siempre los partidos colorado y blanco (Chasquetti y Buquet, 2004). De acuerdo con la perspectiva de Magaloni (1999), aquellos partidos que nunca estuvieron a cargo del gobierno nacional tendrían menos probabilidades de ganar la elección presidencial porque los votantes son aversos al riesgo y evitan votar por alternativas inciertas. En el caso de Uruguay (1999), la mayoría de los votantes, a pesar de que ya se sentían en el país los primeros síntomas de recesión y de las secuelas sociales de las reformas económicas, prefirieron continuar respaldando a las mismas élites políticas que habían llevado las riendas del país desde principios del siglo XX, en lugar de tomar el riesgo de apostar por las promesas de las nuevas élites.

Para Moreira (2000) la razón por la que el electorado uruguayo se manifestó a favor del continuismo de la política vigente, no es otra que:

> la izquierda no tenía una gestión de gobierno que ofrecer en garantía (la experiencia municipal no es un argumento muy convincente en un país de tradición centralista como el nuestro). Tenía su programa que fue auscultado de atrás para adelante, de anverso y reverso, durante toda la campaña electoral (...) El Partido Colorado no precisaba mostrar su programa. Sólo precisaba mostrar su larguísima gestión a cargo del gobierno uruguayo para conquistar sus votos (Moreira, 2000: 17).

De acuerdo también con Moreira (2000) el eventual arribo de la izquierda al poder en 1999:

> supone una suerte de "salto al vacío" para miles de ciudadanos poco informados, poco activos, envejecidos que la perciben como una amenaza para un *status quo*, que aunque no los recompense, parece preferible a encarar un riesgo de esa naturaleza y, al mismo tiempo, para los ciudadanos "ilustrados y activos", que sí han sido recompensados por el *status quo*, "la amenaza de la izquierda no es apenas simbólica o ideológica sino real (Moreira, 2000: 22).

En ese sentido, Moreira coincide con Magaloni (1999) sobre la desventaja que puede significar el hecho de que un partido político no haya estado nunca en el gobierno, debido que los votantes manifiestan mayor incertidumbre con los partidos que no tienen experiencia gubernamental, ya que tienen menos información para evaluar cómo gobernarán esos partidos, que para pronosticar la actuación de los partidos que ya gobernaron.

Sin embargo, la tesis de Magaloni (1999), cuyo fundamento último conecta con la teoría de Downs (1973) acerca del partido u oposición no fiable, no hay que interpretarla en términos absolutos. Una fuerza política que jamás haya gobernado o cogobernado a nivel nacional, no está impedida de modo permanente de llegar al poder. La experiencia comparada muestra lo contrario. De hecho, cinco años más tarde, el propio Frente Amplio se impuso en los comicios presidenciales de 2004 convirtiéndose en fuerza política gobernante en Uruguay. En realidad, la falta de experiencia gubernamental a nivel nacional se convierte en un impedimento para el arribo al poder de nuevas élites, cuando la situación del país lleva a la mayoría de los votantes a razonar o decidir desde el dominio de las ganancias, de acuerdo con la teoría de las perspectivas (Kahneman y Tversky, 1979). En cambio, deja de serlo cuando como consecuencia del agravamiento (notorio en términos comparativos) de la situación económica, social e institucional del país, los votantes toman su decisión electoral desde el dominio de las pérdidas. La segunda circunstancia resulta clave para el cambio actitudinal, consistente en que el votante se muestra más dispuesto

a realizar el viraje y tomar el riesgo que pudo haber rechazado con anterioridad. Pero esa circunstancia no había madurado aún para 1999 en Uruguay.

De conjunto con la teoría de las expectativas, otro aspecto contribuye también a esclarecer por qué razón el Frente Amplio en 1999 no constituía una alternativa de gobierno creíble a nivel nacional. El origen y buena parte de la evolución histórica de la organización, desde su fundación en 1971, estuvo signada por su postura ideológica antisistémica. Durante muchos años el Frente Amplio no manifestó un compromiso con la democracia liberal sino por su transformación en otro tipo de régimen de carácter socialista (Garcé y Yaffé, 2006). Fue justo hacia los años 90, que en su seno tuvo lugar un proceso gradual de tránsito hacia posturas políticamente moderadas. Pero, evidentemente, el costo político de las posiciones radicales defendidas con anterioridad, tiende a extenderse un tiempo mucho mayor que el requerido por la mutación de carácter interno. Aun después de que la organización dio por concluida la transición programática, buena parte de los votantes racionales continúan encontrando dificultad para confiar en la seriedad de la renovación de las proyecciones anunciadas. Esa percepción de desconfianza es reflejada fielmente en la expresión empleada por Moreira (2000) acerca de que, para el grueso de los votantes uruguayos, respaldar al Frente Amplio en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 1999, representaba una especie de "salto al vacío".

Buquet (2000) y Lanzaro (2007), destacan también la contribución de la introducción de un nuevo mecanismo electoral como causal que impidió el triunfo del Frente Amplio. De hecho, para ambos autores, la reforma fue la clave del triunfo del candidato presidencial del partido colorado. "La reforma dio un respiro a los partidos tradicionales, que todavía lograron ganar en 1999, gracias al ballotage" (Lanzaro, 2007).

Nuestra postura es que de aceptar que el cambio en el sistema electoral fue el factor decisivo que impidió que el Fren-

te Amplio se impusiera en 1999, corremos el riesgo de pasar por alto un aspecto crucial. El cambio hacia la doble vuelta, en la práctica significaba sólo garantizar que el ganador de los comicios presidenciales tuviera el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. El Frente Amplio en 1999, a pesar de la baja aprobación del gobierno de coalición entre colorados y blancos (1994-1999), de haber crecido en intención de voto de manera ininterrumpida desde el retorno a la democracia en 1984 y de beneficiarse además de la recesión económica que afectó al país en los años preelectoral (1998) y el propiamente electoral (1999), sencillamente no cumplía con esa condición. Todavía era incapaz de obtener el respaldo de la mayoría de los votantes, resultado que, en cambio, los partidos tradicionales demostraron que no les estaba vedado. Precisamente, si en los comicios de 1999, la izquierda fue incapaz de lograr el respaldo de la mayoría de los votantes en medio de un contexto electoral que le era particularmente favorable, fue debido a que el Frente Amplio constituía entonces una opción de gobierno creíble sólo para una parte importante, pero en definitiva minoritaria del electorado. En otras palabras, el "consenso negativo" (Pachano, 1997) que colorados y blancos lograron generar contra la fuerza que emergió ganadora en primera vuelta, fue debido a que para la mayoría de los votantes uruguayos en ese momento, el principal partido de oposición, el izquierdista Frente Amplio constituía, más que una opción creíble de gobierno, una amenaza o mal mayor. Dicho en términos downsianos, las declaraciones de política del Frente Amplio, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, no servían para prever con exactitud su comportamiento futuro, por lo que se mostró incapaz de ganarse la confianza y, por tanto, los votos de la mayoría de los ciudadanos racionales.

Por otra parte, Buquet y Lanzaro no toman en cuenta que la experiencia comparada demuestra que, cambios en el mecanismo de elección del presidente, no necesariamente implican la retención por parte del oficialismo del poder. Los comicios

presidenciales de Brasil 1989 y de República Dominicana 1994, también precedidos por la introducción de la doble vuelta electoral niegan la legitimidad de esa interpretación.

Conclusiones

En las comicios presidenciales de 1999 en Uruguay, la asociación entre la popularidad del gobernante de turno y el resultado electoral del partido o coalición de gobierno fue contrarrestada por el hecho de que, pese a que el Frente Amplio exhibía un crecimiento ininterrumpido de su intención de voto desde su creación en 1971, no constituía todavía en esa coyuntura una opción de gobierno creíble para la mayoría de los votantes uruguayos. Las preferencias de los votantes se inclinaban a favorecer a una fuerza política con un aval extenso de experiencia de gobierno a nivel nacional, que descansaba en el hecho de haber dirigido las riendas del país durante toda la larga etapa de vida democrática de la nación de América Latina que más tiempo ha vivido bajo regímenes democráticos (Chasquetti y Buquet, 2004).

Por su parte, Moreira (2000) destacó que la falta de experiencia gubernamental a nivel del país del Frente Amplio también se asocia con el espacio donde se ubica esa fuerza política, a la izquierda del espectro ideológico desde donde emitía señales de desconfianza para un votante tradicionalmente inclinado a respaldar la moderación política. De acuerdo con Garcé y Yaffé (2006), entre 1971 y 1984, la ideología de la mayoría de los partidos que integraban el Frente Amplio subestimaba el papel de la democracia liberal y aspiraba a instaurar lo más pronto posible el socialismo. Mientras, entre 1985 y 1994, el Frente vivió una etapa de transición ideológica impulsada por factores domésticos y endógenos. “A partir de esa fecha, y durante la década siguiente, la izquierda uruguaya siguió mutando, abandonando la mayor parte de sus propuestas programáticas de

comienzos de 1970 y convirtiéndose en un partido *catch-all* y socialdemócrata" (Garcé y Yaffé).

Tomando al pie de la letra esas observaciones, significa que el Frente Amplio vivió un proceso gradual de mutación interna desde posturas radicales o anti sistémicas hasta el compromiso con los valores y reglas de la democracia liberal. Pero, desde luego, los ritmos internos de la metamorfosis no coincidieron con los tiempos que necesitó el conjunto de la sociedad para cambiar a su vez la percepción que ya tenía sobre el tipo de oferta política proveniente del Frente Amplio. Particularmente, si como afirman los autores citados, la mutación de la izquierda se extendió por una década más después de 1994. Significa que en 1999, año en que tuvieron lugar los comicios presidenciales donde la izquierda ganó la primera vuelta electoral, la mutación aún no concluía. Qué decir entonces sobre la percepción social y más o menos generalizada de ese proceso. En resumen, la izquierda no constituía una opción fiable de gobierno democrático a nivel nacional en 1999. Como lo demostró la reversión del resultado de la primera vuelta, su eventual ascenso al poder entrañaba para la mayoría de los votantes una amenaza, un alto riesgo. No será hasta los comicios presidenciales de 2004, luego de la profunda e inédita crisis vivida por el país en 2002, que de forma decisiva la izquierda se acercara a los uruguayos y los uruguayos a su vez a la izquierda, llegando entonces a "competir exitosamente por los votantes de centro, que constituyen el sector más grande y de hecho el núcleo decisivo del electorado uruguayo" (Lanzaro, 2015: 21).

5. El enigma de la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial

Las comprobaciones empíricas realizadas obligan a una revisión de las teorías de los determinantes del desenlace electoral. A la luz de los hallazgos es imprescindible abordar asuntos cuyas implicaciones despiertan un enorme interés. Por ejemplo, ¿cuál de las explicaciones sobre los determinantes de la decisión electoral, contribuye a develar por qué razón la popularidad presidencial tiene la capacidad de anticipar el éxito o la derrota del partido en el bogierno? A partir de los hallazgos, ¿es posible que reevaluemos, reformulemos o cuando menos precisemos el potencial explicativo de esas teorías?

La escuela de Columbia

La teoría pionera en la explicación de las determinantes individuales del voto, surge en 1944, con la obra The People's Choice. Los autores del estudio, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet fundamentaron que en las campañas electorales tiene lugar un espacio de formación de las preferencias políticas asociando la decisión del voto, principalmente, con base al entorno social del individuo, particularmente por medio de los contactos personales entre los electores y los líderes (informales) de opinión de los grupos a los que pertenecen.

Lo que los autores descubrieron fue que en la intención de voto de los ciudadanos influían más los lazos personales, la comunicación interpersonal, cara a cara, que los medios de comunicación. El público no constituía una masa indiferenciada o pasiva que respondía igual ante unos estímulos sino que la principal influencia en la decisión de voto provenía de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo y los miembros de organizaciones por quienes estamos rodeados. En suma, las influencias a las que los votantes son más susceptibles son las opiniones de la gente en la que éstos confían y que suelen divulgarse unos a otros, constituyendo, por tanto, una destacada contribución del enfoque incorporar a la agenda de investigación el concepto de procesos de intermediación, relativo a la pregunta de cómo y de dónde reciben los votantes la información política.

No tenemos ninguna objeción contra la conclusión de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944) de que la decisión del voto se encuentra asociada, principalmente, al entorno social del individuo, particularmente, por medio de los contactos personales entre los electores y los líderes (informales) de opinión de los grupos a los que pertenecen. Sin embargo, sería erróneo interpretar la contribución de los autores como un reconocimiento explícito a que las preferencias se forman sólo o de manera fundamental en las campañas. La interacción de los individuos con su entorno, donde dan forma a sus decisiones, abarca una dimensión mucho más amplia que la acotada a las campañas electorales. Ello se manifiesta en el hecho de que desde antes que irrumpan las campañas existe una determinada orientación de las preferencias, cuyo curso, a juzgar por las comprobaciones realizadas en esta investigación, en numerosas ocasiones no se altera.

Los resultados de la investigación permiten inferir que, en lo que respecta a los comicios presidenciales en América Latina, en la mayoría de los casos, la orientación decisiva de las preferencias tiene lugar antes de las campañas. Salvo en

las elecciones de reelección sucesiva, que sumaron un total de cinco casos, la medición de la popularidad presidencial con la que en esta investigación contrastamos el vínculo con el éxito o la derrota electoral del partido o coalición de gobierno, data de una fecha anterior al inicio de las campañas presidenciales. Como regla, la lectura de la medición fue tomada meses antes del comienzo de las campañas, siguiendo el procedimiento de Lewis-Beck y Rice (1982). La medición anticipó de forma robusta el resultado electoral del oficialismo en términos de victoria o derrota del mismo. A una alta popularidad del titular del ejecutivo correspondió, en la mayoría abrumadora de los casos, la retención del poder por parte del oficialismo, mientras una baja aprobación del gobernante de turno fue seguida por la derrota gubernamental en los comicios. A lo que apunta ese comportamiento, por tanto, es a que durante las campañas presidenciales en América Latina, si bien se produce un proceso de formación de preferencias, el mismo generalmente no es lo suficientemente importante como para cambiar la tendencia del resultado electoral anunciada, desde antes de iniciarse las mismas, por el nivel de la aprobación presidencial. Coincidentemente, a esa misma conclusión llegó Finckel (1993) para el caso de los comicios presidenciales en Estados Unidos, cuando mostró que la gran mayoría de los votos individuales puede explicarse a partir de actitudes como la identificación partidaria y la aprobación presidencial, que se miden antes de las convenciones políticas y que los efectos de las campañas, que se suponen poderosos, tienen un impacto limitado en los individuos y consecuencias insignificantes para el resultado electoral.

La escuela de Michigan

La escuela de Michigan es una perspectiva social psicológica desarrollada en la obra “El votante americano” (Campbell, Converse, Miller y Sokes, 1980). Se trata de una concepción centra-

da en las actitudes a largo plazo principalmente representadas por la identificación partidista. Esta última es una orientación afectiva que, por lo general, se desarrolla durante el proceso de socialización política del individuo y por el cual se trasmiten los valores de los padres, los familiares o de la comunidad cercana.

En síntesis, para la escuela de Michigan, la mayor parte del electorado experimenta una identificación con un partido y, por consiguiente, vota a aquel partido con el cual se siente identificado. La pregunta es si la identificación de los individuos con un determinado partido es capaz de resultar afectada por las percepciones sobre el desempeño presidencial. ¿El partidismo es propenso a decrecer como consecuencia de la influencia de evaluaciones de corto plazo como la aprobación que logren los mandatarios?

La verdad es que de nuestras comprobaciones no es posible inferir una respuesta definitiva a esa pregunta. Sin embargo, en la literatura si se reconoce que la identidad partidaria no tiene la estabilidad que originalmente se pensó y la causa tiene que ver con la influencia de factores de corto plazo, entre los que destacan, tanto la experiencia electoral del individuo como las evaluaciones de desempeño del gobierno y su partido:

> Por varios años se pensó que la identificación partidaria de los individuos podía incrementarse con el paso del tiempo. Debido a su presunta estabilidad, la identificación partidista raramente se vería modificada por la influencia de factores de corto plazo, como la información de campañas políticas. No obstante, posteriormente se demostró, que tanto la experiencia electoral del individuo como las evaluaciones de desempeño del gobierno y su partido, son útiles no sólo para aumentar sino también para disminuir la intensidad de la identificación partidista (Downs, 1957, Fiorina, 1981) (Estrada, 2006: 150).

En efecto, como destaca el autor, en la magnitud de la intensidad de la identificación partidista juega un papel también las evaluaciones del desempeño del gobierno y su partido que el

votante realiza. Inferimos que una alta aprobación presidencial incrementa la identificación con el partido propio, siempre que el mismo constituya el partido del mandatario de turno, pero estimula a su vez el decrecimiento, al menos temporal, de la identificación y el respaldo en otras marcas. Mientras una baja aprobación presidencial puede tender a disminuir entre determinados segmentos la conexión con su propia organización, salvo en aquel núcleo que históricamente ha sido identificado con el término de "duro". La aprobación presidencial, por tanto, sería un factor con capacidad de explicar altibajos significativos en la propia identificación partidaria.

La escuela comunicacional

Las teorías comunicacionales del voto centran su fundamentación en la influencia de los medios de comunicación en la toma de la decisión electoral de manera indirecta o en el largo plazo o de manera directa o en el corto plazo, es decir, durante la campaña electoral. Aunque en una etapa existía la controversia acerca de en cuál de los dos ámbitos, el corto o el largo plazo, se definía la influencia de los medios de comunicación, autores más contemporáneos como Manuel Castells reconocen la síntesis de ambas perspectivas. Así para Castells, "las elecciones son momentos concretos de la vida política que funcionan sobre la base de una construcción diaria de significado que estructura los intereses y valores de los ciudadanos" (Castells, 2012: 304).

De acuerdo con el académico español la mayoría de las estrategias de campaña tienen tres vertientes: 1) asegurarse su apoyo histórico; 2) desmovilizar o confundir al núcleo de votantes del rival; 3) conseguir el voto de los independientes e indecisos. Éste último "es el grupo que determina los resultados de las elecciones siempre que se movilice al núcleo central de votantes" (Castells: 305). La forma en que se consigue su apoyo:

> es lograr que examinen a los candidatos con más atención. Los independientes, por ejemplo, se han mostrado siempre especialmente sensibles a los mensajes negativos. Puesto que no tienen lealtades preestablecidas, suelen movilizarse contra las consecuencias potenciales negativas de elegir un determinado candidato (Castells: 306).

Siguiendo al autor de "Comunicación y poder" la estrategia de los candidatos y partidos demanda una infraestructura de campaña conformada por tres elementos:1) solvencia financiera; 2) calidad de los asesores y exactitud de su política informacional; 3) campaña de las bases, formadas por una mezcla de voluntarios y asalariados cuya función varía en cada país. Simultáneamente, el uso de internet gana en importancia para gestionar la campaña y relacionarse con los simpatizantes.

Con respecto a los debates políticos televisados, el autor considera que son menos influyentes de lo que se cree, pues normalmente confirman las predisposiciones y opiniones de la gente, sin embargo, su efecto potencial reside en que se pueden cometer errores perdiendo apoyos, a menos que el candidato pueda utilizar el error en beneficio propio.

Ese punto nos aproxima a otra conceptualización importante de la teoría comunicacional, la imagen del candidato, cuya proyección positiva o negativa en la mente de los votantes, de acuerdo con Castells, es el factor clave que decide el resultado de la campaña. Las cualidades más importantes de un candidato son la honradez, la inteligencia y la independencia, pero debe trasmitir también potencial de liderazgo. "Los votantes buscan a alguien como ellos, pero con una capacidad superior para dirigirlos" (Castells: 314).

Debido al peso que las cualidades del candidato tienen en el resultado final, "la difamación es el arma más potente de la política mediática" (Castells: 317). La tendencia generalizada en las campañas es emplear información destructiva lo que obliga a todos los contrincantes a acopiar municiones para

contraatacar llegada la necesidad lo que a menudo constituye una estrategia disuasiva del adversario. Las campañas negativas cobran un saldo también para el que las ejecuta. En ese sentido, la campaña abona a la política del escándalo que antes y ahora constituye una característica fundamental a la hora de definir las relaciones de poder y el cambio institucional.

En su visión, internet contribuye de forma importante al incremento de la política del escándalo al abrir la comunicación de masas a acusaciones y denuncias de múltiples fuentes, esquivando la capacidad de filtro de los grandes medios y debido a sus posibilidades de difusión contagiosa o viral. El escándalo juega un papel mayor como resultado de la debilidad de la identificación con los partidos, el declive de la militancia y el auge de la cultura del promocionalismo. Castells establece un vínculo también entre la política de los escándalos y la necesidad de atraer a los independientes, pero reconoce que:

> los efectos de la política del escándalo en los resultados políticos concretos son en gran medida inciertos. Dependen del contexto cultural e institucional, de la relación entre el tipo de escándalo y el político implicado en él, del clima social y político del país y de la intensidad del efecto cansancio detectado entre los ciudadanos tras la interminable reiteración de escándalos en los medios de comunicación (Castells: 337).

En resumen, en el corto plazo (campañas) las variables más importantes a partir de las cuales la teoría comunicacional ha intentado explicar el resultado electoral son: estrategia de los candidatos, nivel de fortaleza de la infraestructura de campaña, posicionamiento alcanzado por los candidatos en medios e internet, fortalezas y debilidades de la imagen del candidato y dinámicas de la política del escándalo.

A nuestro juicio, para que las diferentes variables que destaca el autor desempeñen un rol decisivo en el resultado final de los comicios, importa mucho cómo llegan a la campaña los

principales adversarios en pugna y, en primer lugar, el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno. Por ejemplo, si el candidato presidencial del oficialismo llega a la campaña electoral impulsado por una alta aprobación del gobernante de turno, nuestra postura es que el peso que tendrán las variables de la escuela comunicacional en el desenlace electoral tenderá sensiblemente a disminuir, debido a que las preferencias de los votantes resultan previamente impactadas por la buena evaluación del gobierno. Un comportamiento prácticamente similar podemos esperar cuando el candidato presidencial del oficialismo arriba a la campaña precedido por una aprobación del mandatario de turno decididamente baja, si simultáneamente el principal partido opositor constituye una opción de gobierno creíble.

En nuestra opinión, en el escenario donde las variables explicativas de la escuela comunicacional en el corto plazo (campañas) sí adquieren un rol protagónico es aquel en el que, el candidato presidencial del partido en el gobierno, llega a la campaña precedido por una aprobación controvertida del mandatario de turno, debido a que el número de los que aprueban su gestión tiende a ser igual o incluso ligeramente inferior al número de los que la desaprueban y, por tanto, la posible continuidad del oficialismo se encuentra cuestionada. La tensión entre los bandos la resolverá, ahora sí, la eficacia con que hagan valer durante la campaña a las diferentes variables comunicacionales. Pero, se trata de un escenario que tiende a ser mucho menos frecuente de lo que generalmente están dispuesto a reconocer los poderosos actores económicos, mediáticos y políticos cuyos intereses se encuentran involucrados en las campañas. Como ya señalamos, lo predominante es que los mandatarios latinoamericanos arriben a la campaña electoral con una aprobación decididamente alta o decididamente baja. Y si algo tiene en común ambos escenarios, es que tienden a disminuir el peso de las campañas en la definición de la orientación de las preferencias.

Nuestro punto de vista, a partir de las comprobaciones realizadas, es que las campañas y las variables explicativas de la escuela comunicacional en el corto plazo, sólo en ciertas condiciones muy específicas importan, es decir, deciden elecciones. No tomamos esa afirmación a la ligera pensando, por ejemplo, que una buena evaluación del mandatario de turno permite al candidato presidencial del partido o coalición de gobierno no hacer campaña o permitirse todo tipo de errores en la misma, porque en ese escenario realizar una campaña que tienda cuando menos a no ser insatisfactoria permite proteger la orientación que ya tienen las preferencias. Hacia donde queremos atraer la atención es hacia el hecho de que en muchas más ocasiones de las que se suele aceptar, la campaña y con ella también las variables comunicacionales, sólo desempeñan el papel de conservar o reforzar las orientación que las preferencias traen desde antes del inicio de la propia contienda de carácter presidencial. Es en ese sentido y sólo en él que debe entenderse nuestra afirmación de que no importan.

Siendo consecuentes con lo hasta aquí expuesto, inferimos que sólo es posible determinar correctamente si las variables de la teoría comunicacional en el corto plazo (campañas) juegan o no un papel determinante o mínimo en el resultado electoral, definiendo cuál es la orientación de las preferencias antes de que se inicien las campañas. El asunto es que dichas preferencias, como regla, resultan impactadas o direccionadas por las evaluaciones que los votantes hacen sobre el desempeño del gobierno que, a su vez, son reflejadas de una forma más o menos aproximada por la medición de la popularidad del presidente de turno.

El procedimiento más frecuente ha resultado confiar en que el estado de las preferencias antes del inicio de las campañas lo reflejan las encuestas de intención de voto. Sin embargo, las contradicciones cada vez más frecuentes entre las tendencias reflejadas por esas mediciones y los resultados electorales han puesto en entredicho esa supuesta capacidad. En ese sen-

tido, y aunque parezca controvertido, uno de los argumentos centrales emergidos de la presente investigación es que, quien mejor capta el estado de las preferencias antes de las campañas, es también una medición pero de carácter más indirecto que la propia intención de voto: la popularidad del presidente. Justamente, los niveles de aprobación reflejados en la medición, en tanto altos, bajos o intermedios, generalmente definen si el impacto que tendrán las variables de la teoría comunicacional durante la campaña será mínimo o relevante. De ese modo, mientras decididamente mejor o peor sea la aprobación del mandatario de turno en la etapa previa al inicio de las campañas, menor también tenderá a ser el efecto de las campañas y de las variables explicativas de la teoría comunicacional en el resultado electoral, siempre que el oficialismo constituya uno de los dos adversarios principales en disputa. Por tanto, para ese escenario aplica en general la misma idea que es defendida desde la teoría de los efectos mínimos de las campañas. En cambio, mientras más controvertida resulte la aprobación del gobernante de turno, mayores márgenes de influencia tenderán a tener las variables de la teoría comunicacional y por tanto, ese escenario en cierta medida tiende a aproximarse al descrito por los defensores a ultranza de que las campañas constituyen la coyuntura indiscutida donde se definen las preferencias.

La teoría comunicacional contiene a su vez elaboraciones que explican la orientación de las preferencias antes de las campañas electorales, es decir, en el largo plazo, por ejemplo, *agenda setting y priming*.

La *agenda setting* expresa que son los medios los que seleccionan los temas que se convertirán en noticias y también la relevancia que deben tener (Iyengar, Peters y Kinder, 1982), en tanto el enfoque informativo sugiere al público los aspectos puntuales por los que debe evaluar el desempeño (*priming*) de sus representantes (Scheufele y Tewksbury, 2006). La idea subyacente es que, los temas de la agenda pública promovidos por los medios, así como las perspectivas de enfoques deslizadas,

"los ciudadanos los retoman y muy probablemente, los tienen en la cabeza, cuando evalúan el trabajo del Presidente o de algún otro funcionario público" (Somuano, 2018: 642). De acuerdo con ese modelo la percepción del desempeño gubernamental sería un producto o construcción comunicacional y, en ese sentido, constituirían la explicación última del desenlace electoral.

Si la percepción sobre el desempeño del partido de gobierno constituye una sofisticada elaboración comunicacional, eso significaría admitir que la decisión electoral basada en ella no escapa a ese condicionamiento. Pero si realmente fuera así, por qué razón entonces los partidos con mayor capacidad para construir una narrativa mediática debido a los recursos con los que cuentan y su privilegiada situación dentro de un sistema político dado, no sólo no siempre emergen triunfadores en las elecciones sino que también, en no pocas ocasiones, el resultado electoral les resulta adverso. Sin subestimar la construcción de significados a largo plazo, la percepción del desempeño gubernamental y la propia decisión electoral responden a un procesamiento mucho más complejo que el derivado de una sofisticada narrativa supuestamente impresa por los medios en receptores tendencialmente pasivos.

La teoría comunicacional no nos explica por qué razón la popularidad del mandatario tiene la capacidad de anticipar el resultado electoral del oficialismo. Sin embargo, el peso específico que sus variables explicativas en el corto plazo (campañas) tienen en el desenlace electoral si puede ser redefinido o reinterpretado a partir de los supuestos que esta investigación corrobora.

Más que respaldar a Finckel (1993) en su sentencia de que la mayoría de las campañas tienen un efecto limitado, las comprobaciones que realizamos permiten inferir los escenarios en que realmente las campañas importan para el caso de los comicios presidenciales latinoamericanos.

Las campañas tienen verdadera importancia, definen la orientación de las preferencias, en los escenarios siguientes:

1. Cuando los mandatarios de turno arriban a la etapa previa a las campañas con una evaluación intermedia, entre 40 y 45% de aprobación (13% de los casos).
2. Cuando los mandatarios de turno arriban a la etapa previa a las campañas con una alta popularidad pero el partido en el gobierno se encuentra dividido o cuando arriban con una baja aprobación pero la oposición no es creíble (10.53% de los casos).
3. Cuando el mandatario de turno es a su vez candidato presidencial e inicia la campaña desde una aprobación baja o controvertida (6,8% de los casos).
4. Cuando la contienda electoral se centra entre dos fuerzas políticas no gubernamentales debido a que el partido en el gobierno fue eliminado en primera vuelta o, en unos comicios presidenciales de turno único, la baja aprobación del mandatario de turno avizora que el partido de gobierno se encuentra prácticamente descartado de constituir una de las dos principales fuerzas políticas en disputa (10% de los casos)[1].

El modelo de clivajes

De acuerdo con este enfoque, el voto lo determina la ubicación del votante en la estructura social y aquellos grupos con rasgos sociales similares deberán tener una conducta electoral tendencialmente homogénea. Los grupos sociales se diferencian en virtud a variables de pertenencia a una clase social, la edad, género o grupo étnico.

En el origen de los grupos sociales están determinados conflictos de intereses específicos de cada sociedad (clivajes) que motivan una articulación o unión para la actividad política. Las divisiones sociales originadas por los conflictos no sue-

[1] El conjunto de escenarios expuestos representan aproximadamente el 40% de los casos. Como resultado sólo en 4 de cada diez elecciones las campañas tienden a ser imporantes, esto es, a tener la capacidad de definir la orientación de las preferencias.

len ser temporales sino que más bien tienden a sedimentarse condicionando cierta estabilidad de la conducta electoral y el sistema de partidos. La teoría de los clivajes fue desarrollada originalmente por Lipset y Rokkan, 1967, pero en los últimos años ha sufrido revisiones encaminadas a visualizar nuevas escisiones sociales generadas por los cambios socio-económicos y tecnológicos acontecidos en la segunda mitad del pasado siglo.

La variable explicativa asociada al modelo de clivajes fundamentalmente es voto de clase, fuertemente cuestionado a partir de la década del 90 del pasado siglo a través del debate acerca de la permanencia de la clase social como factor explicativo del voto (Tagina, 2008).

La mayoría de los investigadores coinciden en que ha tenido lugar un proceso de destructuración de la sociedad moderna (Castells, 1997; Garretón, 2001 y 2002) que ha erosionado a los actores políticos tradicionales y originado el surgimiento de nuevos. En América Latina la trasformación se manifiesta en la disolución de la matriz nacional-popular-estatal vigente hasta los años 80 por el agotamiento del modelo económico centrado en el Estado, la configuración de regímenes democráticos e híbridos y el crecimiento de las desigualdades sociales, la pobreza y la marginalidad. En ese contexto, tiene lugar lo que ha sido identificado por Pakulsky y Water (1996) como un debilitamiento del voto y del compromiso de clase con los partidos políticos.

El espacio que deja libre el declive de los factores de largo plazo con incidencia en la decisión electoral como la conciencia y el compromiso de clase, posiblemente es ocupado por otros elementos ideológicamente menos enraizados, más volátiles y también más directamente vinculados al bienestar personal y social, como lo son las percepciones sobre el estado de la economía y la propia evaluación del desempeño presidencial. El debilitamiento de los fundamentos ideológicos y clasistas del voto favorece al fortalecimiento de los incentivos pragmáticos y el apoyo multisectorial de las alternativas políticas. Probable-

mente, también constituya en determinada medida un estímulo para la desafección política en general o el abstencionismo, pero ese comportamiento político excede el objeto de la presente investigación.

En síntesis, mientras la persistencia de los clivajes debilita el voto pragmático, esto es, el voto en función de las percepciones sobre el desempeño del partido en el gobierno, el debilitamiento de los anclajes clasistas compulsado por cambios estructurales de carácter global tiene el efecto contrario. Seguramente no constituye una casualidad que el marco temporal de nuestra investigación, que contrasta los datos de la aprobación de los mandatarios latinoamericanos de siete países desde los años 90 del pasado siglo hasta la actualidad con el éxito o la derrota del partido en el gobierno y que a su vez reportó una consistencia robusta en el vínculo entre ambas variables, coincida con la etapa de debilitamiento más o menos gradual de los clivajes tradicionales de la región.

Nuestra inferencia al respecto es que mientras mayor potencia manifiesta la capacidad anticipativa de la popularidad presidencial, menor también es el potencial explicativo de la teoría de los clivajes y viceversa.

La escuela racional

Los fundamentos del análisis racional provienen de la teoría económica pues, de acuerdo con el fundador de la corriente, los economistas teóricos casi siempre han considerado las decisiones como fruto de mentes racionales (Downs, 1973: 3).

La racionalidad se refiere a procesos de acción. El fundamento teórico que permite conocer los objetivos de cada actor político, partidos, votantes y gobierno es el axioma del egoísmo. Todo individuo además de racional es egoísta. Aunque los hombres no siempre son egoístas ni siquiera en política y de que en ningún campo es completa la idea del comportamiento humano

si se prescinde del altruismo, no obstante todas las teorías generales de la acción social recurren fundamentalmente al axioma del egoísmo. Así, por ejemplo, del axioma del egoísmo se deduce la motivación de las acciones políticas de los miembros de los partidos. Para Downs, los partidos políticos actúan únicamente con el fin de conseguir la renta, el prestigio y el poder que proporcionan los cargos públicos. "En este razonamiento se apoya la hipótesis fundamental de nuestro modelo: los partidos formulan políticas que les permitan ganar las elecciones, en lugar de ganar las elecciones con el fin de formular políticas" (Downs: 31).

En el modelo de Downs, votante racional es la condición natural del ciudadano. Significa que el ciudadano vota por el partido que en su opinión le proporcionará mayor renta de utilidad durante el próximo período electoral. La racionalidad del comportamiento descansa en que el ciudadano, atendiendo a la información de la que dispone al momento de elegir, vota pensando que su decisión es la más beneficiosa para él, es la que mejor renta le aportará. No importa aquí, por consiguiente, lo que otros actores con mayor y más profunda información puedan pensar sobre la naturaleza o el significado de su voto. Lo decisivo es que quien vota, toma la decisión porque ha concluido que le reportará más beneficio que perjuicio. La decisión incluso puede ser errónea, pero aun así no significa que no haya sido racional.

La toma de decisión es consecuencia del cálculo de la diferencial esperada de partido, que no es otra cosa que, la diferencia entre la renta de utilidad que recibió en el mandato que concluye y la que habría percibido de haber estado la oposición en el poder. "Si es positiva, vota por el gobierno; si es negativa, vota por la oposición; si es nula, se abstiene" (Downs: 42).

El cálculo no se limita a comparar programas, el votante siendo racional sabe que ningún partido será capaz de hacer todo cuanto dice que hará, por tanto el estima lo que harán realmente los partidos una vez en el poder. Como uno de los

contendientes ya está en el poder sus resultados en el período que finaliza son el mejor indicador de lo que hará en el futuro. Otro asunto es el cálculo por parte del votante de los resultados de los partidos que aspiran al poder, entendiendo que no sería racional comparar resultados concretos contra promesas. De acuerdo con Downs, para que la comparación sea correcta, el votante estima los resultados que el partido de oposición habría conseguido en el período que concluye de haber ocupado el poder. La comparación tiene lugar entre una renta efectiva actual de utilidad y otra hipotética actualizada:

> En consecuencia, la parte más importante de la decisión del votante es la cuantía de su diferencial corriente de partido, es decir, la diferencia entre la renta de utilidad que efectivamente percibe en el período t (que finaliza) y la que habría percibido de haber estado la oposición en el poder (Downs: 43).

En el mundo real donde rigen la incertidumbre y la falta de información, el votante ha de conformarse con estimaciones basadas en aquellos sectores de la actividad del gobierno en que sean notorias las diferencias. Para el autor, el votante adopta sus decisiones de votación después de comparar diversos flujos, reales o hipotéticos, de renta de utilidad. Una vez que ha decidido cómo votar, aunque sea provisionalmente, sólo podrá persuadírsele a cambiar alterando los siguientes factores:1) La información que posee acerca de la respectiva política; 2) La relación entre los aspectos de dicha política que conoce y su concepción de la sociedad buena. En los sistemas multipartidistas, el votante adiciona una operación más, una vez que identifica el partido que, a su juicio, le beneficiará más, estima después las posibilidades de éxito del mismo. Si su evaluación lo lleva a concluir que las posibilidades de victoria de su partido de preferencia son nulas, entonces vota a favor de la opción con posibilidades de triunfar.

Lo que subyace es que la decisión de votación trata, ante todo, sobre los beneficios o no que reportó al ciudadano la gestión del partido en el gobierno durante el mandato. Las elecciones versan sobre el desempeño del gobierno, el mismo Downs lo afirma más de una vez categóricamente: "La decisión de votar se adopta según la política que el gobierno haya seguido durante el período electoral (mandato). Se trata de una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno" (Downs, 257). La idea de la escuela racional de vincular la decisión y el resultado electoral con la actuación efectiva del gobierno (desempeño) constituye el núcleo de su aporte y lo diferencia de interpretaciones alternativas que ponen énfasis en la identificación partidaria, los clivajes, las campañas, la fortaleza de la imagen de los candidatos, etc. Por otra parte, siendo el desempeño la clave del desenlace electoral, puede entenderse cabalmente entonces por qué razón la popularidad del mandatario de turno tiene la capacidad de anticipar si el resultado electoral terminará por favorecer o no al partido o coalición de gobierno.

Para el autor la lógica real de la votación se encuentra asociada, ante todo, con la incertidumbre, la falta de conocimiento seguro acerca del curso de los acontecimientos. Dadas esas condiciones son muchos los votantes para los que resultan útiles las ideologías de los partidos por librarles de la necesidad de relacionar cada cuestión con la propia filosofía. Las ideologías les ayudan a centrar su atención en las diferencias entre los partidos (Downs, pp. 107-109). Con ese recorte los votantes pueden ahorrar el coste de informarse sobre una amplia gama de cuestiones.

Si el votante busca atajos que le permitan ahorrarse los costos de informarse sobre una amplia gama de cuestiones y las ideologías le resultan útiles en ese sentido por librarles de la necesidad de relacionar cada cuestión con la propia filosofía, es comprensible a su vez el papel que pueden jugar las mediciones regulares de la popularidad del presidente para que de-

terminados segmentos de votantes puedan formar o completar ágilmente su opinión sobre el estado de la cosa pública y, en primer lugar, sobre la labor del mandatario de turno (Downs, pp. 112-115). De acuerdo con Downs, las ideologías son útiles también a los partidos para ganar el apoyo de diversos grupos sociales y para simplificar las decisiones acerca de qué políticas les reportará más votos. El grado de proximidad que alcance la política de los partidos con su ideología se refleja en los conceptos de partido fiable y partido responsable. Un partido es fiable si sus declaraciones de política al comienzo del período electoral, incluidas las de su campaña previa a las elecciones, sirven para prever con exactitud su comportamiento durante el período. En tanto, un partido es responsable si su política en un período es congruente con sus acciones o declaraciones en el período precedente, esto es, si no repudia sus posiciones anteriores al formular el nuevo programa (Downs, pp. 114-115).

El partido en el poder no necesita ser fiable con tal que sea responsable, pues sus acciones corrientes constituyen una guía para su actuación futura mejor que sus declaraciones actuales. En tanto, si un partido de la oposición no es fiable, será incapaz de ganarse la confianza y por tanto los votos de los ciudadanos racionales (Downs: 103-122).

Así como en el ámbito de la opinión pública nuestra investigación sigue la perspectiva de Sartori (1992), con relación a las teorías sobre las determinantes del desenlace electoral el vínculo decisivo se encuentra en el enfoque racional de Downs.

El núcleo de la teoría racional es el reconocimiento del protagonismo que tiene en el resultado electoral el desempeño del partido en el poder. El desempeño del partido en el poder es fruto de una ecuación compleja. Entran a formar parte, la situación heredada del gobierno anterior, los resultados de las políticas públicas acometidas por el gobierno en funciones, el modo en que el liderazgo presidencial enfrenta las problemáticas que emergen y las características personales del mandatario de turno. Sin embargo, la percepción general que los ciudadanos tie-

nen sobre el mismo, que hay que recordar que no es saber ni episteme, se refleja de forma más o menos precisa en la medición de la popularidad del presidente. Por tanto, si la aprobación del mandatario de turno tiene la capacidad de anticipar de forma robusta el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno, en gran medida se debe a que, de un modo aproximado, refleja la opinión que los ciudadanos tienen en general sobre el desempeño del gobierno. La pregunta de la encuesta va precisamente en esa dirección: ¿En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo (desempeño) que está haciendo el presidente?

No menos interés representa la afirmación de Downs acerca de que si un partido de la oposición no es fiable será incapaz de ganarse la confianza y por tanto los votos de los ciudadanos racionales. Ese planteamiento sencillamente se encuentra en la génesis de que un desempeño gubernamental relativamente insatisfactorio reflejado en una baja aprobación del mandatario de turno, sin embargo, no se traduzca automáticamente en una derrota del oficialismo en las urnas.

La escuela racional ha constituido una fuente valiosa de variables explicativas del voto, sin embargo, llama la atención que para sus continuadores pasara inadvertida la necesidad de explicar por qué razón en determinados casos el resultado electoral aparenta no constituir un reflejo del desempeño exhibido por el gobierno de turno.

Esa falencia es responsable de que la tesis de Downs acerca de que la decisión electoral es la reacción del votante ante la actuación efectiva del gobierno, constituya una variable explicativa hacia la que se suele tener una aproximación contradictoria. Mientras teóricamente no se duda en reconocerla como una tesis indiscutida, sin embargo, su solvencia empírica es percibida como carente de suficiente consistencia.

Por mucho tiempo, el fruto mejor acogido proveniente de la escuela racional downsiana ha sido la teoría del voto económico. Ingentes esfuerzos se realizaron desde los años 70 del pasado siglo para comprobar dentro y fuera de Estados Unidos

la consistencia de su postulado central. Sin embargo, la conclusión a la que se ha arribado ha sido que el valor explicativo de la teoría del voto económico, fuera de las condiciones de Estados Unidos, es en general modesto y aplica fundamentalmente en condiciones de crisis económicas profundas.

El resultado podría apuntar a interpretarse como una negación de la perspectiva downsiana y por tanto, la respuesta correcta sobre cuáles son las determinantes del resultado electoral habría que encontrarlas en las explicaciones alternativas. Salvo, por supuesto, que se presentara la debida argumentación en contra. El potencial explicativo de la teoría del voto económico es modesto, pero aun reconociéndolo, de ninguna manera el hecho niega la validez del núcleo de la concepción downsiana. En realidad, la teoría del voto económico, reduce el desempeño del partido de gobierno a su aspecto económico, sea expresado en términos de crecimiento del producto interno bruto o de índices de inflación y desempleo. Pero en determinados contextos, como por ejemplo el latinoamericano, los componentes no económicos del desempeño juegan un papel central en la definición de la aprobación o desaprobación por parte de los ciudadanos de la gestión presidencial así como del propio respaldo electoral a la continuidad del partido en el gobierno. Echegaray (1996), por ejemplo, es contundente al respecto. La evidencia empírica lo lleva a afirmar rotundamente que el liderazgo presidencial del oficialismo en Latinoamérica emerge como un factor políticamente autónomo, lejos de quedar agotado por las habilidades macroeconómicas del gobierno.

La idea es que si la tesis más importante de Downs no ha mostrado la consistencia esperada al contrastarla con la evidencia empírica, por una parte, obedece a una interpretación economicista del desempeño del partido en el gobierno[2], mien-

[2] La interpretación economicista puede manifestarse no sólo en la comprensión del desempeño sino también de la aprobación presidencial, especialmente cuando los postulados de la teoría del voto económico mecánicamente se trasladan desde la concepción de las determinantes del resultado electoral a la de

tras por otra, al sorprendente desinterés que en general hemos mostrado por identificar las causas de que se produzcan resultados electorales que parecen no guardar relación alguna con el desempeño del partido en el gobierno.

La función voto de la popularidad

En varios aspectos importantes, la función voto de la popularidad adolece en la literatura de una interpretación homogénea. La conclusión a que nos condujo la revisión bibliográfica es que mientras uno de los enfoques no establece diferencias entre la teoría del voto económico y la función voto de la popularidad, en cambio, en la interpretación opuesta el abordaje de la función voto de la popularidad se circunscribe al pronóstico de las probabilidades de victoria o derrota electoral de la candidatura oficialista a partir del porcentaje de aprobación que exhiben los mandatarios.

Bosch, Díaz y Riba (1999) consideran a la función voto de la popularidad como una línea independiente dentro de las teorías del comportamiento electoral. Sin embargo, tanto si le identifica con la teoría del voto económico como si se concibe como expresión del ahondamiento en el potencial anticipativo de la popularidad presidencial, es insostenible su autonomía con relación a la teoría racional. A partir de los hallazgos de la presente investigación nos inclinamos a considerarla como precisamente eso, una derivación ineludible del propio enfoque downsiano.

Para Bosch, Díaz y Riba (1999) las funciones de popularidad de los gobiernos aparecen como resultado del interés general por conocer las relaciones entre economía y política,

la dinámica de altas y bajas de la popularidad. Aunque no lo hace desde una postura crítica, Romero (2012) reconoce que "por lo regular la economía es la principal variable independiente en que se centran los estudios sobre aprobación presidencial..." (Romero, 2017: 118).

específicamente en qué medida el comportamiento de la economía afecta o favorece el porcentaje de votos que obtiene el partido de gobierno. En esa perspectiva, como autor fundacional de la línea de investigación es reconocido Kramer (1971), que investigó el impacto de las fluctuaciones económicas en Estados Unidos en el período entre 1896 y 1964 sobre los resultados de las elecciones legislativas, concluyendo que las mismas ejercen una influencia importante porque mejoras en la economía ayudan a los candidatos del partido de gobierno, mientras los retrocesos económicos favorecen a la oposición.

Bosch, Díaz y Riba (1999) a su vez reconocieron como hitos en la evolución de esa línea de investigación a la teoría del voto retrospectivo de Fiorina (1981), la teoría de Kinder y Kieweit (1981) defendiendo que lo que influye en los electores es la situación económica general sobre la particular, el alegato en contra de esa perspectiva y en favor del voto egotrópico de Kramer (1983) y el estudio de Lewis Beck (1990) donde compara el vínculo entre condiciones macroeconómicas y resultados electorales de Estados Unidos con cinco democracias europeas.

Como puede observase, las obras y los autores citados dentro de esta línea se inclinan a ser exponentes de la teoría del voto económico[3] que ciertamente investiga la función voto pero de dinámicas macroeconómicas consideradas clave como la inflación, el desempleo o el crecimiento o decrecimiento del PIB.

Por su parte, una interpretación diferente de la función voto de la popularidad encontramos en "otro grupo de autores que utiliza al aprobación como predictor de la conducta electoral de los votantes. Así altos niveles de aprobación deberían favorecer al candidato de la coalición incumbente" (Morales y Saldaña, 2008). Estos investigadores reconocen que los impulsores de la función popularidad fueron Mueller (1970) en Estados Unidos y Goodhart y Bhansali (1970) en Reino Unido y

[3] Salvo Fiorina (1981), siempre que no reduzcamos su teoría del voto retrospectivo al voto económico retrospectivo.

que luego surgió otra rama de investigación que se apoyó en el concepto de V-Function (función voto), destacando el trabajo de Kramer 1971. “En este caso, el objetivo central consistía en conocer el poder explicativo de la popularidad de un presidente en su apoyo electoral, en caso de permitirse la reelección, o el respaldo hacia el candidato del partido o coalición incumbente en los comicios siguientes” (Morales y Saldaña, 2008, 38).

Lo que tienen en común ambas interpretaciones de la función voto de la popularidad es que utilizan, como indicador de respaldo de los ciudadanos a la gestión del gobierno, el porcentaje de votos que obtiene el partido de gobierno en las siguientes elecciones generales. Sin embargo, la visión de Morales y Saldaña (2008) es mucho más precisa con respecto a la definición del contenido de la función voto de la popularidad, porque exclusivamente reconoce como variable independiente el porcentaje de aprobación de los mandatarios. La afirmación no nos impide a su vez, que consideremos inconsistente identificar a Kramer (1971) como el propulsor de la línea que investiga la conexión entre popularidad presidencial y voto por el partido en el gobierno, por cuanto la asociación que buscó comprobar ese autor, fue entre las fluctuaciones económicas y el voto por los escaños legislativos. Entonces, la interpretación de Morales y Saldaña (2008) si bien es sumamente precisa con respecto al contenido de la función voto de la popularidad, en tanto la distingue de la teoría del voto económico, sa nuestro juicio falla en la identificación de la obra y el autor propulsor de la línea de investigación.

En ese sentido, lo que nuestra revisión arrojó es que, si bien Mueller (1970) es el impulsor legítimo de la función popularidad, simultáneamente se erigió como adversario de la función voto de la popularidad. Mueller, no tuvo reparos en negar que la popularidad también podría contener una función voto. Para Mueller (1973), la medición de Gallup era probablemente un indicador muy imperfecto del éxito o fracaso electoral de un presidente que busca la reelección. Su postura defendía que

el índice de popularidad tiene poca relevancia directa con el resultado electoral.

No fue sino hasta 1979, que contradiciendo la aseveración de Mueller, Lee Sigelman (1979), reportó una fuerte relación entre la popularidad presidencial y el voto por el candidato del partido gubernamental, alertando que la visión anterior podía ser falsa.

En 1982, Lewis-Beck y Rice, respaldaron las conclusiones de Sigelman, pero introdujeron a su vez una ligera modificación en el procedimiento de calcular el impacto de la popularidad presidencial en la votación del partido de gobierno. En lugar de medir la popularidad de acuerdo con la última encuesta Gallup celebrada antes de la elección, como había procedido Sigelman, consideraron pertinente emplear un sondeo de la aprobación relativamente lejano de la elección registrado en un período de relativa calma política, es decir, exactamente después de la realización de las primarias presidenciales y antes de las convenciones partidistas. Siendo la elección en el mes de noviembre, tomaron como referencia por tanto el sondeo de Gallup correspondiente al mes de junio, es decir, casi un semestre antes de la fecha en la que los electores regularmente acuden a las urnas en Estados Unidos. La conclusión fue que, la calificación de popularidad del presidente es altamente predictiva del caudal definitivo de votos que obtiene su oferta de reelección, especialmente cuando se valora la popularidad en junio del año electoral (Lewis-Beck y Rice, 1982).

Brody y Sigelman (1983) actualizaron y ampliaron el hallazgo que había reportado el propio Sigelman, cuando descubrió que, los resultados de las elecciones presidenciales se pueden predecir con cierta precisión sobre la base de la aprobación del presidente, en el escenario en que el titular del ejecutivo se presenta a reelección. En el trabajo de 1983, ambos autores documentaron también que los resultados de las elecciones presidenciales se pueden predecir, con cierta precisión, incluso cuando el presidente no se postula para la reelección.

Para ello propusieron un modelo basado en el índice de aprobación del mandatario de turno reflejado en la encuesta final de Gallup antes de la elección (Brody y Sigelman, 1983).

Con los antecedentes descritos, nos inclinamos a reconocer que contrariamente a lo que afirman por una parte, Bosch, Díaz y Riba (1999) y, por otra, Morales y Saldaña (2008), el legítimo propulsor de la función voto de la popularidad no es otro que Lee Sigelman (1979), quien rápidamente encuentra continuidad en los trabajos de Lewis-Beck y Rice (1982), así como en los estudios de Brody y el propio Sigelman (1983). La conclusión, no afecta en lo más mínimo el indiscutido legado de Kramer (1971), solo que el mismo va referido al voto económico o dicho en otras palabras, a la función voto de la economía.

En resumen, los trabajos de Sigelman (1979), Brody y Sigelman (1983), Lewis- Beck y Rice (1982 y 1984), así como incluso del propio Abramowitz (1988), contribuyeron a establecer que la popularidad presidencial, a pesar de constituir un dato obtenido a partir de una muestra y, por consiguiente, contiene un error de muestreo, de las dudas sobre la fiabilidad que se puede otorgar a las respuestas dadas por los encuestados y de ser manifestación de juicios personales agregados no vinculados a una temática en específico o asunto propiamente electoral, sin embargo, guarda una relación con la expresión más explícita de la voluntad de los electores: el voto. La fortaleza del vínculo al parecer se explica por el hecho de que la aprobación del presidente de turno funciona como un proxy sobre el desempeño futuro del candidato del partido o coalición gubernamental (Romero, 2009: 12).

Por último, un lugar destacado en los estudios sobre la función voto de la popularidad en América Latina, corresponde a Echegaray (1996), que investigó las elecciones presidenciales latinoamericanas de 1982 a 1994 encontrando que “es la evaluación de la labor del presidente más que cualquier experiencia económica específica lo

que emerge como el mejor predictor de cuan bien el candidato del oficialismo saldrá parado en la elección" (Echegaray: 610).

Para el autor:

> los electorados latinoamericanos evalúan a sus presidentes con varios criterios en mente, no apenas aquellos de naturaleza económica. En otras palabras, el liderazgo presidencial del oficialismo emerge como un factor políticamente autónomo, lejos de quedar agotado por las habilidades macroeconómicas del gobierno (Echegaray: 612).

Al considerar la mayoría de los resultados electorales verificados en América Latina ente 1982 y 1994, Echegaray (1996) comprobó que la popularidad presidencial ejerció un impacto mayor y estadísticamente significativo en comparación con las variables económicas que examinó, concluyendo que "la cantidad de votos que el partido en el gobierno llega a cosechar depende más de la capacidad gerencial demostrada por su principal líder frente a cuestiones externas a la esfera económica que a asuntos puramente económicos" (Echegaray: 613).

Echegaray no alberga dudas en destacar que el efecto más importante en juego parece ser el proveniente de la proyección del carisma funcional del presidente en turno sobre el candidato de su mismo partido (Echegaray: 613).

Finalmente, nuestra investigación corroboró el potencial explicativo y anticipativo de la función voto de la popularidad para el caso de los comicios presidenciales latinoamericanos. No obstante, consideramos que la fortaleza de ese potencial precisamente descansa en el nexo indiscutido de la propia función voto de la popularidad con la teoría racional. En especial, con la tesis downsiana de que la elección versa sobre el desempeño del gobierno. La decisión electoral constituye una reacción del votante al desempeño efectivo del gobierno. Precisamente, la popularidad presidencial constituye en cierta medida un reflejo de esa reacción efectiva.

Conclusiones. Hallazgos, significado y perspectivas de investigación

Aunque una de las pautas del comportamiento electoral más añeja y que goza a su vez de mayor nivel de aceptación, es que la elección presidencial versa sobre el desempeño del gobierno (Downs, 1973), la tendencia a reducir el desempeño a su dimensión económica ha tendido a sembrar dudas en cuanto a que el criterio conserve luego de la comprobación empírica la misma consistencia que manifiesta en la formulación.

Sin embargo, la consistencia del vínculo entre la popularidad presidencial, en tanto reflejo más o menos preciso de la percepción general que los ciudadanos tienen sobre el desempeño del partido en el gobierno, y el éxito o la derrota del partido en el gobierno, contribuye al rescate como válida de la perspectiva downsiana. Con independencia de la existencia eventual de casos en que, a pesar a contar con presidentes bien evaluados, el partido gubernamental no logra ganar la elección o en los que a partir de gobernantes de turno mal evaluados consigue ganar la contienda.

En ese sentido, el hallazgo primario de la presente investigación residió en comprobar, en una muestra más exigente que las empleadas con anterioridad, que cuando la observación de la naturaleza de la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o derrota del partido o coalición de gobierno en los comicios presidenciales de América Latina, tiene lugar cumpliendo un grupo de precauciones metodológicas, emerge que el vínculo entre ambas variables tiende a ser robusto.

Significa que una aprobación presidencial igual o superior al 45%, registrada incluso antes del inicio de las campañas electorales, anticipa el éxito de la candidatura oficialista. Mientras una evaluación del mandatario de turno inferior al 40%, anuncia la derrota del partido de gobierno en, prácticamente, el 86% de los casos. Si el intervalo entre 40 y 45% constituye un interregno donde la popularidad del mandatario no anticipa el resultado electoral del partido o coalición de gobierno, se debe a que la correlación de fuerzas entre quienes aprueban y quienes desaprueban la gestión presidencial tiende a igualarse dentro de ese rango y la balanza puede inclinarse en una u otra dirección en virtud de una mayor dependencia de factores como los que son característicos en la teoría comunicacional del voto.

La comprobación de que la popularidad presidencial tiende a anticipar de manera potente del resultado electoral del oficialismo conduce a que, a su vez, sea superada la actual desarmonía existente entre el respaldo casi indiscutido al núcleo de la teoría downsiana y la desconfianza en el nivel de consistencia atribuido a su aplicabilidad.

Si como hemos comprobado, el nivel de popularidad del presidente de turno tiende a anticipar la retención o pérdida del poder por parte del partido o coalición de gobierno en el 85.71% de los casos, entonces, el desempeño gubernamental o la percepción general que sobre el mismo se hace el votante es quien determina, en primer lugar, el resultado electoral del oficialismo.

A su vez, en tanto el oficialismo constituye, como regla, uno de los dos contendientes principales en disputa en los comicios presidenciales en América Latina, por consiguiente, la percepción sobre el desempeño del partido en el gobierno constituye una determinante clave del resultado electoral en general.

Como parte también del primer hallazgo se encuentra la confirmación de que, en los comicios presidenciales de América Latina, la asociación entre la popularidad del mandatario

de turno y el éxito o la derrota del partido o coalición gubernamental no sólo es robusta en los casos en que el candidato presidencial del oficialismo es el propio gobernante de turno (reelección sucesiva), sino también cuando la responsabilidad recae en otro individuo que ha sido nominado por la organización para representarlo en la contienda. Brody y Sigelman (1983) confirmaron esa asociación para el caso de los comicios presidenciales en Estados Unidos, mientras Echegaray (1996) y Gramacho (2007) intentaron hacerlo para el caso latinoamericano pero, lamentablemente, sus muestras incumplían ciertos requisitos de rigor. Por consiguiente, la transferencia de popularidad en votos se produce tanto cuando el mandatario de turno es el candidato presidencial como cuando no lo es. La tasa de asociación confirmada entre popularidad y resultado electoral del oficialismo cuando el presidente busca la reelección sucesiva fue de 83.33%, mientras en el escenario en que el candidato oficialista no es el ocupante de la oficina presidencial, la tasa fue de 86.11%. Contrariando la percepción dominante la evidencia empírica apunta a que la solidez de la asociación no solo conserva, sino que es ligeramente mayor cuando el candiato presidencial del oficialismo no es el propio mandatario de turno.

Echegaray (1996) reconocía que a partir de la muestra que empleó en su investigación, en el mejor de los casos limitada a los dos primeros comicios competitivos de la etapa transicional, no podía responder si los efectos de la popularidad que encontró se debían a una reserva de legitimidad extraeconómica, a una especie de "luna de miel" con la democracia que la tiende a inmunizar contra la acción de otros factores como las dificultades económicas. Simultáneamente, su muestra comprobaba sólo los efectos de la popularidad en el resultado del oficialismo en la primera vuelta. Esta investigación comprobó que la asociación entre popularidad presidencial y voto por el oficialismo, en América Latina, no se limita a las primeras elecciones pos transición y que la misma tiende a reflejarse también de forma

robusta no sólo en el resultado de la primera vuelta sino con mucho mayor vigor en el propio desenlace electoral.

El segundo hallazgo que reportamos es que, siendo como tendencia robusta la naturaleza de la asociación entre popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido en el gobierno, comprobamos que el vínculo es factible de ser contrarrestado por la influencia de las condiciones siguientes:

a) La afectación del partido o coalición en el gobierno por un proceso de división interna, abierto o más o menos solapado, en el momento en que enfrenta la campaña electoral, que tiene el efecto de dispersar el voto progubernamental inhibiendo los beneficios de contar con un mandatario de turno bien evaluado.

b) El hecho de que la oposición no constituya una opción de gobierno creíble, debido a: 1) su complicidad con el régimen autoritario relativamente reciente que padeció el país; 2) a su falta de experiencia gubernamental a nivel nacional que eleva la incertidumbre sobre sus reales posibilidades de constituir un gobierno que supere el desempeño exhibido por el oficialismo.

El efecto más distintivo tanto de la división del oficialismo como del problema de falta de fiabilidad de la oposición es que ambos factores sitúan al candidato presidencial del partido en el gobierno en una situación de desventaja o ventaja crucial incluso desde antes de que comience la campaña.

La confirmación de que sólo la manifestación de ciertas condiciones especiales tiene la capacidad de anular el potente nexo entre popularidad y resultado electoral del oficialismo, constituye a su vez una corroboración adicional de la pauta downsiana de que la elección versa sobre el desempeño del gobierno.

No descartamos que puedan existir otras razones por las cuales la oposición no constituya una fuerza política creíble, pero lo que hemos corroborado en esta investigación es la existencia, al menos, de los tipos mencionados. En este sentido, la

perspectiva investigativa que se abre consiste en controlar en nuevos casos si en los comicios presidenciales latinoamericanos se manifiestan a su vez otras condiciones con capacidad de anular el nexo robusto entre popularidad presidencial y el éxito o la derrota del partido o coalición de gobierno.

Si a la muestra que empleamos en esta investigación para esclarecer el carácter de la asociación entre popularidad y resultado electoral del oficialismo, conformada por un total de cuarenta y dos elecciones en siete países, restamos los dos comicios identificados donde el candidato presidencial del partido o coalición de gobierno fue eliminado en primera vuelta (Brasil, 1989; Colombia, 2018) y las dos elecciones de turno único donde quedó relegado más allá del segundo lugar en la contienda (México, 2012 y 2018), la operación revela que el candidato presidencial oficialista jugó un papel protagónico en el 90.47% de los casos. Si el rango en que el partido o coalición gubernamental constituye uno de los dos contendientes clave en una elección presidencial resulta tan elevado y sabemos que entre la aprobación de los mandatarios y el resultado electoral que obtiene el oficialismo existe una asociación robusta (85.71%), pero además con el auxilio de un grupo reducido de indicadores podemos identificar la presencia o no de las condiciones específicas que anulan la conexión entre esas variables, ello apuntaría a que nos encontramos en una situación favorable para la construcción de pronósticos del resultado electoral de los comicios presidenciales latinoamericanos y que el ejercicio podría desarrollarse dentro de niveles satisfactorios de certidumbre. Explorar esa ruta implica, nada menos, que la posibilidad de liberar los pronósticos electorales del politólogo de la excesiva dependencia que han mostrado con respecto a los resultados de las encuestas de intención de voto.

Pero, ¿qué sucede cuando el partido o coalición de gobierno se encuentra descartado de jugar un papel protagónico en la contienda pues no constituye uno de los dos principales contendientes en disputa?

Se trata de un escenario cuya manifestación es decididamente inferior. El partido o coalición de gobierno tiende a no constituirse en uno de los dos principales contendientes en disputa, en los comicios presidenciales en América Latina, en un rango que abarca aproximadamente el 11% de los casos. Sin embargo, tenemos la percepción de que ese rango está tendiendo a ensancharse y representa de hecho otro importante desafío cognoscitivo. El rasgo más sobresaliente de ese tipo de comicios es que la contienda tiene lugar entre dos fuerzas políticas no gubernamentales u opositoras. Nuestra hipótesis es que la decisión electoral en esos casos también pasa por la evaluación retrospectiva de desempeño que hace el votante. El modo en que el votante se orienta para decidir a quién respalda entre dos fuerzas opositoras, siempre que no milite o sienta una simpatía especial hacia alguna de ellas, es intentando identificar cuál de esas dos alternativas ha presentado mejores credenciales de desempeño en las oportunidades en que tuvo responsabilidades de gobierno. La evaluación retrospectiva del desempeño parece ser clave tanto para no respaldar al oficialismo como para elegir la nueva opción. La diferencia consiste en que para el caso del oficialismo la evaluación es inmediata, es decir, versa sobre el mandato que está por concluir, mientras para el caso de las fuerzas que aspiran a ocupar el lugar vacante, la evaluación tiene que retrotraerse a mandatos anteriores. En caso de que por esa vía los votantes tampoco obtengan una respuesta, la decisión electoral dependerá del dominio desde el que se adopte. Si el votante la adopta desde el dominio de las ganancias, la tendencia será respaldar a la fuerza opositora con experiencia gubernamental, aunque la misma no haya resultado completamente satisfactoria. Pero si la decisión se hace desde el dominio de las pérdidas, la tendencia será respaldar a una fuerza emergente, debido a que es la única que directa o indirectamente no tiene responsabilidad con el estado de cosas reinante. Sin embargo, la veracidad de esa hipótesis deberá ser cotejada con la experiencia comparada en futuros trabajos.

Los hallazgos que reportamos, sin dudas, compulsan una reformulación del potencial explicativo de las teorías sobre las determinantes del desenlace electoral como exponemos en el capítulo quinto. El hecho de que la lectura de la popularidad registrada meses antes del inicio de las campañas anticipe de forma robusta el éxito o la derrota electoral del partido en el gobierno, equivale prácticamente a hacer estallar un torpedo bajo la línea de flotación de la mayoría de las explicaciones. La popularidad del presidente de turno y su capacidad anticipativa, sin dudas, restringe el potencial explicativo de la identificación partidaria, la teoría comunicacional y los clivajes. En ese escenario de turbulencias emerge como teoría con mayor poder explicativo la concepción racional downsiana de que la elección versa sobre el desempeño del partido en el gobierno. La decisión electoral es una reacción del votante a la actuación efectiva del gobierno y precisamente, la popularidad presidencial constituye en cierta medida un reflejo de esa reacción efectiva.

Bibliografía

Abramowitz, A. (1988). An improved Model for Predicting Presidential Elections Outcomes. In *PS: Political Science and Politics*, 21, (4) 843-847.

Aguilar, R. y Castañeda, J. (2009). *El narco: la guerra fallida*. México: Punto de lectura.

Aguirre, M. E. P. (2015). La teoría del voto económico y la elección presidencial mexicana de 2012. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 14 (1).

Almond, G. y Genco, S. (1999). Nubes, relojes y el estudio de la política. *Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las ciencias políticas*. México: FCE.

Anastasia, F. y Melo, C. (2009). Brasil: dos décadas de democracia. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 29 (2) 275-300.

Anduiza, E. y Bosch, A. (2004). *Comportamiento político electoral*. Barcelona: Ariel Ciencia Política.

Aquino, J.A. (2012). Reelección presidencial y equidad en las campañas presidenciales. En Cuadernos de Capel 57. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29291.pdf

Avendaño, O. (2009). L*a oposición de derecha en Chile. El caso de la UDI en perspectiva comparada*. Ponencia presentada al XXI Congreso Mundial de Ciencia Política. Santiago de Chile.

Azevedo, F. A. (2006). Mídia e democracia no Brasil: relações entre o sistema de mídia e o sistema político. *Opinião Pública*, 12 (1), 88-113.

Baker, W. D. y Oneal, J. R. (2001). Patriotism or opinion leadership? The nature and origins of the "rally'round the flag" effect. *Journal of Conflict Resolution*, 45 (5), 661-687.

Bastidas, S. (2012). México: el sexenio solitario de Felipe Calderón. *Política Exterior*. 26 (48) (julio/agosto).

Beca, J. P. (2008). La duración del período presidencial: Análisis histórico y comparado. *Revista de Derecho*. Año 9, número 9, 47-61. Recuperado de http://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/248/RDD_0718-1167_03_2008_9_art3.pdf?sequence=1

Beltrán, U. (2014). Percepciones económicas retrospectivas y voto por el partido en el poder, 1994-2012. Recuperado de http://www.redalyc.org/html/603/60335405002/

____ (2015). El desacuerdo con los presidentes. En *Nexos*. Recuperado de http://www.nexos.com.mx/?p=24307

Berlemann, M. y Enkelmann, S. (2014). The economic determinants of US presidential approval: A survey. *European Journal of Political Economy*, 36, 41-54.

Bordieu, P. (1972). La opinión Pública no existe. Recuperado de http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu_OPE.pdf

Bosch, A.; Díaz, A.; Riba, C. (1999). Las funciones de popularidad: estado de la cuestión y principales debates. *Reís*, 171-197.

Botero, F.; Losada, R.; Wills, L. (2011). Sistema de partidos en Colombia 1974-2010: ¿la evolución hacia el multipartidismo? En Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg. Borrador de capítulo para el libro *Estabilidad y cambio en los sistemas de partidos en América Latina (1978-2010).*

Brody, R. y Sigelman, L. (1983). Presidential popularity and presidential elections: An update and extension. *Public Opinion Quarterly*, 47 (3), 325-328.

Brody, R. (1991). *Assessing the president: The media, elite opinion, and public support*. Stanford University Press.

Brown, C. (2014). *El desempeño del gobierno de Felipe Calderón y los resultados electorales de 2012*.

Buendía, J. (1996). Economic reform, public opinion, and presidential approval in Mexico, 1988-1993. *Comparative Political Studies*, 29 (5), 566-591.

Buquet, D. y Piñeiro, R. (2014). La consolidación de un nuevo sistema de partidos en Uruguay. *Revista Debates*, 8 (1), 127-148

Buquet, D. (2000). La elección uruguaya después de la reforma electoral de 1997: los cambios que aseguraron la continuidad. Perfiles latinoamericanos, (16).

Cabrera, D. (2010). En defensa de las encuestas. En *POSTdata: Revista de reflexión y análisis político,* 15 (2), 191-216.

Caetano, G. (2005). Introducción general. Marco histórico y cambio político en dos décadas de democracia. De la transición democrática al gobierno de izquierda. *20 años de democracia. Uruguay 1985-2005: miradas múltiples*, 15-74.

Campbell, A.; Converse, P. E.; Miller, W. E.; Stokes, D. E. (1980). *The american voter*. University of Chicago Press.

____ (1960). *The American voter*. New York: John Wiley.

Castell, M. (1997). La Era de la información. Madrid: Alianza.

____ (2012). *Comunicación y poder*. México: Siglo veintiuno editores.

____ (2013). *El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global*. En *C@mbio*, BBVA, 2013.

Cohen, J. E. (1999). Presidential responsiveness and public policy-making: The publics and the policies that presidents choose. University of Michigan Press.

Corbo, D. (2007). La transición de la dictadura a la democracia en Uruguay. Perspectiva comparada sobre los modelos de salida política en el Cono Sur de América Latina. *Humanidades*, año 7, Nº 1, diciembre de 2007.

Contreras, G. (2010). Concertación de Partidos por la Democracia: razones de su éxito y factores de su derrota. *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 145-164.

Converse, P. (2006). The nature of belief systems in mass publics (1964). *Critical Review*, 18: 1-3, 1-74, DOI: 10.1080/08913810608443650

Chasquetti, D. y Buquet, D. (2004). La democracia en Uruguay: una partidocracia de consenso. *Política*, (42).

Chabat, J. (2010). La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor. CIDE. Recuperado de http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/899

Delgado, A. (2016). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas. México: Proceso.

De Paula, A. J. (2013). Os Enigmas da Popularidade Presidencial no Brasil: Economía e Política? Tesis de Maestría (publicada). Universidad de Brasilia. Brasilia.

Downs, A. (1973) Teoría económica de la democracia. España: Aguilar.

Duch, R. M. y Stevenson, R. T. (2008). *The economic vote: How political and economic institutions condition election results*. Cambridge University Press.

Easton, D. (2006). Esquema para el análisis político. España. Madrid: Amorrortur.

Echegaray, F. (1996). ¿Voto económico o referéndum político? Los determinantes de las elecciones presidenciales en América Latina, 1982-1994. *Desarrollo Económico*, 603-619.

España, S. (2002). Una evaluación a las evaluaciones del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle1. *El período del Presidente Frei Ruiz-Tagle: reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista*.

Espinoza, A.; Mauricio, M.; Perelló, L. (2010). Todo cambia: radiografía electoral de Frei y explicaciones de su derrota. *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Estrada, L. (2006). Determinantes y características de los independientes en México. En *Gobierno y Política*, Vol. XIII. Núm.1. I Semestre, 149-176.

Ferro, L. (2006). Democracia y política exterior: Uruguay (1985-2006). *América Latina Hoy*, 44.

Fiorina, M. P. (1981). Retrospective voting in American national elections.

Finkel, S. E. (1993). Reexamining the" minimal effects" model in recent presidential campaigns. *The Journal of Politics*, 55 (1), 1-21.

Garcé, A. y Yaffé, J. (2006). La izquierda uruguaya (1971-2004): ideología, estrategia y programa. *América Latina Hoy*, 44.

Gamboa, R. y Segovia, C. (2006). Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, diciembre 2005-enero 2006. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 26 (1), 84-113. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000100005

Garretón, M. A. (2001). *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina*. CEPAL.

Garretón, M. A. (2002). La transformación de la acción colectiva en América Latina. *Revista de la CEPAL*.

Garretón, M. A. y Garretón, R. (2010). La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 30 (1), 115-148. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2010000100007

Garretón, M. A. (2015). La redemocratización política en Chile transición, inauguración y evolución. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 4 (1).

Garrido, C. (2010). ¿Quién vota por la izquierda? La intención de voto y el desempeño electoral de Jorge Arrate1. *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferen-*

cias políticas de los chilenos. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Goodhart, C. A. E. y Bhansali, R. J. (1970). Political Economy. *Political Studies* 18: 43-106.

González, L. E. (1999). *Los partidos políticos uruguayos en tiempos de cambio*. Fundacion de Cultura Universitaria.

Gramacho, W. (2007). Popularidad gubernamental, economía y partidos políticos en Brasil: Un test crucial para las teorías de las pistas partidistas. Tesis doctoral (publicada). Universidad de Salamanca. Salamanca.

Gronke, P., y Newman, B. (2003). FDR a Clinton, Mueller to ?: Un ensayo de campo sobre la aprobación presidencial. *Investigación política trimestral*, *56* (4), 501-512.

Guedes, B. (2003). Paradigm and Sand Castle. Theory Building and Research Design in Comparative Politics. The University of Michigan Press, Unites States of America.

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (No. 1Habermas). Trotta,

Hernández, A. (2012). *México en llamas: El legado de Calderón*. México: Grijalbo.

Huneeus, C. (2000). Los cambios institucionales al sistema económico durante la transición a la democracia en Chile: del neoliberalismo a la economía social de mercado.

____ (2001). *La derecha en el Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente*. Helen Kellogg Institute for International Studies.

____ (2007). Las consecuencias del caso Pinochet en la política chilena. *Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea*.

Iyengar, S.; Peters, M. D.; Kinder, D. R. (1982). Experimental demonstrations of the "not-so-minimal" consequences of television news programs. *American Political Science Review*, 76 (4), 848-858.

Joignant, A. (2003). La democracia de la indiferencia. Despolitización, desencanto y malestar en el gobierno de Eduardo

Frei Ruiz-Tagle. *El período del Presidente Frei Ruiz-Tagle. Reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista*, 83-106.

Kahneman, D. y Tversky, A. (1979). Prospect Theory*:* An Analysis of Decision Making Under Risk. Econométrica, 47, 263-291.

Kenney, P. J. y Rice, T. W. (1983). Popularity and the Vote: The Gubernatorial Case. *American Politics Quarterly*, 11 (2), 237-241.

Kernell, S. (1977). Presidential popularity and negative voting: An alternative explanation of the midterm congressional decline of the president's party. *American Political Science Review*, 71 (1), 44-66.

____ (1978). Explaining presidential popularity: How ad hoc theorizing, misplaced emphasis, and insufficient care in measuring one's variables refuted common sense and led conventional wisdom down the path of anomalies. *American Political Science Review*, 72 (2), 506-522.

____ (2006). Going public: New strategies of presidential leadership. CQ Press.

Kinder, D. R. y Kiewiet, D. R. (1981). Sociotropic politics: the American case. *British Journal of Political Science*, 11(2), 129-161.

King, Gary C. (1993). The Methodology of Presidential Research. *Researching the Presidency: Vital Questions, New Approaches.* Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Kramer, G. H. (1971). Short-term fluctuations in US voting behavior, 1896–1964. *American political science review*, 65 (1), 131-143.

____ (1983). The ecological fallacy revisited: Aggregate-versus individual-level findings on economics and elections, and sociotropic voting. *American political science review*, 77 (1), 92-111.

Lazarsfeld, P. F.; Berelson, B.; Gaudet, H. (1944). The people's choice.

Lanzaro, J. (1998). La izquierda uruguaya. Entre la oposición y el gobierno. Nueva sociedad Núm.157, septiembre-octubre 1998, 154-165.

____ (2004). La reforma educativa en Uruguay (1995-2000): virtudes y problemas de una iniciativa heterodoxa, CEPAL.

____ (2007). Uruguay: Reformas políticas en la nueva etapa democrática. *Reforma política y electoral en América Latina. México: IDEA-Instituto de Investigaciones Jurídicas,* UNAM.

____ (2013). Continuidad y cambios en una vieja democracia de partidos: Uruguay (1910-2010). *Opinião Pública*, 19 (2), 235-269. https://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762013000200001

____ (2015). Uruguay 2014: elecciones competitivas y partido de izquierda predominante. Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 9 (1), 11-41.

Lewis-Beck, M. S. (1990). *Economics and elections: The major Western democracies*. University of Michigan press.

Lewis-Beck, M.S., y Rice, T. (1982). "Presidential popularity and presidential vote". Public Opinion Quarterly, 46 (4), 534-537.

Lewis-Beck, M. S. y Rice, T. (1984). Forecasting presidential elections: A comparison of naive models. Political Behavior, vol. 6, Núm. 1, 9-21.

Lewis-Beck, M. S. y Paldam, M. (2000). Economic voting: an introduction. *Electoral studies*, *19*(2-3), 113-121.

Lewis-Beck, M. S. y Stegmaier, M. (2000). Economic determinants of electoral outcomes. *Annual review of political science*, 3 (1), 183-219.

Lewis-Beck, M. S. y Tien, C. (2016). The Politica Economy Model: 2016 US Election Forecast, In American Political Sciencie Asociation, october, 661-663.

Lipset, S. M. y Schneider, W. (1983). The confidence gap. *Commentary*, 76 (4), 18-18.

Lipset, S. M. y Rokkan, S. (Eds.). (1967). Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives (Vol. 7). Free press.

López, M. A. y Baeza, J. (2011). Las elecciones chilenas de 2009-10:¿ se derechizó el país?. *América Latina: política y elecciones del bicentenario (2009-2010)*, 277-302.

McGuire, J. (1996). Partidos políticos y democracia en Argentina. *Mainwaring,* Scott, M. y Palermo, V. (2003). La dictadura militar, 1976-1983: del golpe de estado a la restauración democrática, 461. Buenos Aires: Paidós. (Comp.).

Magaloni, B. (1999). Is the PRI fading? Economic performance, electoral accountability, and voting behavior in the 1994 and 1997 elections. Jorge I. Domínguez y Alejandro Poiré [comps.], *Toward Mexico's Democratization: Parties, Campaigns, Elections, and Public Opinion,* London: Routledge.

____ (2006). Voting for autocracy: Hegemonic party survival and its demise in Mexico.

Meyer, J. y Ríos, C. Diálogos y desencuentros sobre seguridad. *José Antonio Meyer Rodríguez,* 97.

Molina, J. E. (2001). Consecuencias políticas del calendario electoral en América Latina: ventajas y desventajas de elecciones simultáneas o separadas para presidente y legislatura. *América Latina Hoy*, 29, 15-29.

Monroe, K. R. (1978). Economic influences on presidential popularity. *Public Opinion Quarterly*, 42 (3), 360-369.

Montero, J. C. (2012). La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública. *Perfiles latinoamericanos*, 20 (39), 7-30.

Moreira, C. (2000). Elecciones en Uruguay 1999: comportamiento electoral y cultura política. En *Ponencia presentada al XXI Congreso de LASA, Miami, mimeo*.

____ (2007). Contexto político y social del Uruguay de la crisis (2000-2004). Aborto en debate, 31.

Morales, M. y Navia, P. (2008). Aprobación al gobierno y a Michelle Bachelet: ¿Dónde está la diferencia? Recuperado

de http://www.icso.cl/images/documentos/encuestaudp/2007/informeyanalisisinterior.pdf#page=25

Morales, M.; Saldaña, J.; ICSO-UDP. (2008). Aprobación presidencial en Chile. Los ricos por Lagos, los pobres por Bachelet. *Documentos trabajo ICSO UDP, Chile 2008: Percepciones y Actitudes Sociales*, 37-45.

Morales, M. y Sánchez, M. J. (2010). La segunda es la vencida: Piñera y sus bases de apoyo. El sismo electoral de 2009. *Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales*.

Morales, M. y Navia, P. (2010). El sismo electoral de 2009. *Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos.* Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Morales, C. (2011). La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, (50).

Morlino, L. (2010). *Introducción a la investigación comparada*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

Moreno, A. y Mendizábal, Y. (2016). *La aprobación presidencial en México y América Latina*. Recuperado de http://www.estepais.com/articulo.php?id=392&t=la-aprobacion-presidencial-en-mexico-y-america-latina

Moreno, A. (2003). *El votante mexicano*. México: Fondo de Cultura Económico.

____ (2009). *La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México*. Porrúa.

Mueller, J. E. (1970). Presidential Popularity from Truman to Johnson 1. *American Political Science Review*, 64 (1), 18-34.

Mueller, J. E. (1973). *War, presidents, and public opinion* (p. 63170). New York: Wiley.

Nannestad, P. y Paldam, M. (1994). The VP-function: A survey of the literature on vote and popularity functions after 25 years. *Public Choice*, 79 (3-4), 213-245.

Navia, P. y Joignant, A. (2000). Las elecciones presidenciales de 1999: la participación electoral y el nuevo votante chileno. *Chile*, 119-144.

Navia, P. (2000). Las presidenciales de 1999 en Chile: ¿Hay un nuevo electorado? *Anuario Social y Político de América Latina.* Número 3 FLACSO. Recuperado de http://patricionavia.com/papers/anuario2000.PDF

Navia, P. y Rojas P. (2008). El efecto de la participación electoral: En las primarias para la elección presidencial. De 1999 en Chile. *Postdata*, (13), 193-222. Recuperado en 29 de octubre de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012008000100008&lng=es&tlng=en.

Navia, P. (2009). Encuestas, desempeño presidencial y preferencias electorales, 1990-2007. En *La sociedad de la opinión. Reflexiones sobre encuestas y cambio político en democracia*. Santiago: Ediciones UDP, p. 113-119.

____ (2009). Encuestas, desempeño presidencial y preferencias electorales, 1990-2007. *La sociedad de la opinión. Reflexiones sobre encuestas y cambio político en democracia.* Santiago: Ediciones UDP.

Navia, P. y Cabezas, J. M. (2010). Aprobación presidencial en el cuatrienio de Bachelet. *Chile 2009: Percepciones y Actitudes Sociales*.

Navia, P. y Morales M. (2010). El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos. Universidad Diego Portales. Santiago.

Neto, F. M. D. R. (2007). La profesionalización de las campañas electorales en Brasil (1989-2006).

Neustadt, R. E. (1991). Presidential power and the modern presidents: The politics of leadership from Roosevelt to Reagan. Simon and Schuster.

Norpoth, H. (1984). Economics, politics, and the cycle of presidential popularity. *Political Behavior*, 6 (3), 253-273.

O'Donell, G. Schmitter, Philippe C. Whitehead, Laurence (comps.) (1988). Transiciones desde un Gobierno Autoritario.

Olmeda, J. y Armesto, M. (2013). Mexico: The Return of the PRI to the Presidency. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 33 (1), 247-267. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2013000100012

Osorio, R. y Schuster, M. (2010). Marco Enríquez-Ominami: el candidato independiente. *El sismo electoral de 2009. Cambio y continuidad en las preferencias políticas de los chilenos.* Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

Pachano, S. (1997). Ecuador: Bucaram,¡ fuera!; Bucaram,¿ fuera?. *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*, *1*, 42-50.

Page, B. I. y Shapiro, R. Y. (2010). *The rational public: Fifty years of trends in Americans' policy preferences*. University of Chicago Press.

Pakulski, J. y Waters, M. (1996). *The death of class*. Sage.

Paldam, M. (1991). How robust is the vote function? A study of seventeen nations over four decades. *Economics and politics: the calculus of support*, 9-31.

____ (2008). Vote and popularity functions. In *Readings in public choice and constitutional political economy,* 533-550. Springer, Boston, MA.

Panebianco, A. (1986). Modelos de partidos. Madrid. Alianza.

Paredes, J. P. (2011). Ciudadanía, participación y democracia. Deuda y déficit en los 20 años de "democracia" en Chile. *Polis. Revista Latinoamericana*, (28).

Pasquino, G. (2005). Sistemas políticos comparados. Argentina. Buenos Aires: Prometeo Libros.

____ (2011). Nuevo Curso de Ciencia Política. México: Fondo de Cultura Económica.

Pérez-Liñán, A. (2002). La reversión del resultado en la doble vuelta electoral: Una evaluación institucional del balotaje. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024466

Pérez-Liñán, A. (2013). Liderazgo presidencial y ciclos de poder en la Argentina democrática. Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 7 (2), 389-399.

Popper, K. (1962). La lógica de la investigación científica. España. Madrid: Tecnos.

Powell Jr, G. B. y Whitten, G. D. (1993). Un análisis transnacional del voto económico: teniendo en cuenta el contexto político. *Revista Americana de Ciencia Política*, 391-414.

Queirolo, R. (2006). Las elecciones uruguayas de 2004: la izquierda como la única oposición creíble. *Colombia internacional*, (64), 34-49.

Quirici, G. (2010). Entre el Estado y el mercado, la gestación de la reforma de 1995: ¿una reforma «a la uruguaya». Recuperado de http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2013/archivos/Mesa_30_Quirici.pdf

Robles, G., Calderón, G. y Magaloni, B. (2013). *Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México* (No. IDB-WP-426). IDB Working Paper Series.

Romero, V. (2000). Impacto de la evaluación de políticas públicas en la aprobación presidencial.

____ (2009). La herencia del presidente: Impacto de la aprobación presidencial en el voto, en *Política y Gobierno*. Volumen XVI. Número 1. I Semestre de 2009.

____ (2017). Impacto de los temas de seguridad pública en la aprobación presidencial. *Política y gobierno*, 20 (3), 139-160.

Roncarolo, F. (1994) Controllare I media. II presidente americano e gli apparati nelle campagne di comunicazione permanente. Milán: Franco Angelli.

Sartori, G. y Morlino, L. (comp.). (1991). Comparación y método comparativo. En *La comparación en las Ciencias Sociales*. España: Alianza Editorial, S.A.

Sartori, G. (1992). Elementos de Teoría Política. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

Sartori, G. (2003). Ingeniería Constitucional Comparada. México: FCE.

____ (2004). Hacia dónde va la ciencia política. En *Política y Gobierno*, Volumen XI, Núm. 2.

Scheufele, D. A. y Tewksbury, D. (2006). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of communication*, 57 (1), 9-20.

Schuman, H. y Presser, S. (1981). Questions and answers: Experiments on question form, wording, and context in attitude surveys. *New York: Academic*.

Serrafero, M. D. (2016). Reelección presidencial, ventajas del candidato e inequidad electoral. En *Academia nacional de ciencias morales y políticas*. Recuperado de https://www.ancmyp.org.ar/user/files/Serrafero.I.16.pdf

Sigelman, L. (1979). Presidential Popularityand Presidential Elections. *Public Opinion Quarterly*, 43 (4), 532-534.

Somuano, M. (2018). Aprobar al presidente. Una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto *Foro Internacional*, 58 (4), 629-670.

Stimson, J. (2004). Tides of Consent: How Opinion Movements Shape American Politics. Cambrigde University Press.

Tagina, M. L. (2008). El rompecabezas de la conducta electoral. Enfoques alternativos y debates actuales. *Anuario de investigaciones*. Departamento de Derecho y Ciencia Política. Universidad Nacional de La Matanza, 119-146.

____ (2013). Los argentinos ante las urnas. Un análisis del comportamiento electoral entre 1984 y 2007. (Tesis doctoral publicada). Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca.

Tanaka, M. (2002). La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo (Vol. 4). Comisión andina de juristas.

Temkin Yedwab, B. y Salazar-Elena, R. (2012). México 2010-2011: los últimos años de una gestión cuestionada. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 32 (1), 193-210.

Trejo, E. A. (2012). Percepción sobre la inseguridad y evaluación del Presidente. *José Antonio Meyer Rodríguez*, 69.

Varas, M. y Baesa, J. (2013). Las elecciones chilenas de 2009-10: ¿se derechizó el país?.

Vázquez, D. y Falleti, V. (2007). Política económica, deslegitimación democrática y reconstrucción social en Argentina. Perfiles latinoamericanos, 14(29), 79-109. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532007000100003&lng=es&tlng=es

Vela, J. P. N. (2013). El liderazgo político en la elección presidencial 2012. *Revista legislativa de estudios sociales y de opinión pública*, 6 (11), 45-85.

Walker, I. (1992). Transición y consolidación democrática en Chile.

Yaffe, J. (2004). Del Frente Amplio a la Nueva Mayoría. La izquierda uruguaya (1971-2004). *Secuencia*, (60), 175.

Iyengar, S.; Peters, M. D.; Kinder, D. R. (1982). Experimental demonstrations of the "not-so-minimal" consequences of television news programs. *American Political Science Review*, 76 (4), 848-858.

Zaller, J. (2014). La naturaleza y los orígenes de la opinión pública. CIS. España.

Zubieta, M. (2010). Voto económico en el Uruguay postdictadura. Recuperado de https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/4964/6/TCP_ZubietaMart%C3%ADn.pdf

Zúñiga, F. y Gutiérrez, C. (2000). Crónica de la elección presidencial en Chile. *Revista de Derecho Político*, (47), 289-307.

Hemerografía

Aninat. C. (13 de noviembre de 2017). El incierto rol de ME-O en el rearme de la centroizquierda. *La Tercera*. Recuperado de http://www2.latercera.com/noticia/incierto-rol-me-rearme-la-centroizquierda/

Aristegui, C. (9 de abril de 2012). Vázquez Mota confía su campaña a los calderonistas. *Aristeguinoticias*. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/0904/lomasdestacado/vazquez-mota-confia-su-campana-a-los-calderonistas/

Beltrán, U. y Cruz, A. (12 de marzo de 2012). Repunta la aprobación a Felipe Calderón en encuesta. 12 de marzo. *Excélsior*. Recuperado en https://www.excelsior.com.mx/2012/03/12/nacional/817645

Carta Paramétrica (3 de marzo de 2010). La aprobación del Tlatoani. *Parametría*. Recuperado de http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4187

Consultora Poliarquía (7 de abril de 2015). Cristina cierra su mandato como la presidenta con mejor imagen desde el retorno a la democracia. *Télam*. Recuperado de http://www.telam.com.ar/notas/201504/100497-cristina-mandato-imagen-presidencial-democracia-encuestas.php

Delgado, A. (17 de noviembre de 2012) El juicio de la historia sobre Calderón y Fox. *Proceso*. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/325535/el-juicio-de-la-historia-sobre-calderon-y-fox

Enciso, A. (27 de marzo de 2012). Denuncian ante la PGR espionaje telefónico a Josefina Vázquez Mota. *La Jornada.* Recuperado de http://www.jornada.com.mx/2012/03/27/politica/004n1pol

García Barzelatto, A. M. (2002). Duración del Mandato Presidencial, Reelección, y Simultaneidad de Elecciones Presidencial y Parlamentarias. *Ius et Praxis*, 8 (1), 549-559. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000100031

Jiménez, H. (7 de julio de 2012). "A JMV la dejaron sola; AN en crisis", Creel. *El Universal*. Recuperado de http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/857703.html

Ipsos-Mora y Araujo. (24 de agosto de 2007). Continúa alta la aprobación del gobierno de Kirchner. *Infobae*. Recuperado de https://www.infobae.com/2007/08/24/333431-continua-alta-la-aprobacion-del-gobierno-kirchner/

Mauleón, H. (1 de junio de 2012). Josefina Vázquez Mota: Peleando a la contra. *Nexos*. Recuperado de https://www.nexos.com.mx/?p=14837

Mora, C. (20 de septiembre de 2017). "Cementazo" no afectó popularidad de presidente. Un 55% de los costarricenses respalda su labor. *Diario Extra*. Recuperado de http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/342931/cementazo-no-afecto-popularidad-del-presidente-

Moreno, A. (12 de agosto de 2012) El desliz de las encuestas. *Reforma*.

Oviedo, E. (8 de julio de 2013). Laura Chinchilla saca peor nota de los últimos 6 gobiernos. *La Nación*. Recuperado de https://www.nacion.com/el-pais/politica/laura-chinchilla-saca-peor-nota-de-los-ultimos-6-gobiernos/EG2G-QPA5F5FRBBWCLWUW2TYPHA/story/

Rivapalacio, R. (1 de Julio de 2012). ¿Por qué perdió Vázquez Mota? *Eje Central*. Recuperado de https://elecciones-2012mx.wordpress.com/2012/07/01/por-que-perdio-vazquez-mota-raymundo-riva-palacio-eje-central/

Sartori, G. (2014). El eclipse del homo sapiens. En *El Universal*. México. Recuperado de http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-eclipse-del-homo-sapiens/

Silva-Herzog, J. (16 de abril de 2012). A la deriva. *El siglo de Torreón*. Recuperado de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/730061.a-la-deriva.html

Wurgaft, R. (29 de marzo de 2011).La imparable popularidad de Cristina Fernández. *El mundo.es*. Recuperado de https://www.elmundo.es/america/2011/03/27/argentina/1301261601.html

Casas encuestadoras

Datafolha. Opinión Pública. Evaluación de Presidentes. Recuperado de http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/indice-8.shtml

Equipos Mori. Recuperado de http://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/evaluacion-de-gestion/

Encuesta CEP. Recuperado de https://www.cepchile.cl/cep/site/edic/base/port/encuestacep.html

Encuesta Nacional 2012, Gabinete de Comunicación Estratégica. Recuperado de http://gabinete.mx/projects/encuesta-nacional-2012/

Encuestas Nacionales en vivienda 2006-2012, Parametría. Recuperado en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4407

Encuestas Nacionales Gallup Pol, Colombia. Recuperado de http://e-lecciones.net/archivos/loultimo/ColombiaGallup2.pdf

Encuesta Nacional Gallup-Poll. Recuperado de https://www.minuto30.com/gallup-poll-la-aprobacion-del-presidente-santos-no-repunta/509585/

Encuesta nacional de Opinión Pública Cid Gallup, Costa Rica. Recuperado de https://es.scribd.com/document/253951674/Abel-Pacheco-CID-Gallup-Worst-Evaluated-President

Encuesta nacional Cid Gallup de Opinión Pública. Recuperado de www.cidgallup.com/en/virtual-library/download/453-

Mora y Araujo, M. (2010). Información de Opinión Pública. Recuperado de http://www.ieral.org/images_db/noticias_archivos/1629.pdf

Mora y Araujo, M. (2013). El comercio y el contexto político económico. Recuperado de https://camcomcba.com.ar/sites/default/files/Presentaci%C3%B3n%20Manuel%20Mora%20y%20Araujo.pdf

Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina
se terminó de editar en septiembre de 2021
en la Unidad de Apoyo Editorial del CUCSH

Diagramación: Margarita González R.
Corrección: Raúl Ramírez García y
María del Carmen Remigio.
Diseño de portada: Gabriela P. Campos Jiménez

Se editó un ejemplar.

¿Es robusta la asociación de la popularidad presidencial con el éxito o derrota del partido en el gobierno? ¿Cuál criterio permite clasificar a los presidentes en mandatarios con aprobación alta, intermedia o baja? ¿Por qué en unos casos la popularidad es decisiva en el desenlace electoral y en otros no? Con base a la comprobada capacidad anticipativa de la popularidad presidencial, ¿corresponde una reevaluación del potencial explicativo de las teorías del voto?

El análisis de treinta y ocho comicios presidenciales competitivos celebrados en siete países de la región, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, permitió al autor descifrar esos enigmas. Las conclusiones a las que arriba tienen implicaciones investigativas y aplicativas de interés para la Ciencia Política.

ISBN 978-607-571-212-3

CUCSH
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades